

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Facultad de Derecho y Criminología

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas



**“INAPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD Y
EXISTENCIA DE DESPROPORCIONALIDAD EN LAS
SANCIONES DE LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO EN LA
LEGISLACIÓN PENAL BOLIVIANA”**

MSc. César Suárez Saavedra

Asesor: Dr. José Luís Prado Maillard

Como requisito parcial para obtener el Grado de DOCTOR EN DERECHO

Monterrey – México
Agosto, 2006

MSC. CÉSAR SUÁREZ SAAVEDRA

**“INAPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD Y
EXISTENCIA DE DESPROPORCIONALIDAD EN LAS
SANCIONES DE LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO EN LA
LEGISLACIÓN PENAL BOLIVIANA”**

*Tesis Doctoral que se presenta a la
Universidad Autónoma de Nuevo León -
México para optar el título de Doctor en
Derecho*

**Monterrey – México
Agosto, 2006**

DEDICATORIA

*A todos los condenados por
narcotráfico en forma injusta en
Bolivia.*

AGRADECIMIENTOS

A las Autoridades Académicas de la Universidad de Nuevo León de México y a los Sres. Docentes de esa prestigiosa Universidad quienes con verdadera entrega profesional en el campo docente y espíritu de colaboración se trasladaron a tierras Bolivianas a impartir sus conocimientos de muy alto nivel

CONTENIDO

DEDICATORIA	I
AGRADECIMIENTO	II
CONTENIDO	III
RESUMEN	XII
INTRODUCCIÓN	1
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
2. OBJETIVOS	4
2.1. OBJETIVO GENERAL	4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
3. IDEA A DEFENDER	5
4. MÉTODOS A UTILIZAR	5
5. TÉCNICAS A UTILIZAR	6

CAPÍTULO I

MARCO CONTEXTUAL

NOTAS DOCTRINALES REFERENTES AL DELITO DE NARCOTRÁFICO

Y A LA PENOLOGÍA	7
1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DELITO DE NARCOTRÁFICO.....	7
1.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS PREHISPÁNICOS	7
1.1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN LA REPUBLICA	8

1.1.3. EL CAMINO DE LA COCAÍNA	9
1.1.4. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO	10
1.2. DEFINICIÓN DE LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO	13
1.3. CONCEPTO DE PENA	17
1.3.1. FINALIDAD DE LA PENA	17
1.3.2. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA	18
1.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA PENA	19
1.3.4. CRITERIOS DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA POR EL JUEZ.....	20
1.3.5. CARACTERES DE LAS PENAS QUE SON NECESARIAS PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN.....	20
1.3.6. EL CONOCIMIENTO DEL IMPUTADO.....	21
1.4. PENOLOGÍA.....	21
1.4.1. SU NOCIÓN.....	21
1.4.2. CIENCIA PENITENCIARIA.....	22
1.4.3. DERECHO PENITENCIARIO.....	24
1.4.4. NOTAS	24

CAPITULO II

PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO PENAL, EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y TAXATIVIDAD EN LA FORMULACIÓN TÍPICA Y LA SEGURIDAD JURÍDICA	28
2.1. INTRODUCCIÓN	28
2.2. PRINCIPIO DE LEGALIDAD.....	28
2.2.1. CONTENIDO Y FUNDAMENTO.....	28
2.2.2. PRINCIPIO GENERAL DE LEGALIDAD.....	30
2.2.3. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL.....	32
2.2.4. FUNCIONES.....	35
2.3. PRINCIPIO DE DETERMINACIÓN, DE CERTEZA O TAXATIVIDAD.....	37
2.4. EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD.....	43
2.5. EL PRINCIPIO DE INOCENCIA.....	44
2.6. APRECIACIÓN PSICO-SOCIAL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.....	45
2.7. ASPECTOS TEÓRICO DOCTRINALES DE LA ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL.....	47
2.7.1. EL TIPO PENAL.....	47
2.7.2. FUNCIONES DEL TIPO PENAL.....	49
2.7.3. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL.....	53
2.7.4. LA CONDUCTA TÍPICA.....	54
2.7.5. LOS SUJETOS DE LA CONDUCTA TÍPICA.....	57
2.7.6. OBJETO.....	60

2.7.6.1.OBJETO JURÍDICO.....	60
2.7.6.2. OBJETO MATERIAL.....	63
2.7.7. ELEMENTOS DESCRIPTIVOS Y ELEMENTOS NORMATIVOS EN LA FORMULACIÓN DEL TIPO.....	65
2.7.7.1.ELEMENTOS DESCRIPTIVOS.....	66
2.7.7.2.ELEMENTOS NORMATIVOS.....	67
2.7.7.3. ELEMENTO SUBJETIVO.....	69
2.7.8. EL NACIMIENTO DEL TIPO.....	70
2.7.8.1.GENERALIDADES.....	70
2.7.9. COMPOSICIÓN GRAMATICAL DE LAS FIGURAS TÍPICAS..	74
2.7.9.1.ESTRUCTURA ORACIONAL Y ESTRUCTURA TÍPICA.....	75
2.7.9.2.EL VERBO RECTOR EN LA SINTAXIS DEL TIPO.....	80

CAPITULO III

LOS TIPOS PENALES DE LA LEY N° 1008 EN LA LEGISLACIÓN PENAL BOLIVIANA Y EL DELITO DE NARCOTRÁFICO EN EL DERECHO COMPARADO.....	82
3.1. TIPIFICACIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE NARCOTRÁFICO EN BOLIVIA.....	82
3.2. BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS POR EL DERECHO PENAL.....	106
3.3. ANÁLISIS DE LA LEY 1008.....	106

3.3.1. FALTA DE PROPORCIONALIDAD DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS.....	114
3.4. ANÁLISIS DE RESOLUCIONES JUDICIALES PRONUNCIADAS EN PROCESOS POR DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY No. 1008 EN CHUQUISACA.....	119
3.4.1. TRIBUNAL DE SENTENCIA No. 1 (ver Anexo 4)	119
3.4.1.1.SENTENCIAS PRONUNCIADAS EN PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS.....	121
3.4.2. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN No. 1 (ver Anexo 6).....	122
3.4.3. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN No. 2 (ver Anexo 7).....	127

CAPITULO IV

EL DELITO DE NARCOTRÁFICO EN EL DERECHO COMPARADO.....	129
4.1. MODELO HOLANDES.....	129
4.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES.....	129
4.1.2. BASE LEGAL.....	130
4.1.3. CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES.....	132
4.2. NORMATIVA PENAL DE LA REPUBLICA DE CHILE.....	135
4.2.1. RESPECTO A LA SIEMBRA SEÑALA.....	137
4.3. NORMATIVA PENAL EN LA REPUBLICA DE LA ARGENTINA.....	139

4.4. NORMATIVA PENAL EN LA REPUBLICA DE VENEZUELA...	143
4.5. NORMATIVA PENAL EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA DECRETO NÚMERO 48-92.....	145

CAPÍTULO V

MODELO TEÓRICO

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ILÍCITOS VINCULADOS CON EL NARCOTRÁFICO.....	169
5.1. IMPORTANCIA DE LA MODIFICACIÓN DE LOS TIPOS PENALES.....	169
5.1.1. REFORMULAR LOS TIPOS PENALES PARA QUE EXISTA COHERENCIA EN SUS SANCIONES.....	170
5.1.2. REFORMULAR LAS SANCIONES APLICANDO EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.....	171
5.2. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ESPECÍFICA A LA NORMATIVA SUSTANTIVA.....	173
5.2.1. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA PARTE PROCEDIMENTAL (LEY 1970).....	176
5.2.2. LA PARTE SUSTANTIVA DEL LA LEY 1.008 DEBE INCORPORARSE COMO CAPITULO ESPECIAL DEL CÓDIGO PENAL.....	178

CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	179
--	------------

6.1. CONCLUSIONES.....	179
-------------------------------	------------

6.1.1. ARRIBÁNDOSE A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES ESPECÍFICAS.....	181
--	------------

6.2. RECOMENDACIONES.....	185
----------------------------------	------------

BIBLIOGRAFÍA.....	188
--------------------------	------------

ANEXO 1

SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA N° 1 EN DELITOS DE LA LEY 1008.....	195
---	------------

ANEXO 2

SENTENCIAS PRONUNCIADAS EN EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 1ro EN LO PENAL EN DELITOS DE LA LEY 1008.....	196
--	------------

ANEXO N° 3

SENTENCIAS PRONUNCIADAS EN EL JUZGADO 2° DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL EN DELITOS DE LA LEY 1008.....	202
---	------------

ANEXO N° 4.....	204
------------------------	------------

ANEXO 5

CUADRO DE DIFERENCIAS DE DROGAS DURAS Y DROGAS BLANDAS DEL MODELO HOLANDES.....	210
--	------------

ANEXO 6

CUADRO DE DIFERENCIAS DE PENAS DE DROGAS DURAS Y BLANDAS DEL MODELO HOLANDES.....	211
--	------------

ANEXO 7

MAPA Y GEOPOLÍTICA DE LA COCAINA.....	212
--	------------

ANEXO 8

II. ESTADÍSTICAS DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO (FELCN): GESTIONES 2002 – 2005.....	214
---	------------

ANEXO 9

Operativos realizados por gestión, FELCN 2000 – 2002.....	217
--	------------

ANEXO 10

Actividades llevadas a cabo por gestión FELCN, 2002 – 2004.....	218
--	------------

ANEXO 11

Operativos realizados por gestión, FELCN 2002 – 2004.....	219
--	------------

ANEXO 12

Aprehendidos por gestión FELCN, 2003 – 2005.....	221
---	------------

ANEXO 13

Aprehendidos y droga Incautada por mes, FELCN 2005.....	222
--	------------

ANEXO 14

Operativos importantes realizados por mes, FELCN 2004	224
--	------------

ANEXO 15

Personas aprehendidas por mes, FELCN 2005.....	225
---	------------

ANEXO 16

Droga incautada (grs.) por mes, FELCN 2004.....	226
--	------------

ANEXO 17

Personas aprehendidas por ocupación, FELCN 2004.....	227
---	------------

ANEXO 18

Personas aprehendidas por edades, FELCN 2003.....	228
--	------------

ANEXO 19

Personas aprehendidas por sexo, FELCN 2003.....	229
--	------------

ANEXO 20

Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas	
Ley N° 1008 de 19 de Julio de 1988.....	230

RESUMEN

El presente trabajo de Investigación trata de demostrar que las sanciones penales en materia de narcotráfico en Bolivia implícitas en la Ley N° 1008 requieren de una mejor aplicación del PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD en los tipos penales referentes al narcotráfico, para evitar la inseguridad jurídica que actualmente en nuestra sociedad se esta viviendo, por otra parte demostrará que la severidad de las sanciones penales en materia de narcotráfico no han logrado la prevención de estos delitos, al contrario el índice de criminalidad referente al tema de narcotráfico ha ido en constante asenso en Bolivia.

En base al estudio del derecho comparado se establece que no existe una adecuada técnica legislativa de redacción de los tipos penales, existiendo en algunos casos diferencias abismales en cuanto a las sanciones de alguno de los tipos penales inmersos en la parte sustantiva de la todavía vigente Ley N° 1008.

Por lo que se propone esencialmente realizar una redefinición lógica y técnica que sea coherente en materia legislativa respecto a la proporcionalidad en la penalidad de los delitos de narcotráfico en Bolivia. Todas estas modificaciones deben estar realizadas en apego al principio de proporcionalidad que nuestro Derecho Penal (parte general) nos propone.

Para una recomendación seria, en el presente trabajo no se ha descuidado partir del estudio de las definiciones más esenciales de lo que se entiende por narcotráfico, como también revisar en forma necesaria los antecedentes legislativos del consumo de sustancias controladas, además se estudia definiciones importantes referentes al Tipo, su nacimiento y su estructura, posteriormente se efectúa un análisis de antecedentes históricos referentes al Narcotráfico.

Se sugiere también como producto de esta investigación la utilización de verbos esenciales en la descripción de las conductas que se consideran antijurídicas, así como la eliminación de la analogía que todavía en el siglo XXI supervive en los tipos penales de la Ley N° 1008.

Posteriormente se efectúa la propuesta plasmada en un Proyecto de modificación a la norma penal sustantiva proponiendo la modificación de tipos penales en la Ley N° 1008 que carecen de aplicación del principio de taxatividad, a efectos de alcanzar la seguridad jurídica que es vulnerada hoy en día por dicha Ley y alcanzar la justicia en su sancionar dando como resultado la constitucionalidad de sus normas.

INTRODUCCIÓN

La Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, puesta en vigor desde el 22 de julio de 1988, regula el régimen de la coca, señalando jurídicamente su naturaleza, las áreas lícitas de cultivo, producción, circulación y comercialización. Asimismo, determina el desarrollo alternativo y la sustitución de los cultivos de la hoja de coca. Establece las formas de control, focalización, y regulación de la siembra, cultivo, cosecha, recolección, comercialización distribución expendio, uso, tenencia, de plantas o partes de plantas que tengan materias primas para la producción de sustancias controladas.

Determina las normas relativas para la prevención y represión de la siembra, cosecha cultivo, colecta de plantas o partes de plantas controladas, fabricación, tráfico, consumo, administración, suministro, de sustancias controladas. Prevé y sanciona la comisión de delitos relativos al narcotráfico. Señala el procedimiento para la imposición de las sanciones emergentes de la comisión de hechos punibles.

Establece las normas relativas al tratamiento, rehabilitación reinserción social, asimismo, la educación preventiva dirigido a prevenir el uso indebido de drogas.

Hoy en día, nuestra sociedad esta siendo afectada por la desproporcionalidad en la penalidad de los tipos penales referentes a la materia de Narcotráfico que actualmente están inmersos en la Ley N° 1008 (Ley del Régimen de la Coca Sustancias Controladas). Esta desproporcionalidad en su sancionar, esta generando una gran inseguridad jurídica, teniendo como resultado la desconfianza de nuestra población en nuestro sistema jurídico, por lo tanto es deber nuestro el brindar soluciones a tal problema, que tiene ya varios antecedentes, críticas etc. Hablar solo de desproporcionalidad de sus sanciones, es tocar un solo un aspecto de los varios que posee dicha Ley 1008. Pues también se da la presencia de tipos penales que son inconstitucionales.

Refiriéndonos a aquellos tipos que son desproporcionales en su sancionar, se hace alusión a uno de ellos, como los es el de sancionar a la fase del “iter criminis” como la asociación delictuosa y confabulación, tipificada en el Art. 53 de la Ley 1008 en donde su sancionar contiene demasiada severidad y una agravante innecesaria además que no responde a lo que especifica el Principio de Proporcionalidad que es una de las características de la pena, pues de acuerdo a este principio, el sancionar de dicho tipo penal no cumple con la gravedad del delito y por lo tanto la sanción es injusta, además que la severidad de dicho tipo penal no ha logrado la prevención necesaria que perseguía, esto tomando en cuenta el análisis de diferentes cuadros estadísticos referidos al mismo y además al error que ha incurrido el legislador por cuanto el delito de asociación delictuosa se convierte en un tipo penal independiente apartándose de las formas de participación criminal. El análisis de este importante

artículo se lo realiza en el Capítulo Segundo (Los Tipos penales de la Ley N° 1008 en la Legislación Penal Boliviana y el delito de Narcotráfico en el Derecho Comparado) de la Tesis, juntamente con otros tipos penales que se tiene la necesidad de modificarlos una vez que se realice dicho análisis.

Es evidente la existencia de tipos penales que carecen de proporcionalidad en su manera de sancionar, por lo que se propone realizar una modificación de aquellos tipos penales que verdaderamente requieran de una mayor proporcionalidad en la penalidad de sus sanciones y de aquellos que vayan en contra de nuestra Constitución Política del Estado.

Tales propuestas se realizan en el Capítulo Tercero (Propuesta de Modificación de los Ilícitos vinculados con el Narcotráfico.) con las especificaciones pertinentes, apuntando a que dicho trabajo sea verdaderamente útil para cambiar la perspectiva que tiene la sociedad de nuestro sistema jurídico.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Falta de claridad y desproporcionalidad en las penas respecto de los tipos penales relativos al narcotráfico en la Legislación Penal Boliviana, que dan como consecuencia, sentencias injustas e inseguridad jurídica para todos los ciudadanos.

2. OBJETIVOS:

2.1. OBJETIVO GENERAL

“Demostrar la falta de taxatividad en los tipos penales en la Ley Penal N° 1.008 que rige materia de narcotráfico en Bolivia, así como la desproporcionalidad de sus sanciones, que dan como consecuencia existencia de inseguridad jurídica para todos los ciudadanos”

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar por medio de un estudio crítico de la Ley N° 1008 que en Bolivia la fase intermedia del “iter-criminis” como la asociación delictuosa y la confabulación son sancionadas penalmente en materia de Narcotráfico.
- Formular cuadros comparativos respecto a la coherencia y proporcionalidad de las sanciones relativas al narcotráfico en el Derecho Comparado.
- Demostrar “técnicamente” que algunos tipos penales de la Ley N° 1008 presumen la culpabilidad de las personas.

- Analizar diferentes cuadros estadísticos que demuestren que las sanciones penales en materia de narcotráfico no han logrado la prevención de estos delitos.

3. IDEA A DEFENDER:

Las sanciones penales en materia de narcotráfico en Bolivia deben reformularse técnicamente a efectos de ser claras, comprensibles y proporcionales en su sancionar respecto al hecho delictivo que se juzga.

4. MÉTODOS A UTILIZAR:

- **MÉTODO TEÓRICO PRÁCTICO.-** En vista de las necesarias conceptualizaciones, fundamentaciones y análisis, se utilizarán en gran parte del trabajo de investigación.
- **MÉTODO EXEGETICO ANALITICO.-** Sobre todo será necesario utilizar en el análisis técnico jurídico de la Ley N° 1008 y sus antecedentes legislativos, así como en el Derecho Comparado.

- **MÉTODOS INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.-** De la misma manera para el estudio y análisis del aspecto político y jurídico del tema, se utilizarán ambos métodos de acuerdo a los capítulos indicados.
- **MÉTODO HISTÓRICO.-** En los antecedentes legislativos y su connotación política en el país.

5. TÉCNICAS A UTILIZAR:

- **INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA:** En bibliotecas, librerías, hemerotecas, recapitulaciones bibliográficas, red Internet de acuerdo a la bibliografía encontrada.
- **APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS.-** Debidamente elaborados para aplicar a Juristas destacados, políticos, periodistas y especialistas en el tema.

CAPÍTULO I

MARCO CONTEXTUAL

NOTAS DOCTRINALES REFERENTES AL DELITO DE NARCOTRÁFICO Y A LA PENOLOGÍA

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DELITO DE NARCOTRÁFICO.

1.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS PREHISPÁNICOS.

Desde hace 2000 años ha existido un uso tradicional, ritual adherido culturalmente al consumo de las hojas de coca en la región andina (uso social y cultural) La Corona Española trato de erradicar el cultivo de la hoja de coca en el

Perú a partir de 1571 (Virrey Toledo) y lo pudo hacer exitosamente en el territorio del actual Ecuador, pero a medida que se acercaba a los centros económicos (mineros) del sur del Perú y de Bolivia la coca se comenzó a utilizar como elemento de pago y para permitir a los trabajadores mineros y agrarios subsistir y resistir los embates de la naturaleza del trabajo y de la altura. Se tiene referencias que el Virrey Toledo en 1517 dispuso la erradicación de los cultivos de coca con penas de ser arrancados, quemados o desterrados.¹

1.1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN LA REPUBLICA.

Esta forma de explotación persistió en la República y en países vecinos hasta hace unos 50 años. Todo esto determinó una cierta ambigüedad en la actitud inicial y cultural de la población boliviana hacia el problema de las drogas (extensión de cultivos de coca). El uso del clorhidrato de cocaína a comienzos del siglo XX, creyéndose que tenía propiedades curativas excepcionales, comienza a crear una distorsión de sus patrones antropológicos e históricos, mas aún cuando su comercialización es ilegal y se introduce en Bolivia a comienzos de los años 80 el uso de pasta básica de cocaína "crack", "bazuco" con enorme capacidad adictiva.²

¹ HERRERA AÑEZ, Williams, El milenario Cultivo de la Coca, La Paz, Ed. Sirena, 1991, Pág. 7

² AÑEZ RIBERA, Lucio; Antecedentes Históricos de la Legislación de la Coca, La Paz, Ed. Diagrama, 1991, Pág. Donde realiza todo un historial del delito de Narcotráfico desde lo prehispánico hasta llegar a los antecedentes que se mencionan en este punto, Antecedentes Históricos del Delito de Narcotráfico en la República.

Este proceso se agrava por la apertura de la selva boliviana, la falta de control del Gobierno en esas zonas, la afluencia de los campesinos luego de la reforma agraria, la caída de los precios de productos tradicionales en el mercado internacional, la demanda por el clorhidrato de cocaína y la acción de los narcotraficantes, fundamentalmente colombianos y por la alianza coyuntural entre los narcotraficantes.

El uso de las hojas de coca para producir sustancias ilegales (particularmente en la zona de selva y el Chapare), tales como la pasta básica de cocaína ha tenido un impacto negativo en la ecología, economía, salud y política boliviana, así como en las relaciones internacionales del país, convirtiéndose en una seria amenaza para la integridad y estabilidad del mismo.

1.1.3. EL CAMINO DE LA COCAÍNA

El consumo de la cocaína como droga se extendió en Europa y Estados Unidos en la primera década del siglo diecinueve, para luego casi desaparecer, aumentando de manera alarmante a partir de 1960. A partir de esos años ya se puede hablar de una estructura organizada de fabricación, transporte y comercio de la cocaína.

A grandes rasgos, la vía del Narcotráfico es la siguiente: La hoja de coca se cultiva en Perú y Bolivia y en menor cantidad, en Ecuador. Mediante un proceso relativamente sencillo se transforma en pasta de sulfato de coca. Dicha pasta se transporta clandestinamente a Brasil y (sobre todo) Colombia, donde se transforma en cocaína pura. De allí saldrá hacia los mercados consumidores, principalmente a los Estados Unidos por vía Miami y Nueva York.

Este comercio mueve unas cantidades increíbles de droga, generando fabulosos beneficios: Con 110 Kg. de hojas de coca se obtiene 1 Kg. de sulfato de coca, por el cual los campesinos reciben aproximadamente 5.000 dólares. En los laboratorios brasileños y colombianos el sulfato se transforma en clorhidrato, ascendiendo su valor a 15.000 dólares o más.

Esta cocaína pura se vende a los mayoristas americanos a un precio que oscila entre los 40.000 y los 60.000 dólares. Los traficantes estadounidenses adulteran la droga, mezclándola con sustancias tales como la lactosa, anfetaminas, talco, leche en polvo, etc. hasta que el producto final no contiene más que un 15% de cocaína pura. El Kg. original de sulfato de coca que salió de Bolivia o Perú vale ahora entre 200.000 y 300.000 dólares. En otras palabras, los traficantes norteamericanos obtienen un beneficio con la droga del 400% (nota 1).

1.1.4. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO:

A decir de William Herrera Añez³, aunque somos milenarios cultivadores de coca, en Bolivia no se producía cocaína hasta 1930 y 1960, respectivamente; sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas, en 1948 realizó una reunión para determinar las sustancias toxicológicas porque ya se consumía en Europa y posteriormente en los EE.UU.

En 1953, la ONU aprueba un Protocolo para eliminar en 15 años el consumo de opio y su tráfico. En cumplimiento del inciso e) de la parte segunda del artículo 49 de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1972, se logró el compromiso de Bolivia y Perú para erradicar los cultivos de coca y prohibir el “acullico” (proceso de masticación de la hoja de coca).

1.4.-ANTECEDENTES LEGISLATIVOS: Siempre siguiendo al Autor indicado, los antecedentes son la reunión de Shangai de 1909, los Convenios de 1912 y 1920 y la Segunda Convención Internacional del Opio de 1925. Es importante subrayar estos antecedentes, porque las disposiciones legales existentes han sido siempre una

³ HERRERA AÑEZ, Williams: La Despenalización del Narcotráfico, Ed. Sirena, Santa Cruz Bolivia, 1996
Pág. 36.

imposición internacional, primero de la ONU y en los últimos tiempos directamente de los Estados Unidos.

El D.L. 4291, de 03 de enero de 1956, tipifica a las drogas como delitos contra la salud del pueblo.

Róger Pando, ex-subsecretario de Justicia de Bolivia, estableció que: *"La Ley de 10 de enero de 1962 es el primer antecedente histórico de la Ley 1008, pues determina tipos penales, configura al delito de tráfico de estupefacientes y establece penas y medidas de seguridad diferentes de las existentes en el Código Penal. Esta norma tuvo vigencia durante algo más de 10 años y sólo es derogado cuando en 1973, las comisiones constituidas años atrás para la modernización de nuestras leyes empiezan a publicar sus trabajos; uno de estos, da origen al D.L. 11245 de 20 de diciembre de 1973, que se constituye en el primer antecedente del capítulo referido al régimen de la coca en la Ley 1008; De acuerdo con la corriente iniciada por la ley 1962, se criminaliza conductas humanas como la siembra de hoja de coca, la tenencia, el suministro, el transporte, el tráfico, la administración, el suministro de estupefacientes establece además penas severas y limitantes en el Código Penal y su procedimiento, tales como la prohibición del beneficio de libertad provisional, la inadmisibilidad de excepciones, cuestiones previas y prejudiciales; no reconoce fueros especiales y prohíbe el indulto y la rebaja de la pena "*⁴

⁴ HERRERA AÑEZ, Williams: La Despenalización del Narcotráfico, Ed. Sirena, Santa Cruz Bolivia, 1996
Pág. 37.

La controvertida Ley 1008, no es la primera disposición legal, sino la última que existe hasta el momento. Esta Ley ha sido censurada por la mayoría de los dirigentes políticos, incluyendo importantes funcionarios de la Embajada americana, que buscan su reforma para adecuarla a nuestra realidad. Contrasta igualmente con la **"humanización del derecho penal"** y los convenios, pactos y recomendaciones de las organizaciones internacionales.

1.2. DEFINICIÓN DE LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO.

El tráfico de sustancias controladas siguiendo a Rivera Ibáñez José María ⁵ es un delito de peligro por poner en riesgo el bien jurídico protegido en vista de que puede producir daño no sólo al que consume, sino a sus descendientes y amenaza a toda la sociedad.

Por otra parte el Dr. Fernando Villamor Lucía ⁶ define a las **sustancias controladas** como, las sustancias peligrosas o fiscalizadas, los fármacos o drogas naturales o sintéticas consignadas en las listas I, II, III, IV Y V del anexo de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas y en la que en el futuro figuren en las listas oficiales del Ministerio de Salud Pública. Por **droga o fármaco**, ha de entenderse *“toda sustancia capaz de alterar las estructuras o las funciones*

⁵ RIVERA, IBÁÑEZ, José María: Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, Ed. Jurídica “Zegada”, La Paz Bolivia, 1993, 366 Págs.

⁶ VILLAMOR LUCÍA, Fernando: Derecho Penal Boliviano Parte General, Tomo II, Págs. 121, 122.

corporales, psíquicas., fisiológicas, y/o biológicas, ocasionen o no dependencia y/o tolerancia”. La ley 1008 define la fármaco dependencia o dependencia química como “el estado psíquico y/o físico, debido a la interacción entre el ser humano y la droga, natural o sintética que se caracteriza por alteraciones del comportamiento y otras reacciones causadas por la necesidad y el impulso de ingerir la droga natural o sintética, en forma continua o periódica, con objeto de volver a experimentar sus efectos y a veces para evitar el malestar producido por la privación de la misma.”

Dependencia Física, *“Es el estado de adaptación a la droga, que cuando se suspende su administración, provoca perturbaciones físicas y/o corporales.”*

Dependencia Psíquica, *“Es el estado en que una droga produce una sensación de satisfacción y un impulso psíquico que exige la administración periódica o continua de la misma por el placer que causa o para evitar el malestar.”*

Respecto a al **tráfico ilícito de drogas**, ⁷Villamor Lucía señala: hace alusión al artículo 48 de la ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de la siguiente manera: TRÁFICO.- Art.48. *“El que traficare con sustancias controladas será sancionado con presidio de diez a veinticinco años y diez mil a veinte mil días multa”.*

⁷ VILLAMOR LUCÍA, Fernando: Derecho Penal Boliviano Parte General, Tomo II, Págs. 123, 124.

Constituye circunstancia agravante, el tráfico de sustancias controladas en volúmenes mayores. Este artículo comprende toda conducta contemplada en la definición de tráfico dada en el inciso m) del Art. 33, de la Ley 1008.

La Ley entiende como tráfico ilícito, todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título; financiar actividades contrarias a las disposiciones de la Ley o de otras normas jurídicas.

Este tipo penal, exige una valoración y discriminación de la conducta del *sujeto activo* para establecer con precisión que tipo de infracción ha cometido, habida cuenta que varía la penalidad, con referencia, por ejemplo, a la posesión. No considero que la persona que busca la sustancia peligrosa para su consumo y posea ésta ya sea a causa de una transacción a título gratuito u oneroso, deba ser considerada como traficante. Por ello el juzgador deberá hacer una valoración para establecer la culpabilidad. Aquí se trata de determinar la voluntad final del agente. Clara aplicación de la teoría de la acción final.

Pese a que el término tráfico involucra una serie de conductas que van desde el cultivo hasta el transporte se ha considerado necesario insertar este tipo penal en el catálogo de delitos, porque pueden existir algunos casos en los cuales se establezca un puente o vacío entre dos tipificaciones. Por ejemplo, el caso del que tiene en su

poder unos gramos de droga, pero no con la finalidad de consumo, sino para mostrar la calidad de mercancía que trata de vender. En este caso, si bien puede llegar a determinarse que es comercialización, sin embargo, se trata de un caso típico de tráfico. Existe otra consideración más, el ejemplo del que ni siquiera tiene la muestra de droga, pero sin embargo realiza todas las transacciones para que se produzca la entrega de ésta y el dinero.

La Ley prevé este hecho que el tráfico se realiza en volúmenes mayores. Este caso constituye una agravante específica.

Sujeto activo: Es toda persona que trafique y que realice cualesquiera de las modalidades o clases de conductas comprendidas en la definición del inciso m) del Artículo 33 de la Ley 1.008. (Esta artículo en su inciso m) señala, “Se entiende por tráfico ilícito de sustancias controladas todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título; financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas.”

Sujeto Pasivo: Cualquier persona, en especial los sectores más vulnerables: la juventud y la niñez, y la sociedad en su conjunto.

Sanción: Al autor se lo condena con la pena de presidio de diez a veinticinco años y diez mil a veinte mil días multa. Que en buen romance quiere decir que los

días multa convertidos a reclusión hubieran ascendido a de 27 años 39 días y 54 años y 79 días de prisión y en caso de circunstancia agravante si el tráfico se hubiera realizado en cantidades mayores superaría los treinta años de presidio mostrando claramente la inconstitucionalidad de la sanción (la Constitución Política del Estado Boliviano señala como pena máxima 30 años de presidio ni un día más). Hoy en día esto ya no se toma en cuenta pues nos apoyamos en la normativa del Código Penal que en su Art. 29 señala que como mínimo de es un día multa y como máximo quinientos.

1.3. CONCEPTO DE PENA.

El concepto de pena establecido por Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Luis Arroyo Zapatero Nicolás García Rivas, Juan Carlos Ferré Olivé, José Ramón Serrano Piedecabras, en su libro “Lecciones de Derecho Penal Parte General” Es un castigo impuesto por autoridad legítima de índole judicial a quien a cometido un delito o una falta, actualmente no se considera castigo ni retribución sino una ENMIENDA; forma de lograr la rehabilitación y reinserción social.⁸

⁸ Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Luis Arroyo Zapatero Nicolás García Rivas, Juan Carlos Ferré Olivé, José Ramón Serrano Piedecabras, “Lecciones de Derecho Penal Parte General, Ed. Praxis, S.A. Barcelona 1996. Donde se hace definiciones a cerca de la finalidad de la pena , individualización de la pena, características de la pena, además de realizar criterios de Individualización de la pena por el Juez, y caracteres de las penas que son necesarias para la individualización y acerca del conocimiento del imputado.

1.3.1. FINALIDAD DE LA PENA.

La ley 2298 de ejecución penal en su Art.3 señala. La pena tiene por finalidad proteger a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda, readaptación y reinserción social del condenado a través de una cabal comprensión y respeto a la Ley.⁹

1.3.2. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA.

Para imponerse una pena debe tomarse en cuenta el grado de participación de la persona, el conocimiento que tiene del hecho, la intencionalidad en el momento de la comisión, las causas que lo impulsaron a la comisión, las circunstancias en el momento y la pena se la aplicará en forma personal.¹⁰

De acuerdo al Cod. Penal Art.25 La sanción comprende tanto las penas como las medidas de seguridad.

⁹ La principal finalidad es la readaptación del individuo, lo que en nuestro medio en un gran porcentaje esto no se cumple, por la carencia de diversos medios técnicos, psicológicos y materiales por lo que muchos no logran su reinserción.”

¹⁰ a) El delito como hecho real delata personalidad del delincuente, como la obra es reflejo del artesano, b) Las condiciones personales determinan en cierto grado la manera de cometer el delito. Estos principios son los que conducen a la individualización de la Pena.

Son penas principales a) presidio b) reclusión c) prestación de trabajo d) días multa.

Es pena accesoria la inhabilitación especial.

1.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA PENA.

Desprendiendo del concepto de la pena, establecida por la doctrina, tenemos algunas características esenciales¹¹ y ellas son:

- a) LEGALIDAD. Se da únicamente la pena estipulada en la Ley;
- b) PROPORCIONALIDAD. De acuerdo a la gravedad del delito
- c) INDIVIDUALIDAD.- La pena debe ser para cada uno de acuerdo a su participación y responsabilidad;
- d) AFLICTIVIDAD.- La pena es aflictiva para quien se la aplica porque siempre pierde algo preciado, la libertad, patrimonio, etc.

¹¹ HANS, HEINRICH JESCHEC, Thomas Weigend.: Tratado de Derecho Penal (Parte General), Quinta Edición, Ed. COMARES, Pág. 75.

e) PUBLICIDAD.- La pena solo puede ser impuesta por el Estado a través de un juicio mediante el juez o tribunal;

f) IRREVOCABILIDAD.- Teóricamente no se puede revocar, pero en la actualidad existen beneficios como la suspensión condicional de la pena, libertad condicional, extramuro, etc.

1.3.4. CRITERIOS DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA POR EL JUEZ.

El Art.37 de nuestro Código Penal respecto a la Fijación de la Pena¹² establece que "Compete al Juez, atendiendo la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito:

- 1) Tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho, en la medida requerida para cada caso.
- 2) Determinar la pena aplicable a cada delito dentro de los límites legales."

1.3.5. CARACTERES DE LAS PENAS QUE SON NECESARIAS PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN.

¹²CARDOZO, G.: Derecho Penal, Ed. Educación y Cultura, Cbba. Bolivia, 2000

Artículo 38 C.P. CIRCUNSTANCIAS.- Para apreciar la personalidad del autor¹³ se toma en cuenta:

- a) Edad, educación costumbres, conducta anterior o posterior del sujeto, móviles que le impulsaron a delinquir y situación económica y social.
- b) Condiciones especiales en el momento del delito, sus antecedentes su medio las víctimas y otras circunstancias subjetivas.

Se tendrá en cuenta si hubo premeditación, ensañamiento, naturaleza de la acción modo de ejecución, medios empleados, daños causados, etc.

También se considerarán los atenuantes generales, especiales, reincidencia, habitualidad, la existencia de concurso real, ideal, los grados de participación, tentativa, complicidad, encubrimiento, delito consumado.

1.3.6. EL CONOCIMIENTO DEL IMPUTADO.

Resulta primordial haber visto al imputado y tener conocimiento directo de su personalidad, porque ello permite conocer su grado de instrucción, su carácter, su conducta, su formación, su temperamento, observar sus reacciones, su medio social,

¹³CARDOZO, G.: Derecho Penal, Pág. 127. Se pueden distinguir en la Individualización de la pena tres momentos primordiales: el legislativo, el judicial, y el penal o administrativo:

su núcleo familiar, su físico, para deducir las circunstancias en las que se llevó a cabo el hecho.

1.4. PENOLOGÍA.

1.4.1. SU NOCIÓN.

La penología se encarga del estudio de los diversos medios de represión y de prevención directa del delito (penas y medidas de seguridad) y de modo especial de su ejecución y de la actuación postpenitenciaria. Comprende por tanto dentro de su ámbito, el tratado de las penas y medidas privativas de libertad y su ejecución, y el de sus restantes penas y medidas (pena capital, penas corporales, pecuniarias, etc.) Todo género de sanción, pena o medida, de sentido retributivo, de finalidad reformadora o de aspiración defensiva, cualesquiera sea su clase y métodos de ejecución, caen dentro del campo de la penología¹⁴.

1.4.2. CIENCIA PENITENCIARIA.

¹⁴ Crease que fue Francis Lleber quien por vez primera (en 1834) empleó esta designación. Vid. Howard Wines, *Prison and Criminal Law* en el primer volumen de *Correction and Prevention*, Nueva Cork, 1910, logy página 146; vid. sobre Llesber, Barnes, y Teeters, *New Horizons in Criminology*, pág.536. Vid. *La moderna Penología*, Cáp. I, García Valdés, Carlos, *La Nueva Penología*, Madrid 1977.

El estudio de las penas y su ejecución también suele designarse con el nombre de ciencia penitenciaria¹⁵. Durante algún tiempo se reservó esta denominación para el estudio de las penas de privación de libertad y de los diversos sistemas de ejecución de estas, pero su campo se ha ensanchado gradualmente hasta comprender todas las distintas clases de penas, las medidas de seguridad, el patronato y las instituciones postcarcelarias, como se ve, tan amplio contenido rebasa con exceso el calificativo penitenciario, que nació para designar exclusivamente cierta modalidad de ejecución de las penas de privación de libertad inspirada en su sentido de explicación reformadora. La ciencia penitenciaria si su nombre ha de corresponder a su finalidad y contenido, no puede extender su contenido mas allá del estudio de la organización y el funcionamiento de aquellas penas orientadas al único fin de la corrección del delincuente. Las restantes penas, las de restricción de libertad (destierro, confinamiento, etc.) las de privación o limitación de derechos, las pecuniarias sin contar con la pena capital, son ajenas por completo a la ciencia penitenciaria cuyo campo es de mas estrechos límites, la ciencia penitenciaria vendría a ser una parte al fin de la Penología.

Los estudios penalógicos se iniciaron con investigaciones sobre penas de privación de libertad. Carlos Lucas, en Francia escribe sobre los sistemas penitenciarios norteamericanos “Du systeme penal et du systeme répresif en general

¹⁵ La designación de Ciencia Penitenciaria ha sido empleada por los franceses, quienes, se dice, la tomaron de los cuáqueros, Vid. Howard Wines, Punishment and reformation Nueva York, 2da Ed. 1910, pág. 2

de la peine de mort en particulier”, París, 1827; en Alemania Julios en 1828 publica sus “Lecciones sobre la Ciencia de las Prisiones” (Vorlesungen ubre Gefängniskunde) y Obermaier en 1835 su “Guía para la completa corrección del delincuente” (Anelitung zur vollkommenen Besserting der Verbrecher) en la que desarrolló ideas modernas, en 1888 apareció el “Manual de Ciencias de las Prisiones” (Handburch des Gefängniswesen in Einzelbetragen, Hamburgo, 1887) de Holtzendorff y v. Jagemenn, al que siguió el “Tratado de Ciencia de las Prisiones” (Lehrbuch de Gefängniskunde, Stuttgart, 1889) de Kronhe. En 1864 la “Unión de funcionarios Alemanes de prisiones” publicó la revista Blätter für Gefängniskunde que tuvo gran difusión.

1.4.3. DERECHO PENITENCIARIO.

Actualmente se habla de derecho penitenciario o de ejecución penal, que comprenden el conjunto de normas jurídicas relativas a la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad.¹⁶

1.4.4. NOTAS:

¹⁶ Novelli define el derecho penitenciario: “conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad desde el momento en que es ejecutivo el título que legitima su ejecución” L'autonomia del diritto penitenziario en Riv. di diritto penitenziario, 1933, pág. 7.

- 1) Se calcula que en 1980 se introdujeron en los Estados Unidos 40 Toneladas de cocaína pura, que produjo unos beneficios de 30.000 millones de dólares. Los narcotraficantes latinoamericanos obtuvieron un beneficio de 2.400 millones, mientras que sus colegas del norte se embolsaban la friolera de 27.600 millones. (Conclusiones de la Conferencia de Lima contra el tráfico internacional de la droga. Julio 1981.
- 2) La demanda legal de hoja de coca en Bolivia es aproximadamente de 15.000 toneladas anuales. En la década de los 80 la producción alcanzó las 80.000 toneladas.
- 3) Los narcotraficantes latinoamericanos prefieren invertir en valores poco productivos pero seguros: bienes raíces como complejos de viviendas, haciendas, o campos cultivables; o valores financieros internacionales como acciones de grandes compañías multinacionales, certificados de tesoro estadounidense o bonos.
- 4) No en vano entre ambos países (Bolivia, Colombia, Perú) se produce el 90% de la coca que se consume en el mundo.
- 5) Se calcula que el porcentaje del narcotráfico en Colombia es del 23%.

- 6) En una encuesta efectuada en el año 2004 por el Instituto Nacional para el Estudio de Abusos de las Drogas, cerca del 38% de los jóvenes entre 18 y 25 años confesó haber tomado cocaína en alguna ocasión.

Las notas 2, 3, 4, 5, 6, que hacen alusión al narcotráfico, se obtuvieron del libro del Dr. William Herrera Añez.¹⁷

- 7) Respecto a la penología podemos decir que se encarga del estudio de los diversos medios de represión y de prevención directa del delito (penas y medidas de seguridad) y de modo especial de su ejecución y de la actuación postpenitenciaria.¹⁸

- 8) Todo género de sanción, pena o medida, de sentido retributivo, de finalidad reformadora o de aspiración defensiva, cualesquiera sea su clase y métodos de ejecución, caen dentro del campo de la penología.¹⁹

- 9) Respecto a la finalidad de la Pena la ley 2298 de Ejecución Penal en su Art.3 señala: “La pena tiene por finalidad proteger a la sociedad contra el delito y

¹⁷ HERRERA AÑEZ, Williams, “La Despenalización del narcotráfico”, La Paz, Ed. Sirena, 1991, 194 Págs.

¹⁸ Vid. **HOWARD WINES**, Prison and Criminal Law en el primer volumen de Correction and Prevention, Nueva Cork, 1910, logy página 146; vid. sobre Llesber, Barnes, y Teeters, New Horizons in Criminology, pág.536.

¹⁹ Vid. La moderna Penología, Cáp. I, GARCÍA VALDÉS, Carlos, La Nueva Penología, Madrid 1977.

lograr la enmienda, readaptación y reinserción social del condenado a través de una cabal comprensión y respeto a la Ley”.²⁰

10) Las características esenciales de la pena son: la legalidad, la individualidad, la afflictividad, la publicidad, la irrevocabilidad y la **PROPORCIONALIDAD**. Respecto a esta última característica (la de proporcionalidad) la doctrina especifica que la pena debe ser de acuerdo a la gravedad del delito.²¹

11) Tomando en cuenta el Principio de Culpabilidad el Art.16.I de nuestra Constitución Política del Estado, consagra a este principio en los siguientes términos: “Se presume la inocencia del encausado mientras no se compruebe su culpabilidad”.²²

²⁰ Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Luis Arroyo Zapatero Nicolás García Rivas, Juan Carlos Ferré Olivé, José Ramón Serrano Piedecabras, “Lecciones de Derecho Penal Parte General, Ed. Praxis, S.A. Barcelona 1996.

²¹ Hans Heinrich, Jeschec, Thomas Weigend.: Tratado de Derecho Penal (Parte General), Quinta Edición, Ed. COMARES, Pág. 75.

²² DURÁN RIBERA Ruperto Willman: “Control Constitucional del Proceso Penal” Material de apoyo utilizado en la Maestría de Derecho Procesal Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, octubre de 2001, Págs. 17 a la 25, Sucre-Bolivia.

CAPITULO II

PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO PENAL, EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y TAXATIVIDAD EN LA FORMULACIÓN TÍPICA Y LA SEGURIDAD JURÍDICA

2.1. INTRODUCCIÓN.

Dijimos ya que la formulación típica es esencialmente, una descripción. Pero no una descripción no uniforme, sino comprensiva de la heterogeneidad de lo descrito. En la medida que es una descripción, se verifica abstractamente, a través de una *proposición* que, por vigencia del principio de legalidad, es una proposición normativa legal²³.

²³ **COBO DEL ROSAL M, VIVES ANTÓN T.S.**, “DERECHO PENAL” Parte General, Edit. Tirano lo Blanch, Valencia 1990, Pág. 261.

2.2. PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

2.2.1. CONTENIDO Y FUNDAMENTO.

La atribución exclusiva otorgada constitucionalmente al legislador para establecer delitos y disponer la aplicación de penas a la comisión de los mismos constituye desde la Revolución Francesa, la piedra angular del Derecho Penal Moderno. Así la Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano de 1789 proclamaba en su Art. 8 que “la ley no debe establecer más que las penas estricta y manifiestamente necesarias y nadie, puede ser castigado sino en virtud de una ley dictada y promulgada con anterioridad al delito y aplicada conforme a la propia ley”.

Nuestra Constitución la recoge en su Art. 16-IV) que señala “Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y jugado previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una Ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más favorables al encausado”.

El Tribunal Constitucional Boliviano consideran que en el precepto transcrito se proclama el principio de legalidad en materia penal, que Feuerbach en las primeras décadas del siglo XX, había formulado en latín como “*Nullun Crimen, nulla poena*

sine previa lege penale” que significa que toda aplicación de una pena supone una ley previa anterior

La evolución doctrinal ha completado la formulación de Feuerbach. “En la actualidad, puede anunciarse el principio de legalidad en materia penal mediante las siguientes proposiciones: a) *"Nullum crimen sine lege"*. Ninguna conducta, por reprochable que parezca y por mucho que lesione el Derecho, puede conceptuarse delito si la Ley no lo prescribe así (*principio de legalidad criminal*). b) *"Nulla poena sine lege"*. No pueden imponerse más penas que las establecidas por el legislador en cada caso, hallándose prohibido sustituir por otra la penalidad prevista en cada figura delictiva y, más aún, "inventar" penas (*principio de legalidad penal*). c) *"Nemo damnetur nisi per legale iudicium"*. Nadie puede ser castigado sino en virtud de un juicio formal ante sus jueces naturales, en el que se respeten las garantías establecidas por la Ley (*principio de legalidad procesal o garantía jurisdiccional*). d) No puede ejecutarse pena alguna sino en la forma prevista por la Ley (*principio de legalidad en la ejecución*)²⁴.

2.2.2. PRINCIPIO GENERAL DE LEGALIDAD.

²⁴ Id. Pág. 261

En concepto de Cobo, del Rosal Y Antón vives en su Obra Derecho Penal Parte General²⁵.

Para determinar el sentido del principio de legalidad en materia penal es preciso examinar sucintamente el principio general de legalidad, del que el penal no es sino una concreción específica y diferenciada.

En el pensamiento ilustrado, el “gobierno de las leyes” aparece como un ideal frente al gobierno de los hombres: “se piensa que la razón debe sustituir a las “preocupaciones”, la representación popular a la camarilla palaciega, las normas a las decisiones individuales”.

Una regulación de las relaciones entre los hombres, para ser racional, ha de hallarse sustraída a la voluntad caprichosa de un individuo; ha de ser igual para todos; ha de tener su origen en la voluntad general; ha de contemplar "a los individuos en masa y a las acciones en abstracto"; ha de ser, finalmente, clara y comprensible para todos aquellos a quienes va dirigida. Para ser racionales, las normas han de ser generales en un triple sentido: en cuanto a su *origen*, han de proceder de la comunidad entera, no de un déspota; en cuanto a su *contenido*, han de reconocer igual libertad a todos los ciudadanos; y, en cuanto a su *forma*, han de ser inteligibles para todos, escritas, públicas, exhaustivas y taxativas.

²⁵ Id. Pág. 263

Como consecuencia de estas concepciones, se concluye que la Ley debe ser la *única* fuente de normas jurídicas. Pero pronto se abandona la idea del “monopolio de la Ley”, tanto por razones puramente técnicas (imposibilidad de construir un sistema legal completo que contenga una regulación expresa de todos los conflictos posibles), cuanto por otras de orden económico, Social y “El monopolio” de la Ley se reduce a determinados ámbitos materiales (materias *reservadas* a la Ley) y, en los demás, se afirma solamente la *primacía* de la ley en cuanto que esta tiene una autónoma capacidad innovadora del ordenamiento jurídico, pudiendo derogar las leyes anteriores y prevaleciendo sobre cualquier clase de producción normativa dimanante del Ejecutivo. *Por reserva legal* se entiende la delimitación de uno o varios ámbitos, en el seno del ordenamiento jurídico, que solamente pueden ser regulados en virtud de Ley.

2.2.3. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL

En su “tenor literal” del principio de legalidad se identifica con la existencia de una *reserva sustancial y absoluta* de Ley que abarque la totalidad de la materia relativa a la definición de delitos y al establecimiento de las sanciones correspondientes, afectando, cuando menos, a la, totalidad de las normas de las que quepa deducir la imposición o agravación de cualquier pena.

Pero el “*significado esencial*” del principio de legalidad de los delitos y las penas no se agota en el requisito formal de reserva de Ley, sino que comparte múltiples exigencias materiales, relativas al “*quo modo*” de la legislación penal. Así, dice Beling, una Ley que estableciese que “el que cometa una acción antijurídica e imputable será castigado según el criterio del juez” respetaría el tenor literario del principio de legalidad, pero entraría en pugna con el significado esencial del mismo”²⁶.

El principio de legalidad penal comporta como exigencias inmediatas, las de ***claridad y taxatividad*** en la determinación de las conductas prohibidas y de las sanciones aplicables. ***Claridad y taxatividad*** son imprescindibles condiciones de la seguridad jurídica. Pero, para que pueda hablarse de seguridad jurídica es preciso, además, que se haya determinado de antemano qué conductas constituyen delitos y cuáles no, y qué penas son aplicables en cada caso y también resulta indispensable que esa determinación la lleve a cabo el legislador pues, de lo contrario, los ciudadanos quedan a merced de los jueces o del Gobierno. De suerte que el significado esencial del principio de legalidad entra en pugna, de una parte, con la legislación retroactiva, esto es, con las leyes Penales que pretenden aplicarse a hechos acontecidos antes de su entrada en vigor, y, de otra, con la legislación que, por vía indirecta, remite a la Administración o al Poder judicial la concreción efectiva de las infracciones o de las penas. Son, pues, contrarias a las exigencias materiales del principio de legalidad, las Leyes que se limitan a atribuir sanciones penales a las

²⁶ Id. Pág. 265

infracciones de preceptos Ejecutivos y también lo son, evidentemente, las que confinaran los presupuestos o consecuencias penales de modo abierto, difuso, discrecional o indeterminado, dejando, por tanto en manos de los jueces, la regulación efectiva de la materia. Con mayor razón es incompatible con el principio de legalidad la creación judicial o consuetudinaria del Derecho, quedando absolutamente excluida por él la aplicación analógica de las Leyes que fundamentan la imposición o agravación de las penas

Así, pues, en criterio de Cobo del Rosal y Antón Vives, el *significado esencial* del principio de legalidad se concreta en *el mandato de taxatividad y cuatro prohibiciones*: 1) *Prohibición de retroactividad* de las normas que fundamentan o agravan la pena; 2) *Prohibición de regulación de la materia penal por normas dimanantes del Ejecutivo*; 3) *Prohibición de la analogía* y, en general, de la creación judicial del Derecho y 4) *Prohibición de regulación de la materia Penal por normas consuetudinarias*.

En suma, en doctrina, el principio de legalidad comprende diversos postulados o sub. principios: la reserva absoluta de ley - monopolio del parlamento- para definir las conductas constitutivas de delitos y disponer la aplicación de penas con exclusión de otras disposiciones legales de inferior rango y de la costumbre; ***la exigencia de determinación, certeza o taxatividad de las normas penales***, la prohibición de la interpretación extensiva y de la analogía “in malan partem”; la irretroactividad de las normas penales desfavorables para el reo, la prohibición de

castigar por lo mismo más de una vez (*ne bis in idem*) . A los anteriores postulados se unen otras manifestaciones del principio de legalidad en dos espacios del delito se realice conforme a la ley de ejecución y que se cumpla la garantía de que la pena se ejecute y cumpla conforme a lo dispuesto en la leyes.

2.2.4. FUNCIONES.

El principio de legalidad cumple una función política, de la que se derivan una serie de consecuencias de orden técnico.

Desde la perspectiva política, el principio “*nullum crimen, nulla poena sine lege*” representa la materialización de los valores fundamentales del Estado de Derecho. En primer lugar, el principio de legalidad es un presupuesto de la realización de la *Justicia penal*, pues siendo la Ley emanación de la voluntad popular, las sanciones penales establecidas por medio de Ley pueden invocar, como fundamento justificativo, el consentimiento del destinatario. En segundo lugar, representa un requisito imprescindible de la *certeza*, pues, establecidas por una Ley previa, escrita y estricta, las consecuencias de la conducta devienen *calculables* para el que actúa. En tercer lugar da satisfacción al postulado de *autonomía*, reconociendo al ciudadano, no solamente la capacidad de Actuar conforme a reglas, sino también la

de contribuir a crearlas. En última instancia, el principio de legalidad es expresión de los dos valores básicos de todo ordenamiento jurídico: la *libertad* y la *igualdad*.

A la libertad, y la igualdad, encarnadas en el significado esencial del principio de legalidad, se oponen todos los mecanismos ideados por los Estados modernos para burlar sus exigencias: las figuras abiertas, las leyes incompletas o absolutamente en blanco, las cláusulas generales, las medidas penales que se asientan, no en el hecho cometido, sino en la “peligrosidad” del autor, la valoración moralista (*en conciencia*) de la prueba por los jueces, etc. no representan más que “negaciones del principio de legalidad por medio de la Ley”. Y las negaciones del principio de legalidad pueden acabar transformando un régimen de Derecho en un sistema de “terror penal”. Porque “cuando se habla de terror penal no debe pensarse en que se manifiesta sólo a través de Guillotinas y pelotones de ejecución, porque terror es una leve condena pronunciada por el Juez cuando no se señalan límites precisos a su arbitrio”.

La función técnica, del principio de legalidad se concreta tanto en el proceso de formulación de la Ley como, ulteriormente, en la interpretación y construcción del Derecho penal.

La Ley penal ha de formularse preferentemente por medio de conceptos descriptivos, evitando las cláusulas valorativas de contenido difuso. Pero no bastaría con que las Leyes penales se hallaran formuladas de modo taxativo si fuera posible interpretarlas en forma 'laxa. Por consiguiente, la interpretación penal ha de ser

rigurosa, Y a ese mismo mandato de rigor ha de ajustarse la construcción dogmática, de modo que la descripción sistemática de la Ley no altere el significado manifiesto de sus prescripciones. Utilizar, para describir sistemáticamente la Ley, categorías dogmáticas que confieran a sus enunciados un sentido distinto del que poseen en el lenguaje común. sobre todo si ese sentido tuviera carácter agravatorio, sería, como dijera Beling, “un comportamiento desleal, un engaño del pueblo”.

Precisamente se debe a Beling la introducción. en el seno de la teoría del delito, del concepto de *tipicidad*, por medio del cual trató de dotar de significación sistemática a las exigencias materiales dimanantes del principio de legalidad. Los tipos de la Parte especial, han de hallarse delimitados de tal modo que formen "un libro de figuras en el cual la *muerte de una persona*, la *sustracción de cosa mueble ajena*. etc., se presentan en esquema o estiradas. Para salir adelante en la especulación en materia de Derecho penal ha de acudir, ante todo, a ojear este libro de figuras. El agregar nuevas hojas, la modificación de los dibujos y la supresión de las figuras sólo puede hacerlo el legislador. De modo que cuando se dice que “no hay delito sin tipo”, o cuando se afirma la tipicidad como “elemento general del concepto de acción punible” no se hace sino concretar y traducir en términos sistemáticos las exigencias materiales derivadas del principio de legalidad

2.3. PRINCIPIO DE DETERMINACIÓN, DE CERTEZA O TAXATIVIDAD.

El problema crucial de la formulación típica no radica tanto en la naturaleza de sus términos como en la precisión y claridad con que pueda delimitarse su contenido, esto es, en la medida que el legislador haya respetado el principio de taxatividad.

Cuando un término contiene una referencia precisa, clara y bien determinada decimos que se trata de un término cerrado o rígido, Por el contrario, los términos que contienen una referencia difusa se denominan flexibles, abiertos, elásticos o vagos.

Las exigencias de taxatividad en la determinación del ámbito de lo punible, derivados del significado esencial del principio de legalidad, requieren que la formulación de los tipos se lleve a cabo mediante términos rígidos, en los que la discrecionalidad del intérprete quede reducida al mínimo.

El injusto penal es un injusto *tipificado*. Y no cabe hablar de tipicidad allí donde una defectuosa técnica legislativa o una manipulación mas o menos enmascarada dejan al arbitrio del intérprete y, en su caso del juzgador, la determinación del contenido de las proposiciones legales, Procede recordar que la idea de tipicidad se origina en el Derecho penal para dar concreción a las declaraciones constitucionales en las que se proclama el principio de legalidad. Una Ley Penal que desconociese el significado de la tipicidad, que recurriese a términos

elásticos, a cláusulas imprecisas y oscuras, que no determinasen con exactitud la esfera de lo punible, entraría en conflicto con la constitución.

Sería equivocado pensar que el riesgo de falta de determinación del contenido típico tiene lugar solamente cuando se emplean *cláusulas normativas pendientes de valoración*.

Desde luego, en tales casos existe, por regla general, un atentado flagrante al principio de legalidad. Puesto que la Ley remite, con el empleo de tales cláusulas, a órdenes normativos imprecisos y deja, en último término, que sea el Juez quien determine su contenido, el uso de los mismos en las formulaciones legales representa una forma de eludir las exigencias de la reserva absoluta de Ley, que impide toda suerte de remisión normativa, tanto si esta tiene lugar a favor de la judicatura. Y es que se produce una negación, más o menos solapada, pero sumamente grave, de la sustancial raíz de la que nace y se nutre el principio de legalidad: la concesión de hecho de atribuciones legislativas, nada menos que en materia penal, al poder judicial o al ejecutivo. Se desvirtúa así la misma división de poderes, con fuerte menoscabo, en este caso, para el poder legislativo y sus privativas funciones en el orden criminal. El principio de legalidad se reduce a una mera y vacía formalidad, a una simple excusa, inadmisibles dentro del sistema constitucional vigente.

Pero también mediante términos normativos ya valorados o mediante términos cognoscitivos, o incluso mediante términos descriptivos, puede vulnerarse la exigencia de taxatividad inherente al principio de legalidad.

Los elementos cognoscitivos o teóricos pueden violar asimismo el principio de legalidad, sobre todo desde el punto y hora en que la determinación de su contenido requiera por parte del intérprete, un conocimiento teórico, de los que la humanidad no dispone todavía. Un caso paradigmático es el concepto de peligrosidad (elevada probabilidad de que el autor cometa un nuevo delito en el futuro)

De igual forma las exigencias de taxatividad, insitas en la idea de tipicidad, pueden vulnerarse mediante el empleo de *conceptos descriptivos* de carácter objetivo, si éstos carecen de la debida precisión, en cuanto a las circunstancias, cantidad, tiempo, etc., del objeto descrito. Un ejemplo claro pudiera constituir un tipo que refiera “si la cuantía de lo sustraído no excediere de....” la expresión no excediere en mucho, pese a su carácter predominantemente descriptivo, es un modelo de peregrina indeterminación.

Tal imprecisión es consustancial a los términos descriptivos que hemos denominado psicológicos, esto es, a los que aluden a estados o momentos del ánimo: en ello al problema de la mayor o menor determinación de la fórmula legal, se une el margen de apreciación que resulta de la imposibilidad de una comprobación directa.

Las anteriores consideraciones no pretenden llevar la exigencia de taxatividad dimanante de la reserva absoluta de Ley, hasta extremos que no podrían ser cumplidos en ninguna legislación pensable.

La mayor parte de los conceptos jurídicos tienen junto a un “núcleo” claramente delimitado un “campo conceptual” difuso, de suerte que las exigencias de certeza se cumplen, no mediante una absoluta taxatividad, sino mediante la exhibición permanente de la zona problemática, del área de duda e in certeza

Que eso sea así, y que difícilmente pueda ser de otra manera, no debe sin embargo, servir de pretexto para introducir en la Ley penal conceptos carentes de un núcleo claro y bien determinado, suficientemente estable, y que cubra la mayor parte del campo de aplicación de las normas. El rigor absoluto no puede ciertamente alcanzarse pero no por ello hay que renunciar absolutamente al rigor, sino que es preciso intentar lograrlo hasta donde sea posible, de modo persistente y fijándose cada vez como meta a conseguir cotas más elevadas de seguridad y certeza.

Un Estado material y no sólo formal de Derecho, tiene por finalidad también la realización de la justicia. Así las cosas, las leyes penales deben cumplir con las exigencias de seguridad jurídica desde la perspectiva de la previsibilidad individual limitando al máximo conceptos necesitados de complementación valorativa. Los puntos de vista de la justicia y de la necesidad de pena deben tenerse en cuenta dentro

de los límites trazados por el principio de legalidad, pues en caso contrario se renuncia simple y llanamente al principio. Es indiscutible que ante cualquier tipo del Código penal siempre podrán aducirse excepciones a la estricta determinación de la ley penal, fundadas en la idea del interés preponderante y de la justicia material que permitan relativizar la exigencia de determinación, sin embargo ello deviene en una devaluación del clásico valor del principio de certeza.

En efecto, para empezar, resulta ampliamente admitido que la efectiva satisfacción del principio de taxatividad depende en primer lugar de la naturaleza de la materia a regular, esto es, de la “posibilidad de una descripción precisa del hecho”. Por principio, la renuncia obligada a la taxatividad atendida la imposibilidad de alcanzarla, manifiesta la preponderancia del interés de tutela de determinados bienes sobre la protección de la confianza individual. Si efectivamente, como se afirma, los puntos de vista de la justicia y necesidad de pena han de atenderse dentro del límite representado por el principio de legalidad, y éste incorpora necesariamente la garantía de taxatividad, entonces lógico sería concluir que en tales casos, la imposibilidad de precisión habría de llevar, necesariamente, a renunciar al Derecho penal como técnica de tutela, en favor de otras ramas del ordenamiento jurídico. Esta idea está -expresa o implícitamente- en la base de buena parte de las conocidas teorías diferenciadoras sobre la ilicitud penal y administrativa²⁷, y resulta por lo demás trasladable a otras técnicas de tutela, como por ejemplo la civil, que habría de revelarse por ello, al

²⁷ GARCIA ALBERTO, La relación entre ilícito penal e ilícito administrativo: texto y contexto de las teorías diferenciadoras de ilícitos, cit., pp. 295 y ss.

menos desde la perspectiva que examinamos, más respetuosa constitucionalmente con la protección de bienes jurídicos en los que resulta inviable una tipificación precisa de sus formas de ataque. Algún autor ha señalado con razón que la falta de determinación constituye un buen criterio para observar si se ha respetado o no el principio de ofensividad y sobre todo fragmentariedad. Pues en efecto, una imprecisión tipificadora puede responder al desconocimiento, por parte del legislador, sobre aquello que en realidad desea tutelar y frente a qué ataques.

A esta idea no escapa incluso aquel sector de la doctrina que se muestra crítico con la posibilidad de someter a ponderación al principio de taxatividad, por posibilitar una relativización inadmisibile del principio. Pues en efecto, no basta desde una supuesta prevalencia absoluta del principio, con sostener que el legislador debe aplicarse para lograr la máxima precisión posible. Según esta perspectiva, la mayor o menor determinación ha de medirse dependiendo de los recursos a disposición del legislador para proceder a una redacción legal más taxativa.

2.4. EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD.

El Dr. Willman Ruperto Durán Ribera²⁸, respecto a “Los Principios Informadores del Derecho Penal Boliviano” identifica a tres principios los cuales son: *El Principio de Legalidad* que exige un sometimiento pleno de todos a la Ley, y solo la Ley en ejecución de sus mandatos se puede legitimar la actuación del Estado. Otro principio es el *del Bien Jurídico* que protege solamente los que se consideran vitales y fundamentales para el desarrollo adecuado del individuo y la comunidad los cuales son a) El reconocimiento constitucional, b) Bienes jurídicos que integran el llamado Derecho Penal y c) El concreto grado de afectación del bien Jurídico y por último, *el Principio de Culpabilidad* que es el que nos interesa para nuestro estudio y al respecto el Art. 16.I. de la Constitución Política del Estado consagra el principio de culpabilidad en los siguientes términos: “Se presume la INOCENCIA del encausado mientras no se compruebe su culpabilidad”

2.5. EL PRINCIPIO DE INOCENCIA.

Este principio fundamental del Estado de Derecho es uno de los aspectos más importantes que es necesario revisar, para llegar a tener una visión clara de la problemática de nuestro País y en especial de la aplicación de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas respecto a la existencia de tipos penales que van en contra del Principio de Inocencia y de las definiciones citadas a continuación.

²⁸ DURÁN RIBERA Ruperto Willman: “Control Constitucional del Proceso Penal” Material de apoyo utilizado en la Maestría de Derecho Procesal Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, octubre de 2001, Págs. 17 a la 25, Sucre-Bolivia.

Este principio establece, que toda persona debe ser considerada inocente mientras no se destruya su estado jurídico de inocencia en un juicio, mediante sentencia ejecutoriada o firme. “Según se observa, la necesidad emerge directamente de la necesidad del juicio previo. De ahí que se afirme que el imputado es inocente durante la sustanciación del proceso” o que “los habitantes de la Nación gozan de un estado de inocencia, mientras no sean declarados culpables por sentencia firme, aún cuando respecto a ellos se haya abierto una causa penal y cualquiera que sea el proceso de esa causa.”²⁹ Como explica Binder³⁰, el principio de inocencia no dice que el imputado sea en verdad inocente, es decir, que no haya participado en la comisión de un hecho punible. Su significado consiste en atribuir a toda persona un “estado de inocencia”.

Es por ello que en virtud a esta presunción de inocencia, es el fiscal quien tiene que probar la acusación y el acusado tiene el beneficio de la duda. También nos dice este principio que nadie puede ser considerado culpable sino es en virtud a una sentencia, dictada en un juicio.

²⁹Maier, Derecho Procesal Penal, t.I, Págs. 490 y ss. Edit. Del Puerto, 1996.

³⁰ BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Penal, p. 196, Edit. Alfa Beta, Bs.As., abril 1993.

2.6. APRECIACIÓN PSICO-SOCIAL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

El tráfico ilícito de drogas es junto al "revitalizado" secuestro y al terrorismo, una de las conductas criminalizadas de mayor difusión social en Bolivia desde 1970. Su constante presencia en los medios de comunicación le ha convertido en un suceso tan cotidiano, que el hombre de la calle comienza a considerar al narcotráfico como una característica de nuestra sociedad.

Al parecer, hoy en día "dedicarse" al tráfico de drogas no motiva los mismos escrúpulos ciudadanos de años anteriores. En ese sentido, la comunidad da la impresión de haber internalizado dos tipos de narcotraficantes más o menos convencionales. De un lado, se identifica como traficante al "paquetero" o "burro"; y de otro lado, se asimila también como traficante al "gringo" norteamericano o al "narco" colombiano. Es decir, que, en ambos casos, se visualizan los mismos prototipos de traficantes de drogas que aparecen en la tele noticieros o en las páginas policiales de los diarios.

Pero además, otro factor parece también haber influido en la percepción actual del narcotráfico. Nos referimos a la reiterada información social que localiza el tráfico de drogas como un problema localizado en la selva del país y que ha generado que el habitante del Altiplano o del Sud de Bolivia considere que la gravedad real del "asunto de la droga" radica muy lejos de su hábitat social. Lo cual, como ya hemos

visto, no deja de ser verdadero. Y aún más, en las zonas de producción el cultivo ilegal de coca y la fabricación de PBC (Pasta Base de Cocaína) se han hecho tan rutinarios y abiertos, que incluso la población de aquellas zonas que no participa del "negocio" acepta sin escandalizarse ese tipo de actividades, de las cuales, tal vez, "viven" sus amigos más allegados o algún familiar cercano.

La naturaleza del terrorismo, por el contrario, reside en la beligerancia contra la sociedad. Esta realidad condiciona la reacción de las personas y del Estado. Entre el común de las personas se admite que en la mejor de las familias puede surgir un traficante de drogas; pero no fácilmente se acepta que aparezca un "terrorista". El primer caso ocurre, cuando menos hasta que es detenido el traficante, acompañado de un mejoramiento económico. El segundo implica persecución y represión; el "ostracismo es la consecuencia inmediata".

2.7. ASPECTOS TEÓRICO DOCTRINALES DE LA ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL

2.7.1. EL TIPO PENAL.

No todo ilícito es merecedor de pena sino sólo aquél al que la Ley le asigna, taxativamente, dicha particular consecuencia, función que cumple por medio de lo que la doctrina moderna ha denominado tipo penal.

Según Carlos Creus en su obra Esquema del Derecho Penal, “en una significación restringida, el tipo describe una acción (conducta) que ha seleccionado de entre el conjunto de conductas antijurídicas – prohibidas por el derecho; en una significación más amplia (figura) incluye otras circunstancias que, en el caso, funcionan también como presupuestos de punibilidad (ejem. circunstancias de lugar, de tiempo, etc.) y desde luego, la pena que determina para esa conducta. En sentido figurado puede decirse que el tipo es el “momento conceptual”³¹ desde el cual arranca el delito. Como el tipo es la descripción de una conducta a la que el derecho le asigna determinada pena, su consecuencia adjetival es la tipicidad; ésta por tanto es la característica de una conducta dada en cuanto responde a las descripciones del tipo. “El tipo es la fórmula que pertenece a la ley, en tanto que la tipicidad pertenece a la conducta”³²

La descripción que de comportamientos hace el Estado por medio del legislador, es la que los alemanes llaman *Tatbestand*, los italianos *fattispecie legale* y los españoles *tipo penal*

³¹ CREUS Carlos., “ESQUEMA DE DERECHO PENAL”, Pág. 72

³² ZAFARONI EUGENIO Raul., “DERECHO PENAL” Parte General, Edit. Ediar, Buenos Aires 2002, Pág. 131.

En suma el tipo, ha de entenderse como *la abstracta descripción que el legislador hace de una conducta humana reprochable y punible*. La abstracción se refiere al contenido general y amplio de la conducta normada para que dentro de su marco quepa el singular y concreto comportamiento; la connotación descriptiva puntualiza el carácter preferentemente objetivo del tipo, y dicese preferentemente, porque algunas veces aparecen en él referencias normativas y subjetivas; la reprochabilidad pretende mostrar cómo el legislador ordinariamente describe conductas que merecen rechazo social y son, por lo mismo, dignas de reproche; finalmente, se menciona que la conducta es punible porque de esa naturaleza es la respuesta estatal complementaria del tipo³³.

2.7.2. FUNCIONES DEL TIPO PENAL.

En concepto de Reyes Echandia, la importancia del tipo penal radica en que este, “ejerce una triple función, garantizadora, fundamentadora y sistematizadora”.

- a) **Función garantizadora.-** El tipo constituye garantía jurídica, política y social de la libertad y la seguridad personales. Tutela la libertad porque establecen diques al arbitrio estatal, evitando que alguien sufra mengua de

³³ REYES HECHÁNDIA ALFONSO., “DERECHO PENAL” Parte General, Edit. Temis, Bogota, 1990, Pág. 95.

sus derechos sin motivo legal previo o que sea juzgado sin el lleno de requisitos legales preestablecidos.

En criterio del autor citado, estas normas constitucionales, reproducidas en los códigos penal y de procedimiento penal, constituyen el fundamento de los tipos legales en los que se describen modelos de comportamiento que merecen ser elevados a la categoría de delitos y sancionados penalmente; solo a partir de ese momento el Estado puede perseguir a quien realiza las actividades así descritas y aplicarle la pena que se haya previsto.

Así es como los **tipos penales protegen la seguridad jurídica** de los coasociados, vale decir, “el conjunto de condiciones que atañen a la esencia misma del derecho y por medio de las cuales los integrantes de un grupo social determinado conocen los carriles en que deben encauzar sus conductas y las consecuencias que el apartamiento de ellos puede acarrearles”.³⁴

Es tal la importancia de los tipos por este aspecto, que el juez no puede juzgar comportamientos que no se adecuen a algún tipo penal aun cuando parezcan manifiestamente injustos.

³⁴ Id. Pág. 97

El principio *nullum crimen nulla poena sine lege*, conquista liberal que adquirió carta de naturaleza jurídica con la Revolución Francesa, encuentra su necesaria concreción en la doctrina de la tipicidad; por eso MAURACH afirma, con razón, que el tipo es “la les del principio *nulla poena sine lege*”. El catálogo de tipos contenido en los códigos, desarrolla, actualizan y concretan el apotegma precitado y con ello garantizan aquel postulado democrático en virtud del cual es *lícito todo comportamiento humano que no esté legalmente prohibido*.

- b) Función fundamentadora.-** El tipo penal es presupuesto de ilicitud en cuanto una determinada conducta no puede ser calificada como delictiva mientras el legislador no la haya descrito previamente y conminado con sanción penal.

En Bolivia el Código Penal consagra de cierta manera el principio de tipicidad al señalar en su Art. 4 que “nadie podrá ser condenado o sometido a medida de seguridad por un hecho que no esté expresamente previsto como delito por ley penal vigente al tiempo en que se cometió, ni sujeto a penas o medidas de seguridad penales que no se hallen establecidas en ellas”.

No puede dejar de considerarse, que gracias a los tipos penales es posible diferenciar una figura delictiva de otra, por semejante que parezca, en aspectos atinentes a sus elementos integradores (sujetos, objetos o

conducta); así, aunque peculado, apropiación y hurto constituyen formas ilícitas de adquirir cosa ajena, están recogidos por tipos distintos que permiten claramente distinguir uno y otro modelos de comportamiento (C. P., Arts. 133 y 349), no solo en cuanto a la calidad del sujeto activo (empleado oficial o cualquier persona) sino respecto de la naturaleza del objeto material (bienes públicos, cosas muebles).

- c) **Función sistematizadora.** En concepción de Reyes Echandia, “la teoría de la tipicidad ha servido para tender puente de unión entre la parte general y la especial del derecho penal, tradicionalmente separadas.

Históricamente el estudio de los delitos en particular precedió en mucho al del ilícito como ente jurídico abstracto. Una verdadera teoría general del delito solo aparece a principios del siglo xix, cuando el pensamiento filosófico de HEGEL y de KANT penetró en la conciencia jurídica europea; el fenómeno resulta explicable porque solo a través de una visión filosófica de los hechos humanos vinculados al ordenamiento jurídico puede crearse una teoría coherente del delito. Pero esta influencia se circunscribió al ámbito de la parte general; la especial continuó siendo tratada con criterio pragmático y casuístico, con lo que se produjo absoluto divorcio entre ambas y, como secuela, surgieron no pocas contradicciones. Esta escisión del pensamiento jurídico penal encerró al penalista en dos

mundos diversos: **el de la teoría general del delito** y el de las **singulares figuras de la parte especial**; no se comprendió entonces que el derecho penal constituye un todo irrevocable y que, por lo mismo, **una correcta sistematización de los tipos penales consagrados en la parte especial de los códigos no puede ser sino el resultado de una teoría general del delito**. La tipicidad es el mecanismo en virtud del cual dicha sistematización se ha logrado”.

2.7.3. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL.

Si analizamos los tipos de nuestra ley penal encontraremos en ellos varios elementos que conforman su estructura, para identificarlos basta hacernos la consideración de que todo tipo penal muestra una conducta que, realizada por alguien, lesiona o pone en peligro un bien del cual otra persona es titular; por consiguiente, en cada tipo se identifican *dos sujetos*, el activo que ejecuta el comportamiento, y el pasivo titular del interés que se vulnera; *una conducta* que genéricamente allí se plasma y que, siendo por lo regular de naturaleza objetivo-descriptiva, en veces trae referencias normativas y subjetivas, y *un objeto* de doble entidad; jurídica en cuanto legalmente tutelado y material en cuanto ente (persona o cosa) sobre la cual se concreta la vulneración del interés jurídicamente protegido³⁵. En suma los elementos estructurales del tipo son tres:

³⁵ Id. Pág. 97.

- La conducta típica,
- Sus sujetos y
- Sus objetos

2.7.4. LA CONDUCTA TÍPICA.

De manera general se entiende que la conducta humana es la manifestación externa de la voluntad a través de un hecho positivo o negativo.

Sin embargo, desde el punto de vista del Derecho Penal, para Servio Tulio Ruiz; “no solamente es conducta el acto voluntario, sino cualquier otro acto positivo o negativo que tenga un valor sintomático para la personalidad de su autor, es decir que sea de tal naturaleza, que pueda decirse que le pertenece, que es suyo, que es atribuible al sujeto”³⁶

La exigencia de una conducta (positiva o negativa) es condición común a todos los tipos penales

³⁶ **RUIZ SERVIO Tulio.**, “LA ESTRUCTURA DEL DELITO”, Edit. Temis, Bogotá 1978, Pág. 27.

Citando a Santiago Mir Puig, “Toda conducta típica debe integrarse de los dos componentes necesarias de todo comportamiento: su parte **objetiva** y su parte **subjetiva**. Pero aquí no se trata de comprobar los caracteres *generales* de todo comportamiento que puede importar al Derecho penal (carácter externo y final), sino de examinar si, una vez confirmada la presencia de un tal comportamiento, el mismo reúne todos los requisitos de *un determinado tipo penal*. La parte objetiva y la parte subjetiva de la concreta conducta deben encajar en la parte objetiva y en la parte subjetiva del tipo para que concurra una conducta típica³⁷.”

- a) **La parte objetiva**, del tipo abarca el aspecto externo de la conducta. Sólo en determinados tipos – como veremos, llamados «delitos de resultado»– se exige además un efecto separado de la conducta y posterior a ella: p. ej., la muerte de la víctima en el tipo de homicidio. Este resultado separado no es, pues, un elemento necesario de todo tipo.

- b) **La parte subjetiva**, del tipo se halla constituida siempre por la *voluntad* – consciente, como en el dolo, o sin conciencia suficiente de su concreta peligrosidad, como en la imprudencia –, y a veces por especiales *elementos subjetivos* (por ejemplo, el «ánimo de lucro» en el delito de hurto).

³⁷ **MIR PUIG Santiago.**, “DERECHO PENAL” PARTE GENERAL, Edit. Tecfoto, S.L., Barcelona, 1996, Pág. 197.

Sobre este mismo aspecto, según Echandia, uno de los elementos del tipo penal es “la conducta en él descrita; ella está regida por un verbo y puntualiza comportamiento de acción *o de omisión*. En términos amplios, toda conducta predicable del hombre es respuesta a un estímulo, que nace en el campo de la conciencia y se exterioriza en movimiento. En un plano más estrecho, la conducta supone decisión de actuar en determinado sentido para lograr una finalidad; y en el ámbito del derecho penal, es aquel comportamiento de acción o de omisión realizado de tal manera que se acomoda a la descripción de un cierto tipo legal³⁸.

El verbo rector.- Como quiera que desde el punto de vista gramatical la conducta típica es una oración, su contexto gira en rededor del verbo principal o único que la gobierna; por eso se le llama “verbo rector” o “núcleo rector del tipo”. Es por tal modo importante el estudio del verbo como núcleo del tipo, que bien puede afirmarse que la interpretación judicial de las leyes penales que describen hechos delictivos es básicamente interpretación de los verbos principales utilizados por el legislador para describir las conductas ilícitas.

En este análisis por ejemplo, es verbo la palabra transportar inserto en el Art. 55 de la Ley No. 1008, o el verbo suministrar que aparece en el Art. 51 ibídem, ambos muestran el acto reprochable y orientan al juez en la correcta interpretación de la conducta *sub judice*.

³⁸ REYES HECHÁNDIA Alfonso., op. Cit. Pág. 98.

Cuando se habla de verbo *rector* se quiere diferenciarlo de otros verbos o formas verbales que el legislador suele emplear al describir una determinada conducta y cuya función es accesoria. A menos que se, trate de **tipos compuestos**, solo existe un verbo rector en cada tipo legal; en la estafa, por ejemplo (C. P., Art. 356), cuya esencia consiste *en obtener* provecho ilícito con perjuicio ajeno *induciendo* a una persona en error, si bien se han empleado dos verbos, solo el primero puede calificarse de “rector”, ya que el segundo sirve apenas para mostrar una circunstancia modal de la conducta.

2.7.5. LOS SUJETOS DE LA CONDUCTA TÍPICA.

El tipo penal supone la presencia de sujetos que se encuentran en una determinada relación recíproca: el **sujeto activo** (quien realiza el tipo), el **sujeto pasivo** (el titular del bien jurídico-penal atacado por el sujeto activo)

Alfonso Reyes Echandía, en su obra **Derecho Penal** sobre los sujetos del tipo penal afirma: “Como quiera que toda conducta humana es realizada por una persona respecto de otra y todo tipo legal describe un comportamiento, tiénese la presencia de dos sujetos, el que actúa y aquel en relación con el cual la conducta

produce un determinado efecto jurídico; el primero se llama sujeto activo y el segundo sujeto pasivo³⁹.

Sujeto activo.- Con este nombre se conoce el autor de la conducta típica; también se lo llama *agente, actor o sujeto-agente*.

El sujeto activo del delito es la persona que ejecuta el comportamiento constitutivo del tipo penal. Por lo general cualquier persona puede serlo, sin embargo, algunos tipos penales exigen determinada “cualidad especial” en el sujeto activo, Ej. “El empleado público, detenido, el pariente, etc”,

Por lo regular basta que una sola persona realice la conducta descrita en la ley penal para que dicha conducta pueda considerarse como típica; sin embargo, en algunos casos el propio tipo exige la presencia de varias personas, como en la asociación delictuosa, la confabulación, etc.

Sujeto pasivo.- De manera general entendemos por sujeto pasivo la persona o titular del bien jurídico que el legislador protege en el respectivo tipo legal y que resulta afectada por la conducta del sujeto activo, o agente. En suma, sujeto pasivo es la persona titular el bien jurídico lesionado o puesto en peligro.

³⁹ Id. Pág. 99.

Santiago Mir Puig, en su Derecho Penal Parte general dice: “sujeto pasivo es *«el titular o portador del interés cuya ofensa constituye la esencia del delito»* (Antolisei). Según esto, el sujeto pasivo no coincide necesariamente con el sujeto sobre el que recae físicamente la acción, ni con el «perjudicado».⁴⁰

Este sujeto en concepto del autor citado “No sólo posee importancia constructiva, sino también trascendencia práctica: de quién sea el sujeto pasivo pueden depender 1º) la impunidad o no del autor, 2º) la posibilidad de atenuar o agravar la pena y, 3º) otros efectos legales.”

Deben distinguirse los conceptos de sujeto pasivo y de **persona sobre la que recae físicamente la acción típica**. En los delitos contra las personas ambos sujetos coinciden, porque en ellos el titular del bien jurídico protegido es precisamente la persona sobre la que recae materialmente la acción típica. Pero ello no sucede en otros delitos, como el de estafa, en el cual el engaño típico puede recaer sobre una persona distinta de la que sufre el perjuicio patrimonial (sólo ésta constituye el sujeto pasivo, porque sólo ésta es titular del bien jurídico protegido).

Ejemplo: Engañando a un dependiente de una joyería, alguien se hace entregar por el unas joyas con las que desaparece. El sujeto pasivo no es el dependiente, sino el propietario de la joyería.

⁴⁰ MIR PUIG Santiago., op. cit., Pág. 198.

Sujeto pasivo y «**perjudicado**» tampoco coinciden. Este segundo concepto es más amplio, porque abarca no sólo al *titular* del interés lesionado de modo central (esencial) por el delito, sino a todos quienes soportan consecuencias perjudiciales más o menos directas. Así, en el homicidio la víctima es el sujeto pasivo, y sus familiares, los perjudicados. El concepto de perjudicado posee trascendencia a efectos de *responsabilidad civil*, que procede frente a todo aquel que tenga ese carácter (ver Art. 109 CP).

2.7.6. OBJETO.

El tercer elemento del tipo está constituido por el objeto en su doble connotación: jurídica y material.

2.7.6.1.OBJETO JURÍDICO.

Según Mir Puig, “el objeto *jurídico* equivale al **bien jurídico**, es decir el bien objeto de la protección de la ley. No equivale al objeto material. Ejemplo: en el

delito de hurto el objeto jurídico es la propiedad de una cosa, en tanto que el objeto material es la cosa hurtada.”⁴¹

Aclarándonos mas este aspecto, **Reyes Echandía** en su obra *Derecho Penal* afirma: “*Entiéndese por objeto jurídico el interés que el Estado busca proteger mediante los diversos tipos penales y que resulta vulnerado por la conducta del agente cuando ella se acomoda a la descripción hecha por el legislador. Aunque doctrinalmente se discute si el objeto jurídico es elemento del tipo, siempre hemos pensado que lo es, no solo porque sin él los tipos penales no tendrían razón de ser, sino porque una conducta que no sea apta para vulnerar el interés jurídico legalmente tutelado sería atípica y en su respecto sobraría cualquier examen relacionado con los fenómenos de la antijuridicidad o de la culpabilidad*”⁴².

La doctrina distingue el objeto jurídico en *genérico y específico*. El primero es el interés que el legislador tiene en la tutela de bienes jurídicos trascendentes, en cabeza de la persona individualmente considerada, de la sociedad o del propio Estado. Por medio de dicha protección pretende cumplir adecuadamente la suprema misión de garantizar la conservación, desarrollo e integridad del conglomerado social. El objeto específico, por su parte, se concreta en el interés de cada persona en conservar incólume un determinado bien jurídicamente tutelado.

⁴¹ Id. 198

⁴² **REYES HECHÁNDIA Alfonso.**, Ob Cit.. Pág. 99.

Los diversos intereses jurídicos que resultan conculcados por la conducta típica pueden aglutinarse, teniendo en cuenta su titular, en bienes jurídicos pertenecientes a la *persona* individualmente considerada, a la *sociedad* y al *Estado*.

En el primer caso, el objeto jurídico está radicado en cabeza de una persona física o moral, considerada en concreto; bienes jurídicos de esta naturaleza son la vida e incolumidad psicofísica, la integridad sexual y la moral, la libertad personal y el patrimonio económico. En el segundo caso, el titular del bien jurídico es el propio conglomerado social sin referencia específica a las singulares individualidades que lo conforman; tal ocurre en los delitos que afectan la institución familiar, la moralidad y la fe pública, la integridad y seguridad de los coasociados, la economía nacional y el sufragio. En la última hipótesis el objeto jurídico se vincula a la persona misma del Estado como ente con personarí jurídica propia; así sucede en los delitos que vulneran su existencia y seguridad, o su régimen jurídico, lo mismo que en aquellos que atentan contra la administración pública o la administración de justicia. La distinción que hemos hecho no significa, sin embargo, que una determinada conducta ilícita solamente afecte a uno de estos tres sujetos; lo cierto es que cuando tal ocurre, sufren detrimento, además de la persona física sobre la cual se realiza la conducta reprochable, el núcleo social a que ella pertenece y el propio Estado en cuanto garantizador de “la vida, honra y bienes” de todos los coasociados. Cuando se habla, pues, de tres titulares de los intereses jurídicos tutelados en el Código Penal, se está haciendo referencia a aquellas acciones que particular y preferentemente lesionan - destruyendo, disminuyendo o poniendo en peligro- bienes que exclusiva o principal-

mente se hallan radicados en cabeza de la persona, de la sociedad o del Estado. Pero, a veces, una misma conducta vulnera simultáneamente diversos bienes jurídicos contenidos en el mismo tipo legal, de los cuales unos pertenecen al individuo y otros a la sociedad o al Estado, como sucede con el incendio de cosa mueble o inmueble ajenos, hipótesis en la que se vulnera al propio tiempo el derecho de propiedad y la integridad social; en tales casos, el legislador ubica el hecho dentro del título que busca defender el bien jurídico que considera más digno de tutela o más hondamente afectado; en el ejemplo dado, el delito en cuestión se encuentra dentro del título bajo el cual se cobijan las conductas que atentan “contra la seguridad pública”.

2.7.6.2.OBJETO MATERIAL.

Santiago Mir Puig afirma que este se halla constituido por la persona o cosa sobre la que ha de recaer físicamente la acción, por lo que también se conoce como “objeto de la acción”. Puede coincidir con el sujeto pasivo (Por ejemplo en el homicidio o en las lesiones) pero no es preciso ejemplo en el delito de hurto es la cosa hurtada⁴³.

⁴³ **MIR PUIG Santiago.**, op. cit., Pág. 195.

Reyes Echandía, por su parte entiende por objeto material “aquello sobre lo cual se concreta la vulneración del interés jurídico que el legislador pretende tutelar en cada tipo y hacia el cual se orienta la conducta del agente”⁴⁴.

Como quiera que el objeto puede ser una persona, una cosa o un fenómeno, de acuerdo con la definición precedente, según el autor, tal concepto comprende según este autor tres especies, la de objeto material personal, real y fenomenológico.

*Por **objeto material personal** entendemos toda persona física o moral, viva o muerta, consciente o inconsciente, a la cual se dirige el comportamiento típico y respecto de quien se concreta la violación del interés jurídico tutelado.*

Como el objeto material de la conducta puede ser una persona y como también una persona es el sujeto pasivo de la acción típica, pudiera pensarse que los dos conceptos se identifican; tal conclusión sería equivocada, porque en tanto que la persona como objeto material de la conducta es el individuo sobre el cual se materializa tal comportamiento, entendida como sujeto pasivo es el titular del bien jurídico que resulta lesionado o puesto en peligro por el actor.

Lo que ocurre es que en ciertos tipos penales coinciden las calidades de sujeto pasivo y objeto material de la conducta; se trata de aquellos casos en que la persona

⁴⁴ REYES HECHÁNDIA Alfonso., Pág. 100

sobre la cual recae la acción del agente es también titular del bien jurídico vulnerado; tal sucede con el homicidio, en el que el acto de matar se consuma sobre la misma persona en quien se elimina el interés jurídico de la vida.

Por *el objeto material real* es la cosa respecto de la cual se concreta la vulneración del interés jurídico protegido y a la que se orienta la conducta del agente.

La palabra “cosa” debe entenderse en sentido naturalístico y comprende “cualquier parte del mundo externo”, excepción hecha del hombre. Caben, pues, dentro de este concepto los animales.

Conviene precisar que el objeto material real no debe confundirse con el instrumento eventualmente utilizado por el agente para realizar la conducta ilícita; así, el arma empleada para lesionar o matar, la palanca utilizada para violentar la cerradura, no son objetos materiales porque sobre ellos no recae la conducta del actor, sino elemento que éste se vale para mejor lograr su propósito delictual.

Por el *objeto material fenomenológico*, entendemos que es aquel fenómeno jurídico, natural o social sobre el cual se concreta la violación del interés jurídicamente protegido y al que se refiere la acción u omisión del sujeto activo.

Tienen tal carácter, “la integridad territorial de la República”, en la modalidad del delito de traición estatal a que se refiere el Art. 111 del C. P.; la “enfermedad”

mencionada en el tipo que describe la difusión de enfermedades en plantas o animales (C.P., Art. 245); o la “votación pública” a que se refiere el tipo de perturbación electoral del Código Penal (Art. 248).

2.7.7. ELEMENTOS DESCRIPTIVOS Y ELEMENTOS NORMATIVOS EN LA FORMULACIÓN DEL TIPO.

En la formulación del tipo el legislador puede acudir a elementos *descriptivos* o elementos *normativos*.

2.7.7.1.ELEMENTOS DESCRIPTIVOS.

Son los que expresan una realidad naturalística aprehensible por los sentidos. Ejemplo de tipo formulado exclusivamente con ayuda de elementos descriptivos es el homicidio (Art. 251 del CP. boliviano): «matar» y «otro» son elementos descriptivos). Debe notarse, sin embargo, que a menudo los elementos descriptivos *deben precisarse* con arreglo a criterios valorativos. Así, en el ejemplo propuesto, la precisión del momento de la muerte (¿al cesar la actividad del corazón o la del cerebro?) implica inevitablemente una elección hasta cierto punto valorativa. Lo

mismo ocurre en relación al concepto de «otro», cuya distinción respecto del feto no parece posible, en los casos límite, con arreglo a exclusivos criterios biológicos.

Sobre el tema, Reyes Echandía señala bajo el epígrafe de ***modelo descriptivo*** que “los tipos legales son, ante todo, descripciones de conductas humanas, vale decir, formas objetivas de mostrar modelos de comportamiento. Cuando se habla de ingrediente descriptivo en el tipo, se hace referencia a ese aspecto objetivo-formal que constituye la parte más destacada de la conducta en él plasmada; es *el ocasionar la muerte de otro* en el homicidio, *el constreñir a alguien a dar o prometer dinero o cualquier otra utilidad*, en la concusión. La descripción puede versar sobre conducta *positiva o negativa*, vale decir, sobre una acción o sobre una omisión; puede también ser ***simple o circunstanciada***. Es *positiva* la descripción cuando en ella se menciona un comportamiento activo, un actuar objetivamente perceptible, como la sustracción de cosas en el hurto o el acceso carnal con pariente en el incesto. Es *negativa* en aquellos casos en que la conducta consiste en un no hacer cuando se tenía la obligación jurídica de actuar, como el omitir la prestación de ayuda a persona herida o en peligro de muerte, en la omisión de socorro. La descripción *es simple* cuando el legislador se limita a describir la conducta sin aditamentos circunstanciales, como ocurre en el tipo de homicidio previsto en el Art. 323 del nuevo C. P. *Es circunstanciada* en todas aquellas hipótesis en que la conducta se enmarca dentro de referencias modales, temporales o espaciales. En estos casos la tipicidad del comportamiento está condicionada a que él se realice en las condiciones precisamente señaladas por la respectiva disposición legal. Para que pueda hablarse

de violencia carnal, por ejemplo, se requiere que el ayuntamiento se ejecute mediante violencia (C. P., Art. 298); para que haya abuso de confianza, exítese que el agente se apropie de cosa recibida a título no traslativo de dominio (C. P., Art. 358); para que se estructura la contravención especial de ofensas al pudor, necesario es que ellas se realicen “en lugar público o abierto al público”⁴⁵.

2.7.7.2.ELEMENTOS NORMATIVOS.

Reyes Echandia nos habla de los ingredientes especiales del tipo⁴⁶, señalando en cuanto a los normativos que “ordinariamente el legislador describe en forma objetiva el modelo de comportamiento que desea incriminar; pero no siempre es posible encerrar en esquemas objetivo-formales la compleja estructura de la conducta humana; algunas veces hay necesidad de **cualificarla** mediante el empleo de expresiones cuya interpretación requiere juicios de valor; cuando eso ocurre, se dice que el tipo legal contiene elementos *normativos*, expresiones que se predicán y sirven para cualificar a los sujetos activo o pasivo o al objeto material, o para precisar el alcance y contenido de la conducta misma o de una circunstancia de ella predicable. Así por ejem. para que alguien incurra en el delito de violación de domicilio tiene que introducirse *arbitrariamente* en habitación ajena; el concepto de arbitrariedad, exigido por el legislador, es lo que permite en este caso distinguir la

⁴⁵ Id. Pág. 100.

⁴⁶ Id. Pág. 100.

ordinaria y socialmente adecuada penetración a domicilio ajeno, de la intromisión abusiva que se quiere sancionar; ahora bien, al juez compete examinar en cada caso si la introducción domiciliaria se realizó o no arbitrariamente, mediante un juicio mental en el que ha de fijar el alcance del concepto “arbitrario”.

Aclarándonos más, Francisco Ferreira Delgado en su obra *Teoría General del Delito*, sostiene que los complementos normativos “Son palabras o frases que se encuentran en la descripción típica de lo punible y que se refieren a formas o a circunstancias del hecho mismo, o a cualidades del autor o de la víctima con los cuales se complementa la acción verbal, dándole a esta la verdadera dimensión de lo reprochable. Se trata de palabras o frases que anteceden al verbo, cuando se refieren al autor o cuando van como adverbios, o que lo subsiguen cuando son complementos predicativos, que lo califican o completan o explican suficientemente, al punto de que sin ellos la conjugación verbal resultaría inútil. Son voces que implican su propia interpretación o valoración de tal manera que el juez no tiene libertad interpretativa frente a ellas sino que debe acudir a su fuente valorativa”⁴⁷.

Estos complementos normativos pueden ser jurídicos y extrajurídicos: los primeros pueden cualificar a las personas (autor o víctima), Ej. el empleado público. Ascendiente, persona casada, mujer, menor de 14 años, persona que padezca trastorno mental, etc. o las cosas (bienes o derechos) Ej. bienes del Estado.

⁴⁷ **FERREIRA DELGADO Francisco.**, “TEORIA GENERAL DEL DELITO”, Edit. Themis, Bogotá 1988, Pág. 198

2.7.7.3.ELEMENTO SUBJETIVO.

Reyes Echandia nos habla de este elemento como tercer “ingrediente del tipo” afirmando que “en ocasiones la mera descripción objetiva de una conducta no es suficiente para comprender su ilicitud, sino que es necesario referirla a determinado y concreto propósito del actor. Si el legislador no utilizase en tales casos ingredientes comportamentales subjetivos se correría el riesgo de sancionar conductas inocuas o socialmente útiles; así, si no se exigiese el “ánimo de lucro” para el hurto, sería penado como ladrón el que sustrae una pintura de su amigo para exponerla sin su consentimiento en un concurso con el fin de procurarle fama al pintor. *El animus lucrandi*, característico del hurto, y el *propósito de “pone fin a intensos sufrimientos.....”* en el homicidio por piedad, son claros ejemplos de estos elementos⁴⁸.

Francisco Ferreira Delgado, en la obra citada, define a los complementos subjetivos como “voces o frases que señalan las especiales intenciones o propósitos, estados intelectivos o afectivos en que debe hallarse el autor al ejecutar el hecho indicado por el verbo. Por manea que un complemento subjetivo del tipo, a veces incluido como complemento del sujeto, y a veces como complemento circunstancial en el predicado, es una palabra o frase con la que se completa el sentido del verbo,

⁴⁸ REYES HECHÁNDIA Alfonso., op. cit. Pág. 101.

advirtiéndolo de la especial situación psicológica en que debe encontrarse el autor al realizar su acción u omisión, cuando quiera que sin ella lo actuado por él resulte impune, aunque se acomode a lo objetivo del tipo.”⁴⁹

2.7.8. EL NACIMIENTO DEL TIPO

2.7.8.1.GENERALIDADES.

Hemos dicho que el delito es un fenómeno humano, y que el hombre en su actuar es tan complicado, que en sus manifestaciones exteriores resulta casi infinito. Y cuando se trata de hacer el mal, mayor es su inteligencia y más ágil su dinámica que para hacer el bien. Por eso decía FOUSTEL DE COULANGES que el ser humano es finito en ciencia, pero infinito en osadía⁵⁰.

Los hechos con que lesiona a sus semejantes ocurren en su diario trajinar, por lo que forman parte de su fenomenología. La tarea de un legislador es tomarlos de allí y trasladarlos al texto escrito de la ley, para formar con ellos cuadros de comportamientos prohibidos y señalados con penas. Ello se hace por medio del lenguaje escrito, lo cual significa que deben someterse a las reglas de la lingüística. Y

⁴⁹ FERREIRA DELGADO Francisco., op. cit., Pág. 1923.

⁵⁰ FERREYRA DELAGADO Francisco., op. cit. Pág. 88.

comoquiera que la figura típica contiene una advertencia de pena, la fórmula lingüística que la encierra debe contener una norma condicional, lo que la hace más complicada.

El Art. 4, del Código Penal Boliviano establece que nadie podrá ser condenado ni sometido a medida de seguridad alguna sino por un hecho que esté expresamente previsto como delito por ley penal vigente. “Por lo tanto, la ley definirá el hecho punible desarrollando lingüísticamente su propia estructura. La formulación lingüística del hecho reprochable, lo convierte en sintaxis, y esta en estructura oracional.

Según Francisco Ferreira Delgado en su obra Teoría General del Delito, “En lo tipificado se abstrae una advertencia y una punición, que está condicionada a la existencia del hecho. Ello porque, además de fijar los máximos y los mínimos de penalidad aplicable a la aparición del hecho, lo prohíbe implícitamente. Por esto, fuera de condicionar el castigo, advierte a los súbditos de la ley. Lo cual nos indica que la tipicidad penal es fundamentadora y protectora del régimen de derecho en que vive una democracia”⁵¹.

La tipicidad resulta, un marco dentro del cual se encierra la conducta prohibida, y fuera del cual se mueve libremente el ciudadano y, de allí que la precisión del hecho típico sea de esencial importancia.

⁵¹ Id. Pág. 89.

SEBASTIÁN SOLER, citado por Francisco Ferreira Delgado, habla de “las “zonas de tolerancia” para señalar aquellas acciones que no quedan amparadas por el verbo rector, ni en su núcleo, ni en su periferia, pero que, sin embargo, tangencialmente se le aproximan. Pues no son acciones punibles, aunque no sean exactamente formas honestas de vida”⁵².

Como ya dijimos en capítulos anteriores, la tipicidad penal, en su abstracción gramaticada, fija con exactitud lo punible humano, limitando su libertad de actuación a todo lo que se encuentre por fuera de la figura típica, y restringiéndola a lo que quedó descrito en ella. Motivo por el cual su eficacia depende de su construcción lingüística, y su análisis es conveniente.

El esquema lingüístico debe ser completo en lo que pretende, como quiera que trata de prohibir un hecho y advertir una pena; y debe ser sintético, como los verbos que emplea, evitando el exceso y el defecto. Esta perfección de lenguaje escrito obliga a meditar en un grupo de reglas que propone Ferreira Delgado a continuación.

El legislador, al redactar las figuras típicas, debe tener en cuenta:

a) Conocer lo que se quiere reprochar.- Debe estudiarse el fenómeno que se quiere reducir a palabras escritas, tanto en su esencia como en sus contornos objetivos y aun en su dimensión sicológica, incluso en su aptitud de daño a los demás.

⁵² Id. Pág. 90.

b) Reducirlo a palabras que lo abarquen totalmente.- Al reducir este hecho a una expresión lingüística, debe tenerse en cuenta que en ella deberá quedar encerrado todo lo que se pretenda reprochar, y que lo que se emita no podrá serlo, porque no queda prohibido.

c) Complementar la descripción estructural del tipo con sus elementos normativos.- Cuando el hecho descrito merece ser complementado con ciertos valores jurídicos o metajurídicos que, a pesar de no hallarse definidos en la ley penal misma, forman parte de lo reprochable típico, deben introducirse en la estructura típica con voces o frases que los señalen concreta y científicamente. Para ello es preciso usar las mismas palabras con que los señalan las ciencias en donde se originan.

d) Introducir voces o frases que indiquen lo subjetivo del autor necesario para valorar lo reprochable típico.- De la misma manera como ocurre con los elementos normativos en el tipo, cuando la acción descrita y señalada por el verbo no es suficiente, por sí misma, para merecer el reproche, sin una cierta situación psicológica en su autor, la tipicidad debe complementarse con las palabras precisas que indiquen lo subjetivo del autor.

e) Advertir la pena dentro de sus máximos o sus mínimos, al final de la descripción del hecho prohibido, o remitir a la tipicidad principal cuando la penalidad deba graduarse por esta.- Cuando la pena se fija por la figura típica

misma, enlazan en una oración compuesta, dos cuerpos oracionales distintos: uno que describe el hecho (oración principal) y otro que describe la pena imponible (oración subsidiaria). La figura típica no se reduce a la primera, sino al compuesto de ambas.

f) Estructurar gramaticalmente todo el contenido típico.- La oración es el, vehículo de expresión escrita de una tipicidad penal, por ser la elocución mínima de sentido completo en si misma. La forma inequívoca como debe quedar definido el hecho, depende de la precisión con que se sigan las reglas de la sintaxis española.

2.7.9. COMPOSICIÓN GRAMATICAL DE LAS FIGURAS TÍPICAS.

2.7.9.1. ESTRUCTURA ORACIONAL Y ESTRUCTURA TÍPICA.

La cuestión que se plantea en estas líneas se halla condensada en una pregunta: ¿Cómo se construyen los tipos en la ley penal? Anticipemos que una tipicidad se consigue mediante el empleo correcto de las reglas de la gramática, por cuanto su construcción se logra haciendo uso del lenguaje escrito.

Desde *Protágoras* y *Aristóteles*, a las categorías gramaticales se las hace coincidir con la lógica. En la Construcción española, “por ejemplo, la oración está presidida por El sujeto; lo que se predica de él se condensa en un Verbo, que es el

núcleo de lo que de aquel se dice, se esclarece con sus complementos, el adverbio lo modifica, anteponiéndose. Así, el conjunto toma un sentido completo en sí mismo y ello no es cuestión del azar, ni tampoco la aplicación de una ecuación matemática como creen los estructuralistas, sino la consecuencia de ser un idioma la manera de expresarse un ser absolutamente lógico como lo es el hombre.

Por esto la oración gramatical tiene un orden estructural sometido a la técnica. Las palabras no se colocan a capricho del hablante, sino que se coordinan y unen conforme a reglas precisas establecidas por la sintaxis. Sobre ella dice la Real Academia, que hace que el habla humana resulte ser algo lógico e inteligente y no anfibológico o extravagante. Motivo por el cual se habla de un orden oracional con elementos constitutivos propios, aunque esto no signifique que el hablante pierda libertad expresiva. Al contrario, la sintaxis le construye un conducto por donde sus ideas se desenvuelven correctamente. Gracias a ello, anota la misma institución, el español es uno de los grandes lenguajes que hablan los hombres y el de mayor libertad para expresarse.

Para describir lo reprochable en una figura típica se acude a la oración gramatical, a fin de definir, en la Ley Penal, el hecho punible de manera inequívoca”.

Pues bien, las figuras típicas se construyen correspondiendo exactamente con el orden oracional y, con ello, sus elementos constitutivos. Veámoslo.

Los elementos que constituyen la oración gramatical son:

Primero.- El núcleo del sujeto con el cual se encabeza la oración. Es llamado así, porque al sujeto se lo identifica con diversos elementos gramaticales.

Segundo.- Los complementos del sujeto, así como la denominada “oración sujeto” que son voces o palabras que tienden a esclarecerlo o determinarlo para evitar confusiones al respecto.

Tercero.- El verbo que es el enlace entre el sujeto y lo que se predica de él. A veces, con sus modificaciones adverbiales.

Cuarto.- Los complementos del verbo, que son directos o indirectos o circunstanciales, y que completan lo predicado del sujeto.

Quinto.- Los complementos de sus complementos, que esclarecen la idea que del sujeto se quiere expresar.

Frente a los anteriores, los elementos con que se construye una tipicidad son los siguientes:

Primero.- El sujeto activo o autor del hecho punible. El hecho típico se refiere exclusivamente a él, de manera que el cómplice no se halla comprendido en una tipicidad pura, sino por medio de un mecanismo amplificador de la figura típica, que permite punirlo con la misma norma.

Segundo.- Los objetos del delito. Por definición, el objeto es aquello sobre lo cual recae inmediatamente la acción u omisión señalada por el verbo. Esto nos identifica dos clases de objetos: el material descrito en el predicado mediante complementos directos, y el jurídico descrito, no en la figura típica, sino en el encabezamiento del respectivo título de derechos al que pertenece aquella.

Tercero.- La acción o la omisión que deberá emprender el autor para convertirse en delincuente. En sí no se describe en la figura típica, pero se indica causalmente con el verbo rector que la condensa y que directamente señala los resultados de daño o de peligro.

Cuarto.- Los elementos normativos y subjetivos que acompañan al verbo o al sujeto, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar, cuando las hay.

De modo que la tipicidad es gramática. Y porque es gramática, una estructura encaja en la otra. Los elementos típicos corresponden con los valores de la sintaxis castellana, porque están condensados en la oración típica.

En español las oraciones son bimembres o unimembres. Las primeras son las que se descomponen en dos partes o miembros: sujeto y predicado. En las unimembres va solo el predicado, porque el sujeto está implícito en él. A veces basta el solo verbo para expresar de un sujeto lo que se desea: cantábamos, adiós, trueno, son ejemplos de oraciones unimembres dados por la Real Academia. No obstante, la oración típica es siempre bimembre, porque es preciso evitar ambigüedad respecto al autor del hecho reprochable. De omitirse el señalamiento del autor, quedarla impreciso, porque a quién habrá de aplicarse el reproche, sería labor del solo verbo.

En la figura típica se encuentran dos elementos: el hecho o la omisión descritos y condensados en el verbo rector, como elemento condicionante; y la pena, como elemento condicionado.

Cuando la figura típica comprende hechos o situaciones que no pueden reprocharse a cualquier persona, sino que el autor o autores deben reunir determinadas condiciones o cualidades individuales, el pronombre es reemplazado por un sustantivo nominal que lo determina exactamente: así, en la hostilidad militar de que habla el Art. 112 se indica mediante la expresión “el colombiano”, y en el delito de quiebra, el Art. 1937 del C. de Co. lo señala mediante las palabras “el comerciante”. En otros casos, el pronombre es reemplazado por un adjetivo que cualifica al autor; así, el Art. 133 y para el peculado, lo indica con la expresión

Originalmente las oraciones bimembres, como lo es la oración típica, pueden ser simples o compuestas. Son simples cuando se integran por dos miembros únicos: sujeto y predicado. Son compuestas cuando la idea que se quiere expresar en ellas, bien sea sobre el sujeto al que se refieren o sobre lo que se predica de él, queda insuficientemente descrita cuando sujeto y predicado se indican por el solo pronombre y por el verbo. Si se hace necesario expresar la idea de sujeto agregando sus cualidades individuales o su situación de hecho al realizar lo que de él se predica, es cuando se usa la oración sujeto que es tanto como añadir a la oración principal otra oración incorporada a aquella, que esclarezca quién es el sujeto de la misma. Es esta una oración compuesta, y se llama así porque se forma con dos oraciones entrelazadas de las que una es la principal y otra es la subordinada. Este enlace interoracional se consigue mediante el empleo de pronombres relativos, o preposiciones, o conjunciones, o adverbios.

En la figura típica solamente se describe al autor del hecho y no al cómplice, por cuanto este se indica mediante el mecanismo amplificador colocado en la parte general.

2.7.9.2.EL VERBO RECTOR EN LA SINTAXIS DEL TIPO.

En la composición oracional de la figura típica viene después el verbo, porque es la palabra más característica de lo que se predica del autor. El reproche se hará

cuando el verbo se conjugue en pasado, porque solo entonces el hecho se adapta fenoménicamente a la figura típica. El solo verbo contiene el núcleo o extracto o resumen de lo que es reprochable al autor, y por eso concreta en él el resultado del accionar o el omitir humanos, resultado que podrá ser lesivo de derechos o expositor a riesgo de los mismos.

El diccionario académico define al verbo como la palabra que tiene variaciones de número, persona, tiempo y modo; concepción esta que la Real Academia explica en su gramática diciendo que el verbo es la parte de la oración que puede variar en su forma, en cuanto a su número, en cuanto a las personas a que se refiere, en cuanto al tiempo en que se conjuga y en cuanto al modo de conjugación. Forma parte del predicado de la oración. A él se encomienda la tarea de resumir el núcleo de lo que se reprocha al autor, y por eso tiene morfemas flexivos.

Como categoría lingüística necesaria para la construcción española, el verbo es la palabra que enlaza al sujeto con lo predicado de él. Técnicamente forma parte del predicado, pero realmente es un enlace entre éste y el autor. En la sintaxis del tipo, el verbo tiene la tarea de señalar a quién se hace el reproche (quien), así como qué es lo reprochable (el que). Por eso ha dicho de él la Corte Suprema de Justicia, que define claramente la conducta o comportamiento del sujeto activo.

CAPITULO III

LOS TIPOS PENALES DE LA LEY N° 1008 EN LA LEGISLACIÓN PENAL BOLIVIANA Y EL DELITO DE NARCOTRÁFICO EN EL DERECHO COMPARADO

3.1. TIPIFICACIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE NARCOTRÁFICO EN BOLIVIA.

La Ley del Régimen de la coca y sustancias controladas mas conocida como “Ley 1.008 “ regula en el Título III con el nombre “De los delitos y las Penas”, inicialmente, realiza la primera tipificación de carácter genérico respecto a la siembra, plantación, cosecha, colección de plantas Controladas con el nomen juris de “Plantas controladas” señalando en el Art. 46: “El que ilícitamente sembrare, plantare, cosechare, cultivare o colectare plantas o partes de plantas señaladas por el anexo a que se refiere el inciso a) del Artículo 33 de la presente Ley será sancionado con la pena de uno a dos años de presidio, en caso de reincidencia de dos a cuatro años y doscientos cincuenta a quinientos días multa. A su vez el artículo 33 en su inciso a) señala “sustancias controladas” Se entiende por sustancias controladas, las sustancias peligrosas o sustancias fiscalizadas, los fármacos o drogas naturales o sintéticas (cocaína, cannabis y su resina, cetobemidona, desomorfina, heroína, DET. DMA, DMHP etc.) Y las que en el futuro figuren en listas oficiales del ministerio de salud pública.

Como se ha visto el delito puede cometerse de cuatro formas: a) sembrar, b) cosechar, c) cultivar y d) coleccionar ilícitamente plantas o partes de plantas.

El bien jurídicamente protegido: “es la salud pública”.

Sujeto Activo: Cualquier persona que ilícitamente sembrare, cosechare, cultivare colectare plantas o partes de plantas descritas en el inciso a) del Artículo 33 de la presente ley.

Sujeto Pasivo: Es la sociedad en cuanto ve amenazada su salud pública.

Sanción: Uno a dos años de *presidio*, si existe agravante en caso de reincidencia la sanción es de dos a cuatro años y multa de doscientos cincuenta a quinientos días.

Se observa la terminología empleada en el artículo porque la pena de “presidio” es una pena principal que dispone la presente ley en discordancia con lo que dispone el Código Penal en el inc. 1) Del Art. 27 que establece que; “El presidio se aplicará a los delitos que revistan gravedad y tendrá una duración de uno a treinta años” en cambio la “reclusión” se aplicará a los delitos de menor gravedad y su duración será de un mes a ocho años”, por lo que tratándose de un tipo penal de escasa sanción, debiera corresponder a la sanción de “reclusión” y no de “presidio” como erróneamente se ha dispuesto en la Ley 1008.

Por su parte el Art. 47 establece; (FABRICACION), “El que fabricare ilícitamente sustancias controladas, será sancionado con presidio de cinco a quince años y dos mil quinientos a siete mil quinientos días multa”. Las personas dedicadas al proceso de maceración de coca llamados “pisa cocas” serán sancionadas con la

pena de presidio de uno a dos años y de doscientos a quinientos días multa, siempre que colaboren con la investigación y captura de sus principales.

Bien jurídico protegido: Es la “continuidad generacional”.

Sujeto activo: Es toda persona que fabricase en forma ilícita sustancias controladas, de manera que para que la acción sea punible debe ser ilícita. Por otra parte este delito es cometido en asociación, lo que implica la “asociación delictuosa” y “confabulación”, sancionado por el Artículo 53 de la misma Ley, en razón de que es difícil que una sola persona pueda cometer este delito, con la dificultad que entraña fabricar sustancias controladas, por eso que se valen de los “pisa-cocas”⁵³, pero en todo caso la responsabilidad es individual.

Sujeto Pasivo: *Cualquier persona, niños, jóvenes, adultos, la sociedad en general.*

Sanción: La sanción para esta clase de delitos es de privación de libertad y pecuniaria, la primera es de presidio de cinco a quince años y la segunda de dos mil quinientos a siete mil quinientos días multa (respecto a los días multa hoy en día es inaplicable pues se sanciona a un máximo de quinientos días multa estipulado en el Art. 29 del Código Penal.)

⁵³ Idem. José María Rivera Ibáñez “Ley del régimen de la coca y sustancias controladas” Pág. 110.

El Artículo 48 se refiere al delito de TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS en estos términos: “El que traficare con sustancias controladas será sancionado con presidio de diez a veinticinco años y diez mil a veinte mil días multa. Constituye circunstancia agravante el tráfico de sustancias controladas en volúmenes mayores y realiza un añadido muy interesante, “Este artículo comprende toda conducta contemplada en la definición de tráfico dada en el inciso m) del artículo 33 de esta Ley”. A su vez el artículo 33 de esta ley en su inciso m) señala: “Se entiende por tráfico ilícito de sustancias controladas todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título; financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas”.

El tráfico de sustancias controladas, como ya se vio, es un delito de peligro por poner en riesgo el bien jurídico protegido.

El bien jurídicamente protegido es: “La continuidad generacional”.

Sujeto activo: Es toda persona que trafique y que realice cualesquiera de las modalidades o clases de conductas comprendidas en la Ley 1.008. Dichas modalidades están expresadas en el Art. 33 inciso m) que dice “Tráfico Ilícito: Se

entiende por tráfico ilícito de sustancias controladas todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título; financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas.”

Sujeto Pasivo: Puede ser cualquier persona, en especial los sectores más vulnerables: la juventud, la niñez y la sociedad en su conjunto.

Sanción: Pena de presidio de diez a veinticinco años y diez mil a veinte mil días multa. (Hoy en día respecto a los días multa que señala este artículo son inaplicables pues se sancionan a un máximo de quinientos días multa estipulado en el Art. 29 del Código Penal por más que exista un agravante)

Con la circunstancia agravante si el tráfico se hubiera realizado en cantidades mayores, presidio hasta 30 años.

Por su parte el *Artículo. 49*, establece que “el dependiente y el consumidor no habitual que fuere sorprendido en posesión de sustancias controladas en cantidades mínimas que se supone son para su consumo personal inmediato, será internado en un instituto de fármaco-dependencia público o privado para su tratamiento hasta que se tenga convicción de su rehabilitación.”

“La cantidad mínima para consumo personal inmediato será determinada previo dictamen de dos especialistas de un instituto de fármaco-dependencia público. Si la tenencia fuese mayor a la cantidad mínima caerá en la tipificación del Artículo 48 de esta Ley.”

“A los ciudadanos extranjeros sin residencia permanente en el país que incurran en la comisión de estos hechos se les aplicará la ley de residencia y multa de quinientos a mil días.”

Del texto del artículo se desprende que la disposición pone en igualdad de condiciones al consumidor dependiente y al no habitual, quienes deben ser internados en un instituto de rehabilitación, no obstante existir entre ambos apreciables diferencias, en consecuencia el tratamiento para su rehabilitación tiene que ser también diferente y hasta es posible que el consumidor no habitual no requiera tratamiento. Además de existir un error en la redacción puesto que no determina quien va a disponer el internamiento como no lo hace ninguna otra disposición de la misma ley. La segunda conducta típica se refiere a la tenencia (de sustancias controladas) mayor a la mínima en cuyo caso el agente incurre en la comisión del delito previsto en el Art. 48, o sea, tráfico de sustancias controladas, el que además comprende la amplia gama de conductas o modalidades previstas en el inc. m) del Art. 33 de la misma Ley, porque el poseer sustancias controladas en cantidad mayor a la mínima, implica según el precepto “tráfico”, ya que además la finalidad que

persigue el agente ya no sería exclusivamente para el consumo personal inmediato sino el comercio, distribución, suministro, expendio, transporte etc. que nuestra Ley traduce en tráfico. Con relación a la última parte referente a los súbditos extranjeros, existe error y es el que indica que se aplicará la Ley de residencia a los extranjeros sin residencia en el país, lo que significaría que los extranjeros con residencia permanente u objeto determinado que cometan estos hechos estarían exentos de sanción.

Bien jurídico protegido: “Es la salud Pública”.

Sujeto activo: Es el consumidor.

Sujeto pasivo: Es la ciudadanía toda.

Sanción: Internación en un instituto de fármaco dependencia público o privado para su tratamiento hasta que se tenga convicción de su rehabilitación, o de 10 a 25 años de presidio si incurre en la tipificación del Art. 48 de la Ley 1008, previo dictamen de dos especialistas de un instituto de fármaco dependencia público y se demuestre que la tenencia era mayor a la cantidad mínima.

El Artículo 50; de la misma ley establece que el que ilícitamente administrare a otros sustancias controladas será sancionado con diez a quince años de presidio y mil quinientos a tres mil días multa, cualquiera fuere la cantidad administrada.

El tipo penal se refiere al abuso en la aplicación ilícita de sustancias controladas a un individuo ya sea por inyección, inhalación, ingestión o cualquier otro modo para hacer consumir una droga o para estimular o difundir el uso ocasionando, en consecuencia se produzca un daño en la persona que consume; porque entiende la ley que esta forma de hacer consumir sustancias controladas es sin motivos terapéuticos medicinales ya que se puede quebrantar la salud física o mental.

El Bien jurídico protegido: “es la salud física y mental de las personas así como la libertad de consumir o no de la víctima o sujeto pasivo”.

El sujeto activo: de este delito es cualquier persona que administre ilícitamente sustancias controladas.

El sujeto pasivo: igualmente puede ser cualquier persona que ha consumido sustancias controladas como víctima de esa administración ilícita.

La sanción: Es de diez a quince años de presidio y mil quinientos a tres mil días multa cualquiera fuere la cantidad administrada. (Hoy en día respecto a los días multa que señala este artículo son inaplicables pues se sancionan a un máximo de quinientos días multa estipulado en el Art. 29 del Código Penal.)

El Artículo 51; al referirse al Suministro, establece que “El que suministrare ilícitamente a otro sustancias controladas, será sancionado con presidio de ocho a doce años y mil a dos mil días multa, cualquiera sea la cantidad suministrada.”

El delito de suministro consiste en dar, proveer o abastecer en forma ilícita sustancias controladas ya sea a título oneroso o gratuito.

El bien jurídico protegido: “es la salud física y mental de la que recibe y lo es también la propia sociedad o lo que también llamamos la “continuidad generacional”.

Verbo rector: Suministrar.

Sujeto activo: Cualquier persona que provea, abastezca, de forma ilícita sustancias controladas.

Sujeto pasivo: Puede ser cualquier persona que recibe esas sustancias controladas, sin importar si es para su consumo personal, comprar, vender, entregar, transportar, etc.

Sanción: La pena es de ocho a doce años de presidio y mil a dos mil días multa, cualquiera sea la cantidad suministrada. (Hoy en día respecto a los días multa que señala este artículo son inaplicables pues se sancionan a un máximo de quinientos días multa estipulado en el Art. 29 del Código Penal.)

El artículo 52; establece agravante al artículo anterior en el sentido de que si como consecuencia de la administración o suministro ilícito de sustancias controladas resultare un quebrantamiento grave de la salud, la sanción será de quince a veinte años de presidio y mil a tres mil días multa. Si del hecho resultare la muerte de la persona, la, sanción será de veinte a treinta años de presidio.

El precepto tiene dos partes, la primera si resultare quebrantamiento grave de la salud o sea en el funcionamiento psicológico, biológico, fisiológico o anatómico del cuerpo de alguna persona que como consecuencia de la administración ilícita de sustancias controladas. La segunda si del hecho resultare la muerte de la persona, es decir daría lugar al delito preterintencional.

El bien jurídicamente protegido: “Es la integridad corporal, la salud y la vida o sea la “continuidad generacional”. Es un delito de peligro”.

Verbos rectores: Administrar, Suministrar.

Sujeto activo: Cualquier persona que provea, abastezca o dé ilícitamente y a consecuencia se produzcan esas consecuencias.

Sujeto pasivo: Cualquier persona que por el consumo sufra las indicadas consecuencias.

Sanción: Presidio de quince a veinte años y multa hasta quinientos días. Y si del hecho resultare la muerte de la persona la sanción será de veinte a treinta años de presidio.

El Artículo 53; se refiere a la Asociación Delictuosa en estos términos: “Los que se organicen en grupos de dos o más personas para la comisión de los tipos penales establecidos en la presente ley, serán sancionados con un tercio más de la pena principal”.

El artículo tipifica los delitos de asociación delictuosa y confabulación.

Se entiende por *Asociación delictuosa* al hecho por el cual dos o más personas se asocian o se organizan con el objeto de cometer alguno de los delitos penados por la ley en estudio, sin importar la consumación del hecho.

La confabulación se entiende al acto de ponerse de acuerdo dos o más personas para tramar alguno de los delitos previstos en esta ley, se lo toma como similar a la “*conspiración*”. Es un delito permanente porque la situación antijurídica se prolonga hasta que dure la asociación o confabulación, aunque no se cometan delitos.

El bien jurídico protegido: “es la continuidad generacional”.

Verbos rectores: Organizar, Asociar.

El sujeto activo: Cualquier persona que pertenezca a una asociación delictuosa o los que se confabulen para la comisión de los delitos señalados por Ley.

Sujeto pasivo: Es la sociedad.

La sanción: Se refiere como agravante, que corresponderá a un tercio más del delito principal.

El Artículo 54; se refiere a la Inducción señalando que: “el que indujere a otro al uso indebido de sustancias controladas será sancionado con cinco a diez años de presidio y dos mil a cuatro mil días multa. Si el inductor aprovechar su condición de ascendiente o autoridad sobre el inducido o éste fuera menor de edad o incapaz o el delito se cometiera en establecimientos educativos, asistenciales, militares, policiales o penitenciarios o en sus inmediaciones, la pena será de diez a veinte años de presidio y cuatro mil a ocho mil días multa”.

El bien jurídicamente protegido: “es en primer término la salud física y mental del inducido y por ende la sociedad ya que del uso ocasional se puede llegar al permanente con sus consiguientes secuelas graves”

Verbo rector: Inducir.

Sujeto activo: Cualquier persona que induzca a otra al uso indebido de sustancias controladas.

Sujeto pasivo: Cualquier persona que ha sido inducida al uso indebido de esas sustancias.

La sanción como ya se dijo es de cinco a diez años de presidio y dos mil a cuatro mil días multa. Si existen agravantes la sanción es de diez a veinte años de presidio y cuatro mil a ocho mil días multa. (Hoy en día respecto a los días multa que señala este artículo son inaplicables pues se sancionan a un máximo de quinientos días multa estipulado en el Art. 29 del Código Penal.)

El Artículo 55; se refiere al “Transporte”, señalando: “El que ilícitamente y a sabiendas trasladare o transportare cualquier sustancia controlada, será sancionado con ocho a doce años de presidio y mil a mil quinientos días multa e incautación definitiva del motorizado o medios de transporte.

Bien jurídicamente protegido: La continuidad generacional.

Verbo rector: Transportar.

Sujeto activo: puede ser cualquier persona que a sabiendas y sin autorización legal traslade o transporte sustancias controladas.

Sujeto pasivo: es la sociedad en su conjunto.

La sanción: como ya se estableció es de ocho a doce años de presidio y mil a mil quinientos días multa y la incautación del motorizado o medios de transporte. (Hoy en día respecto a los días multa que señala este artículo son inaplicables pues se sancionan a un máximo de quinientos días multa estipulado en el Art. 29 del Código Penal.)

El Artículo 56; referido a la instigación señalando: “El que instigare o incitare a otro a la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en el presente título, será sancionado con cuatro a seis años de presidio y dos mil a tres mil días multa. Si el instigado fuere menor o incapaz, la pena será de cinco a diez años de presidio y dos mil a cuatro mil días multa”.

El bien jurídicamente protegido: “es la libertad de resolución del individuo”.

Verbos rectores: Instigar, Incitar.

Sujeto activo: Cualquier persona.

Sujeto pasivo: Cualquier persona que sea instigada a cometer esos delitos.

Sanción: Cuatro a seis años de presidio y dos mil a tres mil días multa. (Hoy en día respecto a los días multa que señala este artículo son inaplicables pues se sancionan a un máximo de quinientos días multa estipulado en el Art. 29 del Código Penal. por más que se de la existencia de un agravante en caso de que el instigado fuere menor o incapaz) “Si el instigado fuere menor o incapaz, la pena será de cinco a diez años de presidio y dos mil a cuatro mil días multa”

El Artículo 57; se refiere al caso del asesinato, el homicidio causado por expreso propósito mediante uso de sustancias controladas equivale al uso del veneno, que constituye delito de asesinato conforme al Artículo 17 de la Constitución Política y el inciso 5) del Artículo 252 del Código penal.

Siguiendo la opinión de Armando Aquino⁵⁴, quien considera impertinente e innecesario este artículo porque dicha figura ya se encuentra bien tipificada en el Art. 252 inc. 5) del Cod. Penal, resultando así inútil, el texto del citado artículo 57, que dicho sea de paso, no penaliza con nada dicha figura jurídica, además está muy mal redactado porque en derecho penal no se puede hablar de homicidio y asesinato a la

⁵⁴ AQUINO HUERTA Armando, “Legislación y Procedimiento en Narcotráfico” Tomo I, Primera Ed. Pág. 59 y 60.

vez ya que cada tipo penal tiene sus propios elementos. Opinión con la que estamos plenamente de acuerdo.

Bien jurídicamente protegido: “La vida de las personas físicas naturales”.

Verbo rector: Matar.

Sujeto activo: Es el individuo que mata a otro por expreso propósito mediante uso de sustancias controladas.

Sujeto pasivo: Es la víctima cuya muerte ha sido ocasionada en forma expresa por el uso de sustancias controladas.

Sanción: Treinta años de presidio sin derecho a indulto.

El Artículo 58; se refiere a la falsificación de recetas médicas con objeto de obtener sustancias controladas, sancionando con tres a cinco años de presidio y doscientos a cuatrocientos días multa, así como al que adulterare y/o falsificare, licencias permisos pólizas de importación, facturas, cartas de porte u otros documentos para internar al país sustancias controladas serán sancionadas con ocho a quince años de presidio y tres mil a seis mil días multa.

La primera parte del artículo se refiere a la adulteración o falsificación con la intención fraudulenta de obtener sustancias controladas. La segunda parte se refiere a

la adulteración o falsificación de instrumentos públicos como pólizas de importación, licencias, permisos etc. para internar en el país sustancias controladas, para cuyo caso se agrava la sanción de ocho a quince años de presidio e igualmente multa de hasta un máximo de quinientos días multa.

El bien jurídicamente protegido: “es la fe pública”.

Verbos rectores: Adulterar, falsificar.

El sujeto activo: Es cualquier persona que adultere o falsifique certificado o receta médica o cualquier otro documento con el propósito de obtener sustancias controladas o internar en el país las mismas.

El sujeto pasivo: Puede ser cualquier persona que cometa estos delitos para proveerse de sustancias controladas consecuentemente la Salud Pública.

Sanción: Presidio de tres a cinco años y doscientos a cuatrocientos días multa. En caso de agravante la pena es de ocho a quince años de presidio y tres mil a seis mil días multa. (Hoy en día respecto a los días multa que señala este artículo son inaplicables pues se sancionan a un máximo de quinientos días multa estipulado en el Art. 29 del Código Penal).

El Artículo.59; se refiere a la importación de sustancias controladas que no cumpliera con los requisitos exigidos por la presente ley, será sancionado con la suspensión de su registro de importación por el término de doce meses y diez mil días multa. En caso de reincidencia, se impondrá la cancelación de su registro de importador y su personero legal será responsable de las penas establecidas por el Art. 48.

El bien jurídicamente protegido: “Es la salud pública”.

Verbo rector: Importar.

Sujeto activo: Es el importador que incumple los requisitos establecidos por la Ley para la importación de sustancias controladas.

Sujeto pasivo: Es la sociedad.

Sanción: *Suspensión* del Registro temporal, en caso de reincidencia cancelación del registro de importador por el término de doce meses y diez mil días multa. (Hoy en día respecto a los días multa que señala este artículo son inaplicables pues se sancionan a un máximo de quinientos días multa estipulado en el Art. 29 del Código Penal).Y su personero sancionado con las penas establecidas en el Art. 48 es decir presidio de 10 a 25 años.

El Artículo.60; se refiere a la obligación de denuncia por parte del propietario en caso de que tuviere conocimiento de que en sus predios o inmuebles se siembre, cultive, coseche, colecte plantas o partes de plantas controladas a las que se refiere la presente ley o las que se fabriquen o elaboren sustancias controladas y no comunique estos hechos a las autoridades competentes será sancionado con tres a cinco años de presidio e incautación o reversión de su propiedad.

Es un delito de omisión que se sanciona por dejar de denunciar los hechos señalados porque el precepto lo establece como obligación.

Bien jurídico protegido: “La administración de justicia (en caso de que el cultivo sea ilícito)”

Verbo rector: Omitir.

Sujeto activo: El propietario de fundos o inmuebles que omitiere denunciar los hechos especificados en el precepto a la autoridad competente.

Sujeto pasivo: La sociedad toda.

Sanción: Presidio de tres a cinco años e incautación y reversión de su propiedad.

El Artículo.61; nos refiere al encubrimiento en locales públicos, señalando que los propietarios, gerentes, administradores, o concesionarios de hoteles, moteles, restaurantes, confiterías, clubes, bares, locales de diversión, prostíbulos, casa de citas, hospitales, clínicas y otros establecimientos abiertos al público, están obligados a informar a las autoridades competentes sobre la presencia de personas que trafiquen, posean o consuman sustancias controladas serán sancionados de uno a dos años de presidio y quinientos a mil quinientos días multa de no informarlo. En caso de comprobarse permisibilidad, encubrimiento o complicidad será sancionado de dos a seis años de presidio y de dos mil a cuatro mil días multa.

En la primera parte del precepto se sanciona la omisión de no denunciar, la segunda parte agrava la pena para los casos de comprobarse permisibilidad, encubrimiento, complicidad, cuando existe consentimiento tácito para que se realicen los hechos descritos en el tipo.

Bien Jurídico protegido: “La administración de justicia”.

Verbo rector: Encubrir.

Sujeto activo: Cualquier persona.

Sujeto pasivo: El Estado en cuanto a la administración de justicia.

Sanción: Uno a dos años de presidio y quinientos a mil quinientos días multa, como se mencionó anteriormente. Pero respecto a los días multa, son inaplicables pues se toma en cuenta el Art. 29 del Código Penal.

Por su parte el *Artículo.62*, establece la obligatoriedad de los profesionales de la rama médica y de otras personas en cuyo ejercicio tuvieren la facultad de expedir recetas sobre sustancias controladas y que lo hagan sin llenar las formalidades previstas por disposiciones legales, serán sancionados de conformidad al Código de Salud después de más de dos mil a cuatro mil días multa. En caso de reincidencia serán sancionados con inhabilitación definitiva del ejercicio profesional, con presidio de dos a cinco años.

El precepto establece diferencias en las personas que al igual que las sanciones, vale decir, son diferentes según se trate de propietario profesional, regente o empleado del establecimiento, las mismas que están previstas en los incisos a), b) y c) de la primera parte del precepto. La segunda parte se refiere a la agravante en caso de reincidencia.

Bien jurídico protegido: “Es la salud pública”.

Verbo rector: Omitir.

Sujeto activo: Cualquier profesional de ramas médicas o afines.

Sujeto pasivo: Es la sociedad en su conjunto.

Sanción: De acuerdo al Código de Salud. En caso de reincidencia serán sancionados con inhabilitación definitiva del ejercicio profesional y con presidio de dos a cinco años.

El Artículo. 63; se refiere a la venta en farmacia, señalando que el propietario, regente, empleado de droguería, farmacia o local de comercio autorizado para la venta de medicamentos, que despacharen sustancias controladas sin llenar las formalidades previstas en las disposiciones legales, será sancionado en la siguiente forma: a) Al propietario con la clausura de su establecimiento por el término de seis meses y dos mil a cuatro mil días multa. Además con un año de suspensión si fuere profesional. b) Al regente, con un año de suspensión del ejercicio profesional y mil a dos mil días multa. c) EL empleado o dependiente si resultare responsable con quinientos a dos mil días multa. En caso de reincidencia o habitualidad las sanciones serán las siguientes: 1) al propietario profesional, cancelación de su registro e inhabilitación definitiva del ejercicio profesional, clausura definitiva del establecimiento y presidio de dos a cinco años. 2) Al propietario no profesional, presidio de cinco años y clausura definitiva de su establecimiento. 3) al regente, presidio de dos a cinco años e inhabilitación definitiva del ejercicio profesional. 4) Al empleado o dependiente, presidio de dos a cinco años.

Bien jurídico protegido: “Es la salud pública”.

Verbo rector: Omitir.

Sujeto activo: Cualquier propietario regente o empleado de droguería, farmacia o establecimiento comercial autorizado para la venta de medicamentos que expidiere indebidamente sustancias controladas.

Sujeto pasivo: Cualquier persona que obtenga sustancias controladas expeditas ilícitamente por algún sujeto activo.

Sanción: Clausura del establecimiento, suspensión del ejercicio profesional y presidio de acuerdo a cada caso.

El Artículo 64; establece por su parte que los responsables de firmas importadoras, droguerías, farmacias y locales autorizados para el expendio o suministro de medicamentos con sus sustancias controladas, cuya existencia en depósitos no guarden relación con sus inventarios y registros, serán sancionados con dos mil a cuatro mil días multa y la incautación de la mercadería. En caso de reincidencia o habitualidad se impondrá de dos a cuatro años de presidio y la clausura definitiva del establecimiento.

Bien jurídico protegido: “Es la administración de justicia”.

Verbo rector: Omitir.

Sujeto activo: Cualquier persona responsable de firmas importadoras.

Sujeto pasivo: Es el Estado y la sociedad.

Sanción: De dos mil a cuatro mil días multa y la incautación de la mercadería, en caso de reincidencia o habitualidad, se impondrá de dos a cuatro años de presidio y la clausura definitiva del establecimiento. Pero como se menciona de manera reiterada, respecto a los días multas que tipifica este artículo son inaplicables por el Art. 29 del Código Penal.

Estos son los tipos penales más importantes de la Ley en estudio.

3.2. BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS POR EL DERECHO PENAL.

El Bien jurídico protegido siguiendo a Moros Mon,⁵⁵ señala en sentido de que el bien jurídico tutelado es la “Continuidad generacional” porque a su criterio toda la humanidad en su raíz misma, gira en torno a su prole; su perpetuación en los tiempos se relaciona con ella. La continuidad generacional en su ley máxima. Esa continuidad

⁵⁵ MOROS, MON Jorge: “Toxicomanía y el Delito”, Ed. Abeledo-Perrot Bs. As. Argentina, 1976, Pág. 81

generacional es la que nosotros sostenemos es el verdadero bien afectado con las drogas. Se afecta a la humanidad en su misma esencia: su perfecta perdurabilidad. *La drogadicción burla las leyes naturales.*

3.3. ANÁLISIS DE LA LEY 1008.

Las principales críticas que se realizan a la Ley 1008, son:

- a) El juzgamiento de estos delitos, no reconoce fueros ni privilegios, con excepción de los casos limitativamente contemplados en la Constitución Política del Estado. Los funcionarios públicos que hubieran cometido estos delitos, serán procesados y juzgados como reos comunes.

- b) La Ley N° 1008 vulnera el principio de igualdad, puesto que una vez realizado el análisis de resoluciones judiciales (SENTENCIAS) en materia de narcotráfico se determinó que operadores de justicia, cada uno a su modo, efectúan subsunciones de conductas similares (en casos idénticos, con la única diferencia de las cantidades de droga poseídas) en tipos penales diferentes, imponiendo a algunos sujetos activos penas de 10 o mas años de presidio entretanto que a otros se impone penas mínimas que les permite acceder a la suspensión condicional de la pena aspecto que nos muestra, además, *violación del principio de igualdad ante la Ley Penal* y revela que las

tipicidades en estudio no cumplen con las exigencias de seguridad jurídica desde la perspectiva de la previsibilidad individual, no pudiendo conceptuarse a la Ley 1008 como ley taxativa, ya que sus indeterminaciones requiere de “interpretaciones” que en la práctica, por la naturaleza del ser humano, no resultan homogéneas, lo que ocasiona aplicación a veces indebida y en otras errónea de la Ley sustantiva creando *inseguridad jurídica*, así como un vacilante camino de la jurisprudencia emergente de la Respetable Corte Suprema de Justicia de la Nación, aspectos que hacen patentes la necesidad de proclamar, si es posible, con rango constitucional, el carácter taxativo de las leyes penales y la proporcionalidad de sus penas.

- c) La Ley N° 1008 no respeta el Principio de Inocencia, pues es notorio que presume la culpabilidad de la persona implicada en Narcotráfico, un claro ejemplo es el artículo 49 de tan mencionada Ley estableciendo lo siguiente: “El dependiente y el consumidor no habitual que fuere sorprendido en posesión de sustancias controladas en cantidades mínimas que se supone son para su consumo personal inmediato, será internado en un instituto de fármaco-dependencia público o privado para su tratamiento hasta que se tenga convicción de su rehabilitación.”

“La cantidad mínima para consumo personal inmediato será determinada previo dictamen de dos especialistas de un instituto de fármaco-dependencia

público. Si la tenencia fuese mayor a la cantidad mínima caerá en la tipificación del Artículo 48 de esta Ley.”

Si hacemos un análisis de lo que pretende este artículo, especialmente en el párrafo donde dice que “si la tenencia fuese mayor a la cantidad mínima caerá en la tipificación del Artículo 48 de esta Ley” denotamos que se trata del tipo penal (TRÁFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS) donde dispone que “El que traficare con sustancias controladas será sancionado con presidio de diez a veinticinco años y diez mil a veinte mil días multa. Constituye circunstancia agravante el tráfico de sustancias controladas en volúmenes mayores y realiza un añadido muy interesante, “Este artículo comprende toda conducta contemplada en la definición de tráfico dada en el inciso m) del artículo 33 de esta Ley”. A su vez el artículo 33 de esta ley en su inciso m) señala: “Se entiende por tráfico ilícito de sustancias controladas todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título; financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas”.

Después de lo descrito solo podemos asegurar que para la Ley N° 1008 es culpable de TRÁFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS aquel que sobrepase la cantidad mínima establecido por un perito aunque este sea

solamente dependiente o en su caso el consumidor no habitual que fuere sorprendido en posesión de sustancias controladas en cantidades mínimas que se supone son para su consumo personal inmediato y no así para el “Tráfico de Sustancias Controlas” además que la persona que sea dependiente o en su caso el consumidor no habitual de sustancias controladas gracias a lo descrito en el párrafo donde determina que en caso de que sobrepasaren la cantidad mínima establecida por un perito por lógica serán sancionados con presidio de diez a veinticinco años y diez mil a veinte mil días multa (aunque los diez mil a veinte mil días multa ya no sea viable por el Art. 29 del Código Penal en donde establece el máximo de días multa es de quinientos.) en vez de que sean internados en un instituto de fármaco-dependencia público o privado para su tratamiento hasta que se tenga convicción de su rehabilitación como lo establece el Art. 49 de la Ley 1008, haciendo notar la “DESPROPORCIONALIDAD EN LA PENALIDAD” de este Artículo (Art.49) pues la sanción no va de acuerdo a la gravedad del delito cometido por la persona, además tampoco respeta lo que establece la finalidad de la pena, que es la rehabilitación del individuo a la sociedad, si no por el contrario se busca el perjuicio que además de ser severo, es innecesario y de ir en contra de lo que establece sabiamente nuestra Constitución Política del Estado en su Art. 16.I. “Se presume la INOCENCIA del encausado mientras nos se compruebe su culpabilidad”.

Por ello el Juzgador deberá hacer una valoración para establecer el grado de culpabilidad, pues se deberá buscar ante todo la voluntad final del agente.

- d) Respecto al Art. 51 (SUMINISTRO) donde establece que el que “El que suministrare ilícitamente a otro sustancias controladas, será sancionado con presidio de ocho a doce años y mil a dos mil días multa, cualquiera sea la cantidad suministrada.”

Se entiende por suministro el traspaso o provisión de una sustancia controlada entre personas, sin justificación legal para tal acto.

En este tipo penal, es imprescindible diferenciar el “suministro que se hace para el consumo”, del “suministro que se realiza para el tráfico o comercialización”. No constituye un acierto del legislador definir el suministro o entrega estableciendo que sea el traspaso sin justificación legal para tal acto, en todo caso es imprescindible diferenciar que dicho suministro es para que otra persona consuma, de lo contrario la conducta se encontraría en el tipo penal referente al Tráfico.

- e) Respecto al agravante del Art. 52 donde establece que “si como consecuencia de la administración o suministro ilícito de sustancias controladas resultare un quebrantamiento grave de la salud, la sanción será de quince a veinte años de presidio y mil a tres mil días multa. Si del hecho resultare la muerte de la

persona, la, sanción será de veinte a treinta años de presidio”. En este artículo, la Ley prevé que se produzcan lesiones, apartándose totalmente en la penalidad, a las contempladas en los Arts. 270 y 271 del Código Penal. Para el caso de que se produzca la muerte de una persona, la sanción es de veinte a treinta años de presidio.

Se trata de un delito preterintencional en el que existe, por parte del infractor, el dolo eventual.

- f) Respecto a la “Asociación Delictuosa y Confabulación” donde se establece que “Los que se organicen en grupos de dos o más personas para la comisión de los tipos penales establecidos en la presente Ley, serán sancionados con un tercio más de la pena principal”. En este tipo penal, el legislador ha incurrido en un grave error por cuanto el delito de asociación delictuosa se convierte en un tipo penal independiente apartándose de las formas de participación criminal. Se trata de un delito formal cuya consumación se realiza en el momento en el que dos o más personas se organizan para cometer delitos tipificados en la Ley especial. En consecuencia, no es necesario que se cometan otros delitos, basta el hecho de organizarse para cometerlos para que sea punible, sin embargo el legislador boliviano *agrava* con un tercio más de la pena principal, olvidándose, de esta manera, que debe existir sanción por la mera organización. Otra cosa es que la asociación incurra en diferentes delitos, en este caso es de perfecta aplicación del texto literal de la ley, lo

contrario resulta incongruente. Se establece que el aumento del tercio de la pena principal se produce cuando la asociación delictuosa comete otros delitos tipificados en la Ley. Asimismo este tipo penal se aparta de la definición que establece el Art. 132, del Código Penal en el cuál se requiere un mínimo de cuatro personas; aquí el mínimo es de dos personas.

- g) Analizando el Art. 61 (ENCUBRIMIENTO EN LUGARES PÚBLICOS) que dispone que “los propietarios, gerentes, administradores, o concesionarios de hoteles, moteles, restaurantes, confiterías, clubes, bares, locales de diversión, prostíbulos, casa de citas, hospitales, clínicas y otros establecimientos abiertos al público, están obligados a informar a las autoridades competentes sobre la presencia de personas que trafiquen, posean o consuman sustancias controladas serán sancionados de uno a dos años de presidio y quinientos a mil quinientos días multa de no informarlo. En caso de comprobarse permisibilidad, encubrimiento o complicidad será sancionado de dos a seis años de presidio y de dos mil a cuatro mil días multa.” Este es un tipo penal en el que se sanciona la omisión de los propietarios de los establecimientos que señala la Ley. No parece muy adecuada la redacción por cuanto incluye *otros establecimientos abiertos al público*, que puede dar lugar a que se aplique la *analogía*, aspecto que es muy peligroso en materia penal. Asimismo, el legislador boliviano en la última parte de este tipo penal, ha incurrido en contradicción por cuanto establece que los casos de permisibilidad, encubrimiento o complicidad son sancionados con dos a seis

años de presidio, y con dos mil a cuatro mil días multa, en franca incongruencia con los Arts. 75 (ENCUBRIMIENTO) donde sanciona a la persona que después de haberse cometido un delito previsto en la Ley 1008, sin promesa anterior ayudare a alguien a eludir la acción de la justicia será sancionado con *cuatro a seis años de presidio y mil a dos mil días multa*, notando evidentemente la incongruencia en la manera de penalizar a la persona acusada. y por otro lado está el Art. 76. (COMPLICIDAD) en el que determina que “El cómplice de un delito relativo a sustancias controladas será sancionado con dos terceras partes de la pena imponible al autos” notando por simple lógica las diferentes penas a las señaladas en este delito.

- h) Respecto al Art. 65. (FUNCIONARIOS PÚBLICOS) “Cuando autoridades, funcionarios, empleados públicos, cometieron los delitos tipificados en esta Ley, participaren de ellos en ejercicio de sus funciones o empleos o se valieran de ellos, la sanción se agravará en un tercio de lo establecido, además de la inhabilitación definitiva para el ejercicio para el ejercicio de la función pública”. En este tipo penal, el legislador, ha extendido demasiado el ámbito punitivo de la Ley, Según el texto, el mero hecho de ser funcionario o empleado público agrava la sanción cuando se cometen delitos tipificados en la Ley. Es notoria la drasticidad porque por el sólo hecho de revestir la calidad de funcionario o empleado, la sanción se agrava. Muy distinto es el caso de que se cometan delitos en el ejercicio de sus funciones o valiéndose de ellas, pero en este supuesto, también existen otros tipos penales como el cohecho o

la concusión. Por todo ello se considera que es necesario descartar la inclusión de esta agravante, ya que se presentaría el caso aberrante de que por ejemplo, un funcionario de Impuestos Internos, al margen de su empleo, se dedique a la comercialización o al tráfico, en este caso se agravaría por el solo hecho de ejercer una función pública, lo que no es justo.

3.3.1. FALTA DE PROPORCIONALIDAD DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS

La Ley 1008 es una ley excesivamente selectiva, ya que sanciona drásticamente a los sujetos más débiles de la sociedad. Los "pisa-cocas" por lo general, terminan convirtiéndose en "chivos expiatorios" del castigo estatal. Para nadie es secreto que las cárceles bolivianas están llenas de los que pertenecen a la última categoría de los estratos delictivos, mientras que a las grandes organizaciones criminales, con honrosas excepciones, nunca les alcanza el sistema penal.

La justicia favorece más a los ricos que a los pobres. Los ejemplos abundan desde la entrega y fuga espectacular de Pablo Escobar en Colombia, los narcoarrepentidos bolivianos, etc.⁵⁶

Estamos frente a un sistema penal que opera desigualmente, en contra de ciertas personas más que en contra de determinados actos. Lo más grave es que existe

⁵⁶ EL PAÍS, (17/8/99); Un "arrepentido" de 17 años dice que la Mafia enseña a niños a matar.

una verdadera desproporcionalidad e irracionalidad en las penas. Para el que sembrare, cosechara, cultivare o colectare, (Art. 46) la pena es de uno a dos años de presidio; la fabricación (Art. 47) de cinco a quince; el tráfico (Art. 48) de diez a veinticinco; la administración (Art. 50) de diez a quince años; el suministro (Art. 51) de ocho a doce y con agravantes, de quince a veinte y si se llega a la muerte (Art. 52) de veinte a treinta años, además de los días multas, etc.

La pena máxima que prevé la Constitución Política del Estado, (Art. 17) es de 30 años de presidio para los delitos de **Asesinato, Parricidio y traición a la Patria**. Si bien el narcotráfico ha sido calificado delito de "lesa humanidad", ésta es una valoración política que en ningún momento puede estar por encima de los límites del marco penal y constitucional.

La excesiva penalización (es como si queriendo embriagarse más rápido, se aumente agua al Whisky) no sólo que desnaturaliza las finalidades de la sanción como es la prevención general, especial y la rehabilitación, sino que, dada la ausencia casi total de un sistema penitenciario mínimo, las cárceles bolivianas terminan convirtiéndose en escuelas de perfeccionamiento del delito.

En las cárceles se multiplican las penas, a modo de ejemplo: en las cárceles de Bolivia a los detenidos no sólo se lo priva de la libertad, sino también que existe una carencia notoria de educación, salud, recreación, terapia ocupacional, si bien se

pueden realizar los aspectos mencionados pero no se los cumple por que dichos centros penitenciarios son unos verdaderos antros donde no se conoce la dignidad de las personas (tanto así que un 80 %, no tienen sentencia condenatoria) y se vulneran los derechos humanos.

Además que no se esta de acuerdo con que las penas sean demasiado largas por que a mi juicio, constituyen una fuente de incrementación de la delincuencia. Las penas largas de privación de libertad son un factor de decepción para el delincuente primario que tiene plena conciencia de rehabilitarse.

Respecto a la culpabilidad se establece lo siguiente: "la culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena", (Art. 13 del Código Penal) Además que una conducta sólo puede prohibirse con una sanción cuando resulta del todo incompatible con los presupuestos de una vida en común pacífica, libre y materialmente asegurada.

La fragmentariedad significa que el sistema penal no ha de sancionar todas las conductas lesivas, sino sólo las modalidades de ataque más peligrosas, de modo que las de menor entidad quedan al margen de su tutela.

La ley 1008, por el contrario, es una norma irracional y perversa en su aplicación, con la agravante que sólo ataca y se hace sentir con las personas económicamente más débiles.

La subsidiariedad toma en cuenta que el derecho penal deja de ser necesario para proteger cuando esto puede lograrse por otros medios, que serán preferibles en cuanto sean menos lesivos para los derechos individuales.

El derecho penal debe intervenir como “ultima ratio” o instancia de control formal y no la primera como en los delitos antidrogas. La 1008 contrasta con los postulados del Derecho Penal Mínimo que buscan reducir la intervención punitiva, limitándola sólo para las graves infracciones contra los bienes jurídicos fundamentales.

Para enmendarla nada mejor que, tomar en cuenta, las recomendaciones del informe de Zaffaroni, citado por la Comisión Andina de Juristas⁵⁷:

- ✓ Propugnar el control constitucional de la legislación penal y plantear la inconstitucionalidad de los tipos en que no aparezca un bien jurídico tutelado, por vía doctrinal y jurisprudencial.
- ✓ Eliminar tales tipos por vía legislativa.
- ✓ Interpretar todo tipo penal partiendo del entendimiento de que el legislador tutela con ello un bien jurídico y, de este modo, limitar su

⁵⁷ ZAFFARONI, Eugenio, Tratado de Derecho Penal Parte General, Ed. Ediar. 2001

alcance prohibitivo a esta tutela, salvo el caso en que el bien jurídico directamente no exista.

- ✓ Rechazar doctrinario, jurisprudencias y legislativamente, la pretensión de que meras pautas morales o la sola autoridad del Estado puedan erigirse en bienes jurídicos que en lugar a la represión institucional.
- ✓ Rechazar toda posibilidad de presunción “juris et de jure” o de ficción jurídica de afectación de bienes jurídicos.
- ✓ Rechazar las tipificaciones en que la afectación al bien jurídico se plantea por vía de un peligro remoto o en que el juzgamiento del mismo dependa de una valoración sumamente subjetiva o arbitraria.
- ✓ Limitar y en cada caso analizar cuidadosamente las presunciones “juris tantum” de afectación de bienes jurídicos por peligro.

En conclusión podemos señalar categóricamente que La Ley 1008 no ha resuelto en lo más mínimo el fenómeno socioeconómico del narcotráfico.

3.4. ANÁLISIS DE RESOLUCIONES JUDICIALES PRONUNCIADAS EN PROCESOS POR DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY No. 1008 EN CHUQUISACA.

En relación al presente trabajo de investigación se realiza el presente análisis de las distintas resoluciones pronunciadas en procesos por delitos inmersos en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas con el fin de demostrar la desproporcionalidad técnico jurídica en relación a la penalidad de los tipos penales de la Ley 1008, además de hacer notar la carencia de taxatividad en muchos de ellos.

3.4.1. TRIBUNAL DE SENTENCIA No. 1 (ver Anexo 4)

Nos interesa relevar la Sentencia No. 03/2003 que declara al imputado autor del delito de Tráfico de Sustancias Controladas Art. 48 con relación al Art. 33 inc. m) y 49 de la Ley 1008 y lo condena a cumplir 10 años de presidio con el fundamento de que la cantidad poseída (26 grs. de cocaína y 4 grs. de marihuana) sobrepasa superabundantemente la cantidad mínima requerida para su consumo inmediato. “Lo máximo que podía consumir según los especialistas era 4 a 5 grs. de cocaína por día y fue sorprendido con 26 grs. de cocaína y 4 de marihuana”, dice textualmente la sentencia.

La Sentencia 02/2004 sin embargo, no obstante declarar como hecho probado la posesión de 76 grs. de marihuana distribuidos en bolsitas pequeñas, con el fundamento de que el imputado es consumidor de marihuana, que el Ministerio Público no tomó el carácter finalista de la conducta y que no probó que esta estaba dirigida a vender o comercializar sustancias controladas “tal cual lo establece el espíritu del Art. 48 de la Ley No. 1008” (textual) , ABSUELVE DE CULPA Y PENA al imputado.

Encontramos en estas dos resoluciones del mismo tribunal un cambio radical en la interpretación de lo que debe considerarse como tráfico. En el primer caso, no se considera la llamada Teoría finalista de la conducta o acción que sirve de base para la absolución, en el segundo, condenando simplemente porque el imputado estuvo en posesión dolosa de sustancias controladas en base de la presunción establecida en el segundo párrafo del Art. 49 de la Ley 1008.

Se advierte la interpretación no homogénea de los Arts. 48 y 49 2º párrafo, hecho que ha dado lugar a que en circunstancias similares se absuelva en dos casos y se condene en otro.

Llama la atención que no obstante haber declarado probado el hecho del consumo de sustancias controladas se declare la absolución del imputado cuando por el mismo hecho (Consumo y Tenencia para el consumo) previsto en el Párrafo primero del Art. 49 de la Ley 1008, los jueces de instrucción, en procedimiento

abreviado, pronuncian sentencias condenatorias declarando autoría en el delito y ordenando la internación en un Centro de Rehabilitación. **(Ver anexo 5 y 6)**

3.4.1.1. SENTENCIAS PRONUNCIADAS EN PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS.

La investigación determina que la mayor cantidad de causas se ha resuelto mediante este procedimiento. Vemos con mayor nitidez que la poca determinación, taxatividad y claridad de los tipos penales de la Ley No. 1008 dan lugar a su errónea e indebida aplicación en muchos casos y que en la práctica este procedimiento “especial”, está sirviendo a efectos de ocultar deficiencias de la investigación, utilización de prueba ilícita y como escape del Fiscal a fin de evitar el juicio oral. Analizamos a continuación las resoluciones.

3.4.2. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN No. 1 (ver Anexo 6)

En materia de Sustancias Controladas, siempre de enero 2003 a julio de 2004 este Juzgado ha pronunciado 16 Sentencias.

No. 11/03, declara autor del delito de Consumo y Tenencia para el Consumo al imputado JLBP ordenando su internación en centro de rehabilitación para drogodependientes en muestra clara que el Juez de instrucción observando que el

Consumo y la Tenencia para el consumo está inserto en el capítulo de los delitos y las penas ha considerado que para imponer una medida de seguridad debe pronunciar sentencia declarando autoría en el hecho. Hecho que no ha ocurrido en la Sentencia 1/04 del Tribunal No. 1

La Sentencia No. 15/2003 condena a DIEZ AÑOS de Presidio por el Delito de TRAFICO previsto en el Art. 48 en relación al inc. m) del Art. 33 de la Ley 1008 declarando como único hecho probado la posesión dolosa de 9 grs. de cocaína, 143 grs. de marihuana y 381 grs. de manitol (secuestrados de la habitación del imputado). El juzgador califica como Tráfico la simple posesión dolosa de sustancia controlada.

Con sentencia 4/2004 se condena al imputado a OCHO AÑOS DE PRESIDIO declarándole autor del delito de TRANSPORTE de sustancias controladas Art. 55 de la Ley 1008 reconociéndose como hecho probado el traslado de 12.300 grs. de cocaína en la ruta Cochabamba – Sucre.

Sentencia 05/04, condena a TRES años de reclusión por el delito de INSTIGACIÓN EN GRADO DE TENTATIVA Art. 56 con relación al Art. 8vo. del Código Penal. No obstante haber declarado como hecho probado el transporte de 133 grs. de semillas de marihuana, tomando como hecho definitivo la declaración del imputado que refiere que las mismas las debía entregar a J.C. (Jamás identificado ni procesado) para que sembrara. En este proceso está clara la errónea

aplicación de la ley sustantiva que ha dado lugar a que el delito de Transporte quede impune. En cuanto a la Instigación lo consideramos delito formal por lo que no debió tener cabida la tentativa.

Sentencia 06/04 Condena por INSTIGACIÓN imponiendo la pena de CUATRO años de presidio. Declara como hechos probados: el secuestro de la habitación del imputado de 197 grs. de marihuana y 8 gr. de cocaína y que el imputado, según su declaración a incitado a sus amigos al consumo de sustancias controladas y el mismo día de su declaración informativa el celular de su propiedad llamaba de manera incesante.

En este caso la posesión dolosa no fue trascendental para calificar la conducta en el tipo de tráfico que, podía configurarse, debido a que el imputado estuvo en posesión ilegal, almacenó en su habitación droga de manera fraccionada y el fin era, según su propia declaración, valorada por el juzgador, el suministro a sus amigos.

Sentencia 10/04, por TENTATIVA DE SUMINISTRO, condena al imputado a cinco años y cuatro meses de presidio. Declara como hechos probados el secuestro de 377 gr. de marihuana del interior de la mochila del imputado que viajaba en “Trans. Capital” procedente de la ciudad de Santa Cruz, según declaración del imputado la sustancia tenía como su destino final la ciudad de Potosí donde debía entregar a Víctor y Eddy, sujetos no investigados.

En esta calificación que efectúan tanto el Fiscal como el juzgador se deja en impunidad el delito de Transporte de Sustancias Controladas. Se aplica el Art. 51 sin que exista prueba alguna de la persona a quien se intentaba suministrar.

Las sentencias 06 - 05 y 10/05 muestran una interpretación realmente sorprendente de los tipos penales insertos en los Art. 56 y 51 ya que similares hechos y conductas, en el primer caso se califica como instigación y en el segundo como suministro ambos en grado de tentativa. Los operadores de justicia no consideran la aplicación del Art. 55 relativo al transporte aspecto que ha ocurrido en los casos que vienen a continuación.

Sentencia 11/04 impone a WOH la pena de OCHO años de presidio por el delito de TRANSPORTE de sustancias controladas. Declara como hechos probados que el imputado WOH transportaba en su mochila viajando junto a WIV, en la Empresa Cielito Lindo rumbo a la ciudad de Potosí, 100 cápsulas de cocaína con un peso de 1.144 grs. El imputado señala que el traslado lo efectuaba a cambio de quinientos dólares, para entregarlo en la ciudad de Potosí. En este caso, tanto el Fiscal como el Juzgador, preponderan el transporte, dejando de lado el confesado suministro en la ciudad de Potosí.

En cuanto al co-imputado WIV con sentencia 18/04.- Califican su conducta como INSTIGACIÓN EN GRADO DE TENTATIVA con el fundamento de que el mismo fue el que “intentó alentar a WOH la comisión del ilícito hasta llegar a su

destino habiendo cancelado por el pasaje de ambos”. Ante este fundamento, cabe dejar establecido que si el juzgador reconoce la comisión del delito de transporte, financiado por WIV la figura bien podría ser un Trafico en aplicación del Art. 48 y 33 inc. M) de la Ley No. 1008

Sentencia 13/04, condena a OCHO años de presidio por Transporte de Sustancias Controladas. Los hechos declarados como probados: el viaje del imputado en Flota Bolívar ruta Cochabamba – Sucre, portando un televisor conteniendo 470 cápsulas de cocaína con un peso total de 4.653 grs. Resolución con calificación diferente a la realizada en las sentencias 06 - 05 y 10/2005.

Sentencia 15/04 y 19/04 sancionan a VPO y LCL respectivamente, a 8 años de Presidio por TRANSPORTE de sustancias controladas. Los hechos probados: el secuestro de 1.499 gr. de cocaína que adherido al estómago, en paquetes envueltos en cinta masquín, transportaban VPO y LCL como pasajeros de la Flota Trans Copacabana procedente de Cochabamba con destino Sucre

Sentencia 21/04 condena a OCHO años de presidio por TRANSPORTE. Hecho probado: el imputado fue encontrado en Flota “Colonial Plus” rumbo a la ciudad de Potosí, transportando cinco cajas de cartón conteniendo 22.200 Grs. de marihuana. En la documental secuestrada se tiene sus pasajes en Trans Capital en la ruta Santa Cruz –Sucre dos días antes de su detención.

Sentencia 22/04 impone OCHO años de presidio por el delito de SUMINISTRO. Los hechos probados: A raíz de llamada anónima; en el domicilio de la imputada se secuestra en varios lugares, interior de un termo y entre pañales desechables varios sobrecitos de diferentes tamaños y colores conteniendo un total de 568 gr. de marihuana y 7.6 de cocaína.

Efectuada la requisa del inmueble de la madre de la imputada en la ciudad de Tarija se secuestran los mismos envoltorios (sobrecitos celestes) utilizados para fraccionar la sustancia controlada de donde se infiere que esta tiene vínculos en la ciudad de Tarija

No se justifica en este caso la calificación de la conducta en el Art. 51, debiendo considerarse que en la sentencia Nro. 15/03 el mismo juzgador, en base a la posesión dolosa calificó el hecho como Tráfico.

3.4.3. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN No. 2 (ver Anexo 7)

La Sentencia 02/2003, declara a JJCP autor del delito de CONSUMO Y TENENCIA PARA EL CONSUMO y ordena su internación en Instituto de Drogodependencia, en base del único hecho probado: la tenencia de 4 gr. de marihuana en su habitación. El imputado es consumidor habitual.

La Sentencia No. 03/03 declara a KLCI, autora del delito de Consumo y Tenencia para el Consumo ordenando como medida de seguridad su internación en Instituto de Drogodependientes. Los hechos probados la posesión de 4 gr. de marihuana descubiertos en el interior de su corpiño cuando ingresaba al Penal en visita a su concubino. La imputada es consumidora de 3 a 4 gr. de marihuana al día según informe pericial.

Sentencia No. 07/03 declara también autoría por el delito de Tenencia para el consumo.

Sentencia No. 09/03 Falla declarando al imputado autor del delito de SUMINISTRO y le condena a OCHO años de Presidio. Conforme a los hechos probados en el inmueble del imputado se secuestro en diferentes bolsas y bolsitas 171 grs. de marihuana, 9 gr, de cocaína y 9 gr. de marihuana negruzca (procesada). El imputado en su declaración indica que el fin de la sustancia era su venta, que en ese afán, invitó a varios changos, entre ellos a Chingolo y Gordo (expresión realizada de manera textual).

Entendemos que este caso puede adecuarse al Tráfico en cuanto a que el imputado ha ejecutado las acciones de poseer y suministrar, máxime si del análisis de algunas resoluciones pronunciadas en apelación y casación se ha establecido que la simple posesión dolosa configura el delito tráfico, interpretación que en otros distritos del país también se ha dado.

Sentencia. 13/03 condena a la pena de DIEZ años de presidio a la imputada MAPM declarándola autora del delito de TRAFICO de sustancias controladas. Los hechos probados son similares a los del caso 9, la sola posesión dolosa (en su inmueble) de 43 gr. de cocaína y 1563 gr. de marihuana distribuidos en bolsitas

CAPITULO IV

EL DELITO DE NARCOTRÁFICO EN EL DERECHO COMPARADO.

4.1. MODELO HOLANDES.

4.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES.

⁵⁸La problemática de las drogas es cada vez más extendida y apremiante, y ello explica que durante los últimos veinte años las políticas frente a las drogas han ocupado un lugar central en todo el mundo. En este marco, el carácter tolerante de la política holandesa de las drogas es una excepción, lo que la convierte en un ejemplo ilustrativo de política alternativa frente a los criterios dominantes en el mundo.

En el presente capítulo trataremos de exponer de manera esquemática lo que se ha dado en llamar el "modelo holandés" y presentar, de manera también esquemática, la tendencia de la posición latinoamericana con respecto a la política sobre drogas de los Países Bajos. Su desarrollo se propone responder, mediante una sucinta enumeración de consideraciones, tres cuestiones básicas, a saber: ¿Cómo se caracteriza el modelo holandés? ¿En qué es diferente? ¿Cuál es la postura latinoamericana con respecto a la política holandesa sobre drogas?

⁵⁹En el escenario mundial, la política holandesa sobre las drogas es una alternativa controvertida en relación con la política dominante, considerando como política dominante aquella que prescriben los Estados Unidos. Los Países Bajos son "un laboratorio sin rival en el mundo"

⁵⁸ OBSERVATOIRE GÉOPOLITIQUE DES DROGUES, *The World Geopolitics of Drugs* 1997/1998. Annual Report, OGD, París, 1998, en Internet (<http://www.ogd.org>)

⁵⁹ En la prensa: EL MERCURIO, 1997, b, p. c4

Fuera de los Países Bajos existen varios malentendidos sobre la política de las drogas en esta nación y sus efectos. Se dice erróneamente que en los Países Bajos las drogas están legalizadas; que el problema de la droga ha escalado progresivamente; que el país constituye un narco-estado", y que es la mayor vía de acceso de drogas a Europa. Como veremos más adelante, tales aseveraciones no tienen fundamento en la realidad.

4.1.2. BASE LEGAL.

La Ley del Opio de 1976 estableció la reglamentación con respecto a las drogas en los Países Bajos, y sus aspectos centrales son los siguientes:

- ✓ El grado de pena para diversos hechos punibles se determina por el carácter de la acción y por **la naturaleza de la sustancia**, ya que unas drogas (drogas duras) causan más daño que otras (drogas blandas) Mientras las drogas duras tienen un riesgo inaceptable, las drogas blandas causan menos problemas para la salud.
- ✓ No existe legalización de la droga. No se discute ni se considera esta posibilidad.

La política holandesa es pragmática, en el sentido de que opta por **regular una realidad inevitable** como es la problemática de las drogas. Esta no se

puede perfeccionar a través del principio de la prohibición y penalización máxima.

Los objetivos de la política holandesa sobre las drogas son, en resumen, los siguientes:

- 1) La prevención y disminución de la drogodependencia, alteración del orden y criminalidad.
- 2) La reducción de los daños que causa la droga.
- 3) El fomento de la salud y la seguridad de los ciudadanos individuales (los usuarios de drogas) y de la sociedad en su conjunto.
- 4) Evitar que los consumidores vayan a parar a los círculos de la ilegalidad.

4.1.3. CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES.

⁶⁰Se hace en los Países Bajos la siguiente diferenciación entre drogas duras y drogas blandas:

- Las drogas blandas están despenalizadas.
- Para delitos relacionados con las drogas duras rigen penas más pesadas que para delitos relacionados con drogas blandas. El uso de drogas en sí no es punible. Se define al consumidor de drogas duras como un enfermo y no como un criminal.

En la práctica, la localización y la persecución judicial del comercio al por menor de drogas blandas (que satisface determinados criterios rigurosos) tiene una prioridad baja, especialmente, la venta de drogas blandas es permitida en coffee shops y chocolaterías. Existen las siguientes restricciones para los coffee shops:

- No se permite vender cantidades mayores de 30 gramos a la vez y por persona;
- No se permite vender drogas duras;

⁶⁰ CEPAL. , La Ruta de las Drogas “Desintegración Social y Política en América Latina”, Editorial de las Naciones Unidas Santiago de Chile, 1997, 205 Págs. Donde en una de sus definiciones mas importantes realizan la diferenciación entre drogas duras y blandas.

- No se permite hacer propaganda para la venta de drogas;
- No se permite causar molestias al entorno;
- No se permite vender drogas a menores de 18 años.

Existe un tratamiento menos riguroso aplicable a la tenencia de pequeñas cantidades de drogas para consumo propio.

Con respecto a la lucha policial y judicial contra el cultivo y tráfico internacional de drogas, la política holandesa no es muy diferente de las políticas de otros países, lo que incluye represión y prohibición. Existe bastante cooperación internacional en este terreno.

Sobre la importancia de la prestación de ayuda y la prevención el Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores (1995) ha dicho:

"La política de prestación de ayuda va orientada a entrar en contacto con la mayor cantidad de drogadictos y a ayudarlos a poner fin a su adicción o a **manejar su dependencia de la mejor forma posible** y a recuperar su lugar en la sociedad".

"La prestación de ayuda no se limita a combatir la toxicomanía y a modificar radicalmente sus modelos de conducta, sino que apunta también hacia los afectados que no tienen (aún) el propósito de abstenerse, o no están en condiciones de privarse del consumo de drogas. Debe contemplarse en primer lugar el mejoramiento del bienestar físico de estos drogadictos y de su funcionamiento dentro en la sociedad. Por el momento se acepta que no están en condiciones de abstenerse".

El enfoque latinoamericano está -inevitadamente- sometido a la influencia de los Estados Unidos. El fracaso de la política antidrogas estadounidense es reconocido por un gran número de personas en todo el mundo. Sin embargo, la política latinoamericana no puede y tampoco quiere considerar la otra alternativa. Entre tanto, la importancia de poner más atención en la despenalización es cada vez más reconocida.

Son grandes las diferencias en estructura y desarrollo socioeconómico (infraestructura, producto nacional bruto per cápita, equidad social, nivel de educación, y otros factores). Los países latinoamericanos no tienen una infraestructura tan desarrollada, un producto "per cápita" tan alto, ni una equidad social tan significativa como los Países Bajos. Se argumenta que esto también hace inviable a corto plazo una ⁶¹despenalización de las drogas blandas.

⁶¹ Página Web de la Cámara de Diputados.

4.2. NORMATIVA PENAL DE LA REPUBLICA DE CHILE.

⁶² Disposición que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas

En su Título I lo encontramos con el “nomem juris” de los delitos sanciones, competencia y procedimiento, en lo relativa al narcotráfico lo encontramos en su Artículo primero que establece:

“Los que, sin contar con la competente autorización, elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud pública, serán penados con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

Si se tratare de otras drogas o sustancias de esta índole que no produzcan los efectos indicados en el inciso anterior, el tribunal podrá rebajar la pena hasta en dos grados.

⁶² Normativa Penal de la República de Chile. y en Internet ([www. normativa penal Chilena.com](http://www.normativa penal Chilena.com))

Se presumirán autores del delito sancionado en este Artículo quienes tengan en su poder elementos, instrumentos, materiales o equipos comúnmente destinados a la elaboración, fabricación, preparación, transformación o extracción de las sustancias o drogas a que se refieren los incisos anteriores.

Respecto a la siembra o plantación de sustancias controladas el Artículo 2. Establece: Los que, sin contar con la competente autorización, siembren, planten, cultiven o cosechen especies vegetales del género Cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, incurrirán en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a menos que justifiquen que están destinadas al uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, en cuyo caso, serán sancionados según los Artículos 41 y siguientes.

Según la gravedad de los hechos y las circunstancias personales del inculpado, la pena podrá rebajarse en un grado. La autorización a que se refiere este Artículo será otorgada por el Servicio Agrícola y Ganadero.

No podrá otorgarse dicha autorización a las personas que se encuentren procesadas o hayan sido condenadas por alguno de los delitos sancionados en esta ley y, tratándose de sociedades, cuando cualquiera de sus socios o administradores se encuentre en alguna de estas situaciones.

Artículo 3; Los que, contando con la autorización a que se refiere el Artículo

anterior, desvíen o destinen al tráfico ilícito algunas de las especies vegetales allí señaladas o sus rastrojos, florescencias, semillas u otras partes activas, serán sancionados con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

4.2.1. RESPECTO A LA SIEMBRA SEÑALA:

Artículo 4; El que, estando autorizado para efectuar las siembras, plantaciones, cultivos o cosechas a que se refiere el Artículo 2°, abandonare, por negligencia o descuido, en lugares de fácil acceso al público, plantas, sus rastrojos, florescencias, semillas u otras partes activas, o que no cumpliera con las obligaciones establecidas en el reglamento sobre cierre y destrucción de tales especies, será sancionado con la pena de multa de veinte a doscientas unidades tributarias mensuales.

Artículo 5; Las penas establecidas en el Artículo 1° se aplicarán también a los que trafiquen, a cualquier título, con las sustancias a que se refiere dicho Artículo o con las materias primas que sirvan para obtenerlas y a los que, por cualquier medio, induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de tales sustancias. Se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten consigo tales sustancias o materias primas, a menos que justifiquen que están

destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso personal exclusivo y próximo en el tiempo. En este último caso, se aplicarán las normas de los Artículos 41 y siguientes.

Artículo 6; La producción, fabricación, elaboración, distribución, transporte, comercialización, importación, exportación, posesión o tenencia de precursores o de sustancias químicas esenciales, a sabiendas de que su finalidad es la preparación de drogas estupefacientes o psicotrópicas para la perpetración, dentro o fuera del país, de algunos de los hechos considerados como delitos en esta ley, será castigada con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

4.3. NORMATIVA PENAL EN LA REPUBLICA DE LA ARGENTINA.

⁶³La Ley de tenencia y tráfico de estupefacientes (LEY 23.737)

⁶³ Ley de tenencia y tráfico de estupefacientes (LEY 23.737)

Promulgada en 10/X/1989, respecto a la venta de sustancias medicamentosas en Su Artículo 1º. Señala reemplazase el artículo 204 del Código Penal por el siguiente texto:

Artículo. 204; Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que estando autorizado para la venta de sustancias medicinales, las suministrare en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica o diversa de la declarada o convenida, o sin la presentación y archivo de la receta de aquellos productos que según las reglamentaciones vigentes no pueden ser comercializados sin ese requisito.

Artículo 2º; Incorporase como artículo 204 bis del Código Penal el siguiente texto:

Art. 204 bis; Cuando el delito previsto en el artículo anterior se cometiere por negligencia, la pena será de multa de trescientos australes a seis mil australes.

Artículo 3º; Incorporase como artículo 204 tercero del Código Penal el siguiente texto:

Artículo. 204 ter; Será reprimido con multa de seiscientos australes a doce mil australes el que teniendo a su cargo la dirección, administración, control o vigilancia de un establecimiento destinado al expendio de medicamentos, omitiere cumplir con

los deberes a su cargo posibilitando la comisión de alguno de los hechos previstos en el artículo 204.

Artículo 4º; Incorporase como artículo 204 quater del Código Penal el siguiente texto:

Artículo.204 quater; Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que sin autorización vendiere sustancias medicinales que requieran receta médica para su comercialización.

Artículo 5º; Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa de dos millones doscientos cincuenta mil a ciento ochenta y siete millones quinientos mil australes el que sin autorización o con destino ilegítimo:

- a) *Siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación;*
- b) *Produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes;*
- c) *Comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte;*

- d) *Comercie con plantas o sus semillas, utilizables para producir estupefacientes, o las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte;*
- e) *Entregue, suministre, aplique o facilite a otros estupefacientes a título oneroso. Si lo fuese a título gratuito, se aplicará reclusión o prisión de tres a doce años y multa de tres mil a ciento veinte mil australes.*

Si los hechos previstos en los incisos precedentes fueren ejecutados por quien desarrolla una actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público, se aplicará, además, inhabilitación especial de cinco a quince años.

En el caso del inciso a), cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal, la pena será de un mes a dos años de prisión y serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.

Modificado por: Ley 24424 Art.1 (B.O. 09-01-95) Último párrafo incorporado

Artículo 6º; Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa de dos millones doscientos cincuenta mil a ciento ochenta y siete millones quinientos mil australes el que introdujera al país estupefacientes fabricados o en cualquier etapa de su fabricación o materias primas destinadas a su fabricación o

producción, habiendo efectuado una presentación correcta ante la Aduana y posteriormente alterara ilegítimamente su destino de uso.

En estos supuestos la pena será de tres a doce años de reclusión o prisión, cuando surgiere inequívocamente, por su cantidad, que los mismos no serán destinados a comercialización dentro o fuera del territorio nacional.

Es interesante la normativa que establece la no punibilidad de la masticación de hoja de coca en estos términos:

Artículo 15; La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no serán considerados como tenencia o consumo de estupefacientes.

4.4. NORMATIVA PENAL EN LA REPUBLICA DE VENEZUELA.

⁶⁴ En su TÍTULO III, de Los Delitos CAPÍTULO I, De los Delitos Comunes y Militares y de las Penas

⁶⁴ GACETA OFICIAL N° 4636 del 30 de septiembre de 1993, con el nombre de LEY ORGÁNICA SOBRE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS.

Artículo 34; El que ilícitamente trafique, distribuya, oculte, fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, produzca, transporte, almacene, realice actividades de corretaje, dirija o financie las operaciones antes mencionadas y *de tráfico* de las sustancias o de sus materias primas, precursores, solventes y productos químicos esenciales, desviados para la producción de estupefacientes y psicotrópicos a que se refiere esta Ley, será sancionado con prisión de diez (10) a veinte (20) años.

Artículo 35; El que ilícitamente siembre, cultive, coseche, preserve, elabore, almacene, realice actividades de corretaje, dirija o financie las operaciones antes mencionadas o trafique, transporte, y distribuya semillas, resinas, plantas que contengan o reproduzcan cualesquiera de las sustancias a que se refiere esta Ley, será sancionado con prisión de diez (10) a veinte (20) años.

Artículo 36; El que ilícitamente posea las sustancias, materias primas, semillas, resinas, plantas a que se refiere esta Ley, con fines distintos a los previstos en los artículos 3, 34, 35 y al del consumo personal establecido en el artículo 75, será sancionado con prisión de cuatro (4) a seis (6) años. A los efectos de la posesión se tomarán en cuenta las siguientes cantidades: hasta dos (2) gramos, para los casos de posesión de cocaína o sus derivados, compuestos o mezclas con uno o varios ingredientes; y hasta veinte (20) gramos, para los casos de cannabis sativa. En la posesión de otras sustancias estupefacientes o psicotrópicas, El Juez considerará cantidades semejantes de acuerdo a la naturaleza y presentación habitual de las

sustancias. En ninguno de los casos se considerará el grado de pureza de las mismas.

Los jueces apreciarán las circunstancias del culpable del hecho y la cantidad de sustancias decomisadas para imponer la pena en el límite inferior o superior, conforme a las reglas previstas en el artículo 37 del Código Penal.

Podrán concederse los beneficios de sometimiento a juicio o suspensión condicional de la pena, a la persona que se encuentre incurso en el delito tipificado en esta norma, siempre que no concurra otro delito, que no sea reincidente, ni extranjero con condición de turista.

4.5. NORMATIVA PENAL EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA DECRETO NÚMERO 48-92

LEY CONTRA LA NARCOACTIVIDAD

ARTICULO .1

Interés público. En protección de la salud, se declara de interés público la adopción por parte del Estado de las medidas necesarias para prevenir, controlar, investigar, evitar y sancionar toda actividad relacionada con la producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y comercialización de los estupefacientes, psicotrópicos y las demás drogas o fármacos susceptibles de producir alteraciones o

transformaciones del sistema nervioso central y cuyo uso es capaz de provocar dependencia física o psíquica, incluidos en los convenios y tratados internacionales al respecto, ratificados por Guatemala y en cualquier otro instrumento jurídico internacional que sobre esta materia se apruebe.

ARTICULO 2.

Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:

1. **Drogas:** Toda sustancia o agente farmacológico que, introducido en el organismo de una persona viva, modifica sus funciones fisiológicas y transforma los estados de conciencia.

También se consideran drogas las semillas, florescencias, plantas o parte de ellas y cualquier otra sustancia de donde puedan ser extraídas aquellas.

A las bebidas alcohólicas y el tabaco, no les son aplicables las disposiciones de esta ley.

2. **Estupefacientes y sustancias psicotrópicas :** Cualquier droga, natural o sintética, así considerada en tratados o convenios internacionales de observancia obligatoria en la república de Guatemala, el Código de Salud y demás disposiciones que se emitan para determinar las drogas de uso prohibido a que se refiere la presente ley.

3. **Adicción:** Dependencia física o psíquica, entendida la primera como sujeción que obliga a la persona a consumir drogas, y que al suspender su administración, provoca perturbaciones físicas y/o corporales, y la segunda,

como el impulso que exige la administración periódica y continua de drogas para suprimir un malestar psíquico.

4. **Tráfico Ilícito** : Cualquier acto de producción, fabricación, extracción, preparación, oferta, distribución, depósito, almacenamiento, transporte, venta, suministro, tránsito, posesión, adquisición o tenencia de cualquier droga estupefaciente o sustancia psicotrópica, sin autorización legal.
5. **Consumo**: Uso ocasional, periódico, habitual o permanente de la sustancia a que se refiere la presente ley.
6. **Tránsito internacional**: Cuando el sujeto activo del delito por cualquier medio importe, exporte, facilite o traslade estupefacientes o sustancias psicotrópicas de un país a otro.
7. **Precursores**: Es la materia prima o cualquier otra sustancia no elaborada, semielaborada o elaborada, que sirve para la preparación de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
8. **Bienes**: Los activos de cualquier tipo, corporales o incorporeales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.
9. **Instrumentos y objetos del delito**: Los instrumentos son las herramientas utilizadas para la comisión de los delitos que establece la presente ley. Los objetos del delito son las drogas, estupefacientes, psicotrópicos, y precursores que provengan de los delitos a que se refiere esta ley.

10. **Comisión:** Comisión Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas.

ARTICULO 3.

Uso legal . Solamente podrá autorizarse la importación, producción, fabricación, extracción, posesión y uso de las drogas, en las cantidades estrictamente necesarias, exclusivamente por personas legalmente facultadas y bajo su estricta responsabilidad, para el tratamiento médico, los análisis toxicológicos y farmacológicos, la investigación científica y la elaboración de medicamentos.

En los centros de comercialización para particulares, su venta requerirá receta médica.

ARTICULO 4.

Autorización y control . Los establecimientos que se dediquen legalmente al comercio, expendio, industrialización, fabricación, análisis, refinación, transformación, extracción, dilución, envasado, preparación, producción, importación, exportación, suministro o almacenamiento de disolventes o sustancias que puedan ser utilizadas como precursoras en el procesamiento de estupefacientes y psicotrópicos, susceptibles de causar dependencia, deberán contar con autorización del Ministerio de Salud Pública y someterse a los controles y fiscalización que éste realice.

procurar los recursos económicos necesarios a fin de asegurar el tratamiento de rehabilitación de los adictos y promover su readaptación social.

1.1.1.1 ARTICULO 6.

Cooperación nacional. Las personas jurídicas colectivas de carácter social, informativo, cultural, recreativo, deportivo, religioso y de cualquier otra naturaleza, colaborarán con los programas contra el uso de drogas. Toda persona colaborará con la prevención de los delitos a que se refiere esta ley y el consumo ilícito de drogas.

1.1.1.2 ARTICULO 7.

Cooperación Internacional. Es deber del Estado, por medio de sus órganos competentes, propiciar la cooperación internacional, técnica y económica, para fortalecer, así como coordinar estrategias entre estados y programas de investigación, prevención, sanción y rehabilitación en materia de drogas, estupefacientes y psicotrópicas, así como concertar tratados, convenios y acuerdos para mejorar la eficacia de esta cooperación y coordinación.

ARTICULO 8.

Exoneración. Para mejorar la vigilancia del espacio aéreo y marítimo y aumentar la capacidad de control del tráfico internacional de drogas ilegales, se exonera al estado de Guatemala de toda clase de impuestos para la importación del equipo de radar y de otros instrumentos que se utilicen para el control de la narcoactividad.

CAPITULO II DE LA PARTICIPACION EN EL DELITO

ARTICULO 9.

Autoría -personas físicas- . Serán considerados como autores de los delitos a que se refieren esta ley las personas físicas que tomaren parte en la ejecución del hecho; prestaren auxilio o una ayuda anterior o posterior, con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer; emitieren promesas anteriores a la perpetración o instigaren su realización o determinación.

También se considerará autor a quien valiéndose de su superioridad jerárquica, determine a uno de sus subordinados mediante órdenes genéricas de contenido prohibido por esta ley.

ARTICULO 10.

Autoría -personas jurídicas-. Serán imputables a las personas jurídicas, independientemente de la responsabilidad penal de sus representantes, los delitos previstos en esta ley, cuando se tratare de actos realizados por sus órganos regulares, siempre que se hallaren dentro del giro u objeto normal o aparente de sus negocios.

ARTICULO 11.

Complicidad. Serán considerados cómplices, quienes voluntariamente auxiliaren de cualquier modo a la realización del hecho o quienes prestaren una ayuda posterior al mismo, en virtud de promesas anteriores a su perpetración, sin que esos auxilios tuviesen las características previstas para los autores.

CAPITULO III DE LAS PENAS

ARTICULO 12.

De las penas . Para los delitos señalados en esta ley, son penas principales para las personas físicas:

1. De muerte.
2. De prisión.
3. Multa.
4. Inhabilitación absoluta o especial.
5. El comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes del delito y de los instrumentos utilizados para la comisión, a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho, o que haya mediado buena fe.
6. Expulsión del territorio nacional de extranjeros.
7. Pago de costas y gastos procesales.
8. Publicación de la sentencia condenatoria.

ARTICULO 13.

Penas . Las penas previstas en esta ley para las personas jurídicas, son las siguientes:

1. Multa.
2. Cancelación de la personalidad jurídica.

3. Suspensión total o parcial de actividades.
4. El comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes del delito de los instrumentos utilizados para su comisión.
5. Pago de costas y gastos procesales.
6. Publicación de la sentencia.

ARTICULO 14.

Conversión de la multa . Los penados con la multa que no la hicieran efectiva en el término legal, o que no cumplieren con efectuar las amortizaciones para su debido pago, cumplirán su condena con privación de libertad, regulándose el tiempo, entre Q 5.00 y Q 100.00 por día, según la naturaleza del hecho, y el monto de la droga incautada. Cuando se hubiere impuesto también pena de prisión, la conversión comenzará al cumplirse aquella, nadie podrá, sin embargo, cumplir más de treinta años de prisión.

El condenado podrá, en cualquier tiempo, pagar la multa, deducida la parte correspondiente de la prisión sufrida. Si al concluir la pena de prisión el condenado hubiera observado buena conducta, el juez competente podrá otorgar la suspensión condicional de la pena de multa. La solicitud se tramitará en la vía de los incidentes.

ARTICULO 15.

Conmutación de penas privativas de libertad . Las penas fijadas en los Artículos 36, 39, 43, 44, 49, 50 y 51 de esta ley, podrán conmutarse cuando la prisión no exceda de cinco años. La conmuta se regulará entre un mínimo de Q 5.00 diarios y un

máximo de Q 100.00 por cada día, atendiendo a las circunstancias del hecho, las condiciones económicas del penado y el monto de los objetos del delito decomisado.

ARTICULO 16.

Suspensión condicional de la pena . En los casos de condena a una persona de prisión que no exceda de tres años, se podrá otorgar la suspensión condicional del cumplimiento de las penas impuestas, sin perjuicio del cumplimiento de las medidas de seguridad y de las responsabilidades civiles impuestas. Se aplicará este beneficio, cuando por las características especiales del hecho o de la personalidad del condenado, fuere inconveniente o inútil la ejecución de la pena. Esta disposición no se aplicará si la sentencia ya ha sido reducida de acuerdo al artículo 22 de esta Ley.

Al conceder el beneficio, el juez podrá imponer al condenado alguna o varias de las reglas de la conducta siguiente:

1. Residir o no residir en lugar determinado y someterse a la vigilancia del tribunal.
2. La prohibición de frecuentar determinados lugares o personas.
3. Abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas.
4. Comenzar y finalizar la escolaridad primaria, si no la tuviere cumplida aprender una profesión y oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o institución que determine el tribunal.
5. Someterse a un tratamiento médico o psicológico, si fuera necesario.

El juez fijará en la condena las modalidades concretas de la ejecución y el tiempo de vigencia de las reglas impuestas, las que no podrán ser superiores a cinco años. El plazo de prueba de la suspensión condicional no podrá ser inferior a dos años, ni superior a cuatro.

ARTICULO 17.

Revocación. Si el condenado se apartase en forma injustificada de las reglas de conducta impuestas o cometiere delito doloso, dentro del plazo de prueba, se revocará la suspensión y cumplirá el resto de la pena.

ARTICULO 18.

Comiso. Caerán en comiso las armas, objetos, dinero, vehículos, inmuebles o valores empleados en la ejecución de los delitos establecidos en esta ley, así como los que sean derivados de los mismos o se adquieran con valores obtenidos en la comisión de tales delitos.

Cuando los objetos o vehículos empleados en la ejecución de los delitos establecidos en esta ley no fueran propiedad de los implicados, serán devueltos a su legítimo propietario cuando no le resultare responsabilidad. El comiso será decretado co sentencia condenatoria o absolutoria, cuando los objetos referidos fueren de uso prohibido o no sean de lícito comercio.

Los objetos decomisados de lícito comercio, se venderán y el producto de la venta incrementará los fondos privativos del Organismo Judicial, pero serán destinados especialmente a la lucha y prevención de los delitos a que se refiere esta ley.

ARTICULOS 19.

Destrucción judicial de drogas. Cuando las drogas o sustancias decomisadas ya no interesen a los fines del proceso, el juez de instrucción ordenará su destrucción.

Para los efectos de la destrucción, el juez mediante su comparecencia comprobará otra vez, en el acto de la destrucción, las características del comiso y el medio apropiado para su destrucción. En este acto, podrán estar presentes las partes y obligatoriamente un representante del Ministerio Público, una persona delegada por la comisión, para lo cual serán debidamente citados, en cuya presencia se procederán en el lugar, día y hora previamente señalados.

El juez de instrucción, conservará una muestra de la droga que se haya destruido para la comprobación procesal de la existencia del delito, la cual mantendrá en custodia bajo su responsabilidad y máxima seguridad y remitirá al tribunal de sentencia, que ordenará la destrucción de la droga al quedar ejecutoriada la sentencia definitiva, bajo la máxima responsabilidad.

}CAPITULO IV CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE LA APLICACION DE PENAS

ARTICULO 20.

Cómplices . A los cómplices se les aplicará la pena señalada a los autores, disminuida en una tercera parte o no, a criterio del juzgador. Esta disposición también comprende al autor de tentativa.

ARTICULO 21.

Agravantes especiales . Son agravantes especiales, en relación con los delitos comprendidos en esta ley, las siguientes:

1. Que el hecho afecte o pudiere afectar a menores de edad, mujeres embarazadas, enfermos mentales, o a personas que padecen de disminución física.
2. Que el autor haya facilitado el uso o el consumo de drogas en establecimientos de enseñanza, centros de protección y de recreación de menores, unidades militares o centros de reclusión o penitenciarios o que el autor sea propietario o encargado de entidades sociales, culturales, recreativas, deportivas o de cualquier otra naturaleza.
3. Que el autor sea encargado de la prevención o persecución de los delitos establecidos en esta ley.
4. Que el autor sea funcionario o empleado público, utilice armas o ejerza profesión de las que se relacionan de un modo inmediato con la salud del pueblo.

En los casos anteriores, la pena podrá aumentarse hasta en el doble del máximo de la señalada al delito cometido.

ARTICULO 22.

Atenuantes especiales . Podrá rebajarse la pena hasta un cuarto del mínimo señalado en esta ley, en los casos siguientes:

1. Cuando los autores, cómplices o encubridores de los delitos contemplados en esta ley, de manera espontánea ante juez competente, proporcionaran, más allá de su participación, información que contribuya al establecimiento de los delitos tipificados en esta ley o a la captura de sus autores, o cuando el autor pusiera en conocimiento de la autoridad lo que supiera sobre los planes de comisión de los delitos ya mencionados, haciéndolo con tiempo suficiente para impedir su ejecución.
2. Cuando durante las diligencias o dentro del proceso, hasta antes de la sentencia, el procesado diere información relevante que haga posible la incautación o decomiso de drogas o de bienes de delitos relacionados con los delitos tipificados en esta ley.

La aplicación del beneficio contemplado en este artículo, no podrá exceder de la cuarta parte del mínimo de la condena impuesta.

CAPITULO V MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTICULO 23.

Presupuestos . Se impondrán medidas de seguridad y corrección:

1. Cuando concurren condiciones que imposibilitan la aplicación de una pena por causa de inimputabilidad.
2. Cuando la reiteración de los delitos a que se refiere esta ley hiciere, presumiere, fundamente la continuación de prácticas delictivas, o la

realización de actividades delictivas que ponen en peligro a la sociedad y a los bienes jurídicamente tutelados por la presente ley.

ARTICULO 24.

Duración . Las medidas de seguridad y corrección cesarán cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su imposición, pero deberán revisarse cada año.

ARTICULO 25.

Clases. Los tribunales competentes al conocer de los delitos a que se refiere esta ley, podrán imponer las siguientes medidas de seguridad:

1. **Internamiento especial.** Que consistirá en el internamiento del inimputable en un lugar adecuado para cuidar de su persona y procurar su curación. Cuando el juez lo considera aconsejable, podrá establecer el tratamiento ambulatorio, fijándose las obligaciones terapéuticas del sometido a la medida, bajo control del tribunal.
2. **Régimen de Trabajo.** Podrá ordenarse que los delincuentes reincidentes y habituales, así como las personas peligrosas, sean sometidas a un régimen especial de trabajo en una de las granjas agrícolas penitenciarias del país.
3. **Prohibiciones especiales.** Podrán ordenarse la prohibición de residir en determinado lugar o de concurrir lugares específicos.

CAPITULO VI

delitos a que se refiere esta ley, nace la obligación de reparar el grave daño material y moral ocasionado a la sociedad. La obligación es solidaria entre todos los responsables del delito, sean personas físicas o jurídicas, y se resolverá en indemnización pecuniaria fijada por el juez en la sentencia y se ejecutará por el tribunal que la haya dictado en primera o única instancia por la vía de apremio. Si el delito fuera cometido por una persona jurídica, responderán solidariamente las personas físicas que hubieran actuado como órganos de decisión de la misma, salvo aquellas que carecieran de culpabilidad. Asimismo, la persona jurídica responderá solidariamente por los delitos cometidos por sus representantes siempre que ella hubiere recibido algún tipo de beneficio proveniente, directa o indirectamente.

ARTICULO 27.

Terceros responsables . Quien hubiere obtenido beneficios económicos de los efectos de un delito, aún sin haber sido partícipe en su ejecución, responderá civilmente hasta el monto en que hubiere lucrado. Se exceptúa la notoria buena fe en todos los intervinientes del acto.

ARTICULO 28.

Preferencia. i. reparación del daño causado a la sociedad por el delito, tendrá preferencia sobre cualquier otra deuda y sobre la ejecución de las penas y también sobre el pago de la multa.

ARTICULO 29.

Cálculo . Para calcular el daño material y moral causado a la sociedad, se considerará:

1. El valor de las drogas incautadas.
 2. El valor de los bienes relacionados con el delito, así como de los objetos e instrumentos utilizados en la acción ilícita.
 3. La envergadura de la asociación nacional o internacional a que pertenece el delincuente.
-
1. La capacidad de producción, fabricación, cultivo y tráfico de drogas.
 2. La gravedad del delito cometido.
 3. Las lesiones económicas provocadas a la sociedad por la inversión de recursos en la lucha y contra el narcotráfico.

ARTICULO 30.

Sucesión . La responsabilidad civil, derivada de los delitos señalados en esta ley, se transmite a todos los herederos del responsable, hasta el monto de la herencia recibida.

ARTICULO 31.

Oportunidad. El Ministerio Público, en representación de la sociedad, deberá ejercer la acción civil conjuntamente con la acción penal y ambas se deducirán conforme las normas del proceso penal.

ARTICULO 32.

Subsidiaridad. La acción civil es subsidiaria de la acción penal y el juez las resolverá en la misma sentencia, inmediatamente después del pronunciamiento de la materia penal. Si la acción penal se extingue o deja de ejercerse por muerte o causa de inimputabilidad antes del pronunciamiento definitivo de la sentencia, el Ministerio Público deberá ejercerla o continuarla en los tribunales competentes.

ARTICULO 33.

Destino. Las responsabilidades civiles fijadas por el juez a favor del Estado, incrementarán los fondos privativos del Organismo Judicial, con destino específico a las actividades de investigación de los delitos a que se refiere esta ley, así como a la persecución, sanción y readaptación social de quienes cometan dichos delitos.

Si llegado el caso de resolver, no se hubiere establecido, total o parcialmente, el monto de las responsabilidades civiles, serán fijadas por el tribunal competente en la sentencia condenatoria, con base en los elementos señalados en este capítulo para su cálculo.

sentencia condenatoria, con base en los elementos señalados en este capítulo para su cálculo.

ARTICULO 34.

Particulares perjudicados . Las personas particulares perjudicadas por alguno de los delitos a que se refiere esta ley, podrán reclamar al procesado el pago de las responsabilidades civiles, la que se traducirá en indemnización pecunia por los daños

materiales o morales privados y en la reparación o restitución total o parcial de los objetos o instrumentos del delito, cuya propiedad comprueben, siempre que sean de lícito comercio.

CAPITULO VII DE LOS DELITOS Y SUS PENAS

ARTICULO 35.

Tránsito internacional. Quien sin estar autorizado, participe en cualquier forma en el tránsito internacional de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como de precursores y sustancias esenciales destinadas a la fabricación o disolución de las referidas drogas, será sancionado con prisión de doce a veinte años y multa de cincuenta mil quetzales a un millón de quetzales.

ARTICULO 36.

Siembra y cultivo. El que sin estar autorizado legalmente siembre, cultive o coseche semillas, florescencias, plantas o parte de las mismas, de las cuales naturalmente o por cualquier medio, se pueda obtener drogas que produzcan dependencia física o psíquica, serán sancionados con prisión de cinco a veinte años de prisión y multa de Q 10 000.00 a Q 100 000.00.

ARTICULO 37.

Fabricación o transformación. El que, sin autorización legal, elaborare, fabricare, transformare, extrajere u obtuviere drogas, será sancionado con prisión de ocho a veinte años, y multa de Q 50 000.00 a Q 1 000 000.00.

ARTICULO 38.

Comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. El que sin autorización legal adquiera, enajene a cualquier título, importe, exporte, almacene, transporte, distribuya, suministrarle, venda, expendo o realice cualquier otra actividad de tráfico de semillas, hojas, plantas, florescencias o sustancias o productos clasificados como drogas, estupefacientes, psicotrópicos o precursores, será sancionado con prisión de doce a veinte años y multa de Q 50 000.00 a Q 1 000 000.00, igual pena se aplicará a quien proporcione los medios, facilite o permita el aterrizaje de naves aéreas utilizadas para el tráfico ilícito.

ARTICULO 39.

Posesión para el consumo . Quien para su propio consumo adquiera o posea cualquiera de las drogas a que se refiere esta ley, será sancionado con prisión de cuatro meses a dos años y multa de Q 200.00 a Q 10 000.00. Se entiende que es para su propio consumo, cuando la droga incautada no exceda de la cantidad razonable para el consumo inmediato, siempre que de las demás circunstancias del hecho, surja la convicción de que la droga es para uso personal.

ARTICULO 40.

Promoción y fomento. El que en alguna forma promueva el cultivo, el tráfico ilícito, de semillas, hojas florescencias, plantas o drogas, o la fabricación, extracción, procesamiento o elaboración de éstas, o fomente su uso indebido, será sancionado con prisión de seis a diez años y multa de Q 10 000.00 a Q 100 000.00.

ARTICULO 41.

Facilitación de medios. El que poseyere, fabricare, transportare o distribuyere equipo, materiales o sustancias, a sabiendas de que van a ser utilizadas en cualquiera de las actividades a que se refieren los artículos anteriores, será sancionado con prisión de cinco a diez años y multa de Q 10 000.00 a Q 100 000.00.

Igual se impondrá, al que por cualquier título facilite, proporcione, use o destine un inmueble local o establecimiento para la fabricación, elaboración, extracción, almacenamiento, cultivo, venta, suministro o consumo de drogas. Si se trata de un establecimiento comercial, será clausurado.

ARTICULO 42.

Alteración . El que alterare o falsificare, total o parcialmente, recetas médicas y que de esta forma obtenga para sí o para otro, drogas o medicamentos que las contenga, será sancionado con pena de cuatro meses a dos años y

multa de Q 200.00 a Q 10 000.00. Igual pena se aplicará a quien sin fines terapéuticos o prescripción médica a otra persona, con el consentimiento de ésta, aplique cualquier tipo de drogas. Si a quien se administrare no prestare su consentimiento o fuere menor de dieciocho años, la pena será de tres a seis años de prisión y multa de Q 5 000.00 a Q 100 000.00.

ARTICULO 43.

Expendio ilícito. El que estando autorizado para el expendio de sustancias medicinales que contengan drogas, las expidiere en especie, calidad o cantidad

distinta a la especificada en la receta médica o sin receta médica, será sancionado con prisión de tres a cinco años de prisión y multa de Q 2000.00 a Q 10 000.00.

ARTICULO 44.

Receta o suministro . El facultativo que recete o suministre drogas que necesiten receta para ser adquiridas cuando no son indicadas por la terapéutica con infracción de las leyes o reglamentos sobre la materia, será sancionado con prisión de tres a cinco años de prisión, multa de Q 200.00 a Q 10 000.00 e inhabilitación para ejercer su profesión, pena accesoria ésta última que no podrá exceder el tiempo que dure la pena privativa de libertad.

ARTICULO 45.

Transacciones e inversiones ilícitas. El que por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, realizare con otras personas o establecimientos comerciales, bancarios, financieros, o de cualquier otra naturaleza, transacciones mercantiles con dinero o productos provenientes de las actividades ilícitas previstas en esta ley, independientemente del lugar del territorio nacional o extranjero donde se haya cometido el delito o donde hayan producido dichos recursos financieros, será sancionado con prisión de seis a veinte años y multa de Q 50 000.00 a Q 5 000 000.00. Con la misma pena será sancionado:

1. La interpósita persona, el propietario, el administrador o representante legal o encargado del establecimiento que autorizare, permitiere o realizare dichas transacciones, conociendo la procedencia ilícita del dinero o producto.

2. Quien participe en actos o contratos reales o simulados, de adquisición, posesión, transferencia y administración de bienes o valores tendientes a ocultar, encubrir, simular o diluir los recursos financieros obtenidos como resultado de las actividades ilícitas a que se refiere esta ley.
3. El que sin ser de las personas mencionadas en el inciso anterior y conociendo la procedencia ilícita del dinero o producto, autorizare, permitiere o realizare las transacciones a que se refiere este artículo, aprovechándose de su función, empleo o cargo, será sancionado con prisión de cinco a diez años y de Q 10 000.00 a Q 1 000 000.00 de multa. No incurrirán en esta figura delictiva las personas jurídicas o individuales que reportaran al Ministerio Público, las transacciones mayores a cincuenta mil quetzales que realizaren. Dichos reportes sólo podrán utilizarse para los efectos de esta ley.

ARTICULO 46.

Presunción. Para los efectos de esta ley, se establece la presunción de que el dinero o producto proviene de transacciones derivadas de los delitos a que se refiere esta ley, cuando se hayan adquirido o negociado en un plazo de tres años anteriores al procesamiento respectivo. Dicho plazo, por razones de irretroactividad de la ley, comenzará a contarse desde la vigencia de la presente ley.

ARTICULO 47.

Asociaciones delictivas . Los que formen parte de bandas o asociaciones, integradas por dos o más personas, destinadas a sembrar, cultivar, producir, refinar,

comercializar, vender, traficar, transportar, retener, distribuir, almacenar, importar, exportar, recibir o entregar drogas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o productos derivados de las mismas o destinados para su preparación, así como cualquier otra actividad ilícita relacionada con la misma, serán sancionados, por ese solo hecho, con pena de prisión de seis a diez años y multa de Q 1 500.00 a Q 3 000.00. Quien promueva, dirija, financie, o en cualquier forma realice una conducta sin la cual no podría realizarse la organización ni las actividades de estas bandas o asociaciones, será sancionado con pena de prisión de diez a veinte años y multa de Q 3 000.00 a Q 6 000.00. Lo anterior sin perjuicio de los demás delitos en que hayan incurrido.

ARTICULO 48.

Procuración de impunidad o evasión . Quien siendo funcionario o empleado público encargado de investigar, juzgar o custodiar a personas vinculadas con los delitos tipificados en esta ley, contribuya en cualquier forma a la impunidad o evasión de tales personas, oculte, altere, sustraiga o haga desaparecer las pruebas, los rastros o los instrumentos del delito, o que asegure el provecho o producto de ese hecho, será sancionado con prisión de seis a quince años e inhabilitación definitiva para el ejercicio de funciones públicas, y multa de Q 50 000.00 a Q 1000 000.00. Si los hechos mencionados se cometieron en forma culposa por el funcionario o empleado público, la pena será de dos a seis años con definitiva inhabilitación de funciones.

ARTICULO 49.

Promoción o estímulo a la drogadicción . quien estimule, promueva o induzca por cualquier medio el consumo no autorizado de drogas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas e inhaladles. será sancionado con prisión de dos a cinco años y multa de Q 5 000.00 a Q 100 000.00.

ARTICULO 50.

Encubrimiento real. El que con el fin de conseguir para sí o para un tercero algún provecho, después de haberse cometido un delito de los contemplados en esta ley, sin concierto previo ocultare, adquiriere o recibiere dinero, valores u objetos, conociendo que son productos de dicho delito o han sido utilizados para cometerlo, será sancionado con prisión de tres a cinco años y multa de Q 1 000.00 a Q 100 000.00.

ARTICULO 51.

Encubrimiento personal. El que con conocimiento de haberse cometido un delito de los contemplados en esta ley y sin concierto previo ayudare al autor o cómplice a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta, será sancionado con prisión de dos a cinco años, más multa de Q 1 000.00 a Q 100 000.00. Para los efectos de la aplicación de este articulo y el anterior, será indiferente que el hecho delictivo se hubiere cometido en territorio nacional o extranjero.

ARTICULO 52.

Delitos calificados por el resultado . Si como consecuencia de los delitos tipificados en esta ley, resultare la muerte de una o más personas, se aplicará la pena de muerte o

treinta años de prisión, según las circunstancias del hecho. Si el resultado fuere de lesiones graves o muy graves o pérdida o disminución de facultades mentales, la pena será de doce a veinte años de prisión.

ARTICULO 53.

Concurso de delitos. Si a consecuencia de los hechos a que se refiere esta ley, se hubieran consumado otras figuras delictivas, se aplicarán las reglas del concurso de delitos.

CAPÍTULO V

MODELO TEÓRICO

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ILÍCITOS VINCULADOS CON EL NARCOTRÁFICO

5.1. IMPORTANCIA DE LA MODIFICACIÓN DE LOS TIPOS PENALES:

Entendiendo que la política criminal se vale de todos los medios que aporten las ciencias penales, para combatir el crimen en su origen, para lograr ese objetivo,

en este caso prevenir el fármaco dependencia, esta claro que la unión de ramas especializadas (criminología, penología y política criminal) hace posible que la meta propuesta tienda al resultado deseado, con la aportación que hace la CRIMINOLOGÍA que es el estudio de la causal del delito, la POLÍTICA CRIMINAL, que es la ciencia que estudia los medios con los cuales el Estado ha de combatir, mediante el derecho de la prevención de la delincuencia, y la TOXICOLOGÍA, que se encarga de la identificación y estudios de los efectos adversos y de las consecuencias de la administración de drogas. Estas ciencias tienen un denominador común, ya que la conducta antisocial realizada por el fármaco dependiente, no es problema que deba dejarse únicamente a las normas represivas, es necesario analizar no solamente al sujeto desadaptado que realiza dicha conducta, sino también el marco de referencia que hizo posible su realización, así como a los factores que influyeron en la misma, es decir, se debe contribuir a la prevención de las causas o factores que generan deficiencias en el ser humano.

5.1.1. REFORMULAR LOS TIPOS PENALES PARA QUE EXISTA COHERENCIA EN SUS SANCIONES.

La propuesta esencial de una redefinición lógica y coherente en materia legislativa respecto al tráfico ilícito de drogas debe permitir identificar el “modus operandi” del narcotráfico que es similar al de cualquiera otra empresa: adquiere materia prima; luego, la transforma en un producto y finalmente, comercializa dicho

producto. Naturalmente, a esto se debe agregar un proceso de retroacción en el que encajarían el "lavado de dinero y la reinversión industrial". Sin embargo, creemos que esta última etapa no debería formar parte del tipo básico, sino quedar sujeta a una regulación especial o al nivel de premisa táctica del control. Teniendo en cuenta estos extremos, una nueva tipificación podría utilizar únicamente tres verbos- cultivar, fabricar y comercializar. En todo caso, quizás habría que sustituir los contenidos importar o exportar, por los de internar o extraer del territorio nacional y que guardan un mejor sentido semántico con la ilicitud del narcotráfico. Asimismo, **habría que eliminar la referencia analógica** la que señala por ejemplo "o que bajo cualquiera otra modalidad se dedique a actividades ilícitas con drogas".

Se piensa que esta modificación del tipo base no añadiría ni quitaría eficacia al celo represivo del Estado y en cambio, permitiría una tipificación más cercana a la certeza racional que demanda el principio de legalidad.

Por último, el tipo legal deberá incluir una expresa alusión al fin de tráfico ilícito como motivación de los actos de cultivo, fabricación y comercialización de las sustancias fiscalizadas.

Esta referencia declarararía, además, la descriminalización total de todo acto dirigido a la satisfacción del propio consumo; o de otros actos propios de la vida de relación de la sub-cultura adictiva, como la donación o invitación de drogas a "colegas" del consumo. Naturalmente, los casos de posesión desmesurada, las

llamadas "dosis de aprovisionamiento", sólo serían, en principio, una presunción "juris tantum" de tráfico ilícito.

5.1.2. REFORMULAR LAS SANCIONES APLICANDO EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.

En principio, hay que asumir como criterio regulador de la sanción el potencial nocivo de la sustancia objeto del delito. Por consiguiente, han de merecer menor sanción los traficantes de marihuana que los de PBC o cocaína. Igualmente, los actos de micro-tráfico deben ser reprimidos con menor severidad que el narcotráfico a gran escala. Ahora bien, para incorporar normativamente estos dos factores de atenuación es preferible recurrir, como lo hace el anteproyecto español de código penal de 1983, a una fórmula general que permita al juez actuar según las particularidades del caso concreto, y evitar, con ello, la imprecisión cuantitativa de las fórmulas vigentes.

Finalmente, deben adecuarse las penas al carácter real del delito, y no al interés simbólico que se persigue con su severa represión. En tal sentido, conviene señalar que equiparar el narcotráfico con la del asesinato genera, como efecto sustitución, que el coste marginal del homicidio para el narcotraficante se reduzca a cero; es decir, que traficar y matar "para traficar o seguir traficando" resulte al

delincuente actos con consecuencias iguales. Por tanto, proponemos que en ningún caso la pena privativa de libertad sea la de internamiento.

Mejorando la ley de despenalización, deberá declararse procedente la condena condicional cuando la pena a imponer no exceda de los tres años de privación de libertad.

Pues bien, para concluir queremos ratificar nuestro convencimiento que el tráfico ilícito de drogas no puede ser atajado con una estrategia penal; que su carácter operativo y psicosocial demandan estrategias fundamentalmente económicas.

Por consiguiente, todo proceso de criminalización o sobrecriminalización cumple únicamente un papel simbólico que concilia al Estado con sus compromisos extranjeros y con las demandas internas de su entorno social. En este tipo de praxis político-criminal, como sostiene Hassemer, no interesa mucho que la estrategia penal no solucione el problema, sino lo que verdaderamente importa al Estado es que ella sea lo suficientemente dura como para lograr "el apaciguamiento de la presión pública". A modo de colofón, hemos redactado los siguientes modelos de "tipo base" y "circunstancias" que, aunque sea mínimamente, podrían ser un inicio formal para mejorar la legislación vigente:

5.2. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ESPECÍFICA A LA NORMATIVA SUSTANTIVA.

El Artículo 33 inc. m)- actual - Ley 1008 señala:

Artículo. 33; Para los efectos de la presente ley:

(inc.m) TRAFICO ILICITO: Se entiende por tráfico ilícito de sustancias controladas todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y /o realizar transacciones a cualquier título o financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas.

A su vez el *Artículo. 48* de la misma ley en estudio señala:

Artículo 48; El que traficare con sustancias controladas será sancionado con presidio de diez a veinticinco años y diez mil a veinte mil días multa. Constituye circunstancia agravante el tráfico de sustancias controladas en volúmenes mayores.

En análisis del artículo 33 inc. m) traficante de sustancias controladas sería el que 1) POSEEA sustancias controladas, 2) PRODUZCA- es decir el que por ejemplo siembre marihuana, 3) FABRIQUE (por ejemplo pasta base- que puede ser el químico contratado), 4) ser DEPOSITARIO, 5) el que TRANSPORTE, 6) el que ENTREGUE, 7) el que SUMINISTRE - puede ser el médico por ejemplo -, el que 8) COMPRE, 9) el que VENDA, 10) el que DONE sustancias controladas 11) el que INTRODUZCA o 12) SAQUE DEL PAIS o 13) realice TRANSACCIONES a cualquier título o 14) FINANCIE actividades contrarias a la Ley 1008.

Lo que a buen romance significa que si un solo inciso engloba tantos tipos penales como el SUMINISTRO, el TRANSPORTE, LA POSESION DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, LA FABRICACION, etc. etc. todas las conductas tipificadas en la ley 1008 en forma independiente estarían demás, por lo que debían suprimirse y a todos los que acomoden su conducta a esta disposición sancionarse por TRAFICO (pena de prisión de 10 a 25 años) lo que es ilógico y absurdo, por ejemplo sancionar de igual forma al poseedor que al que comercialice sustancias controladas. Teniendo en cuenta estos extremos, una nueva tipificación podría utilizar como ya dijimos únicamente tres verbos: cultivar, fabricar y comercializar como los más importantes en materia de narcotráfico. **En el caso en estudio debe modificarse la disposición indicada (Art. 33 inc. m) por la siguiente:**

Artículo.33 inc. m); TRAFICO ILICITO se entiende por tráfico ilícito de sustancias controladas todo acto dirigido o emergente a COMERCIALIZAR drogas duras o blandas.

Respecto al Art. 48 consecuentemente debe ser modificado de la siguiente manera:

Artículo. 48; TRAFICO.- EL que traficare con sustancias controladas **será sancionado de 8 a 15 años de presidio** y hasta quinientos días multa. Será agravante el tráfico de **drogas duras** y en cantidades mayores.

Como ya se estableció no puede sancionarse en igual forma al que comercialice Clorhidrato de Cocaína que al que comercialice Marihuana o algún psicotrópico menor.

5.2.1. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA PARTE PROCEDIMENTAL (LEY 1970)

La ley 1970 o Nuevo Código de Procedimiento Penal ha establecido un gran avance en la normativa procesal boliviana en su aplicación plena a partir del 31 de mayo del 2.001 derogando toda la parte Procedimental establecida en al Ley 1008, consecuentemente ya no se podrá aplicar por los jueces la PRESUNCION DE

CULPABILIDAD a que obligaba la Ley 1008 en contra de los imputados así como ya no servirán de nada las “diligencias de policía judicial” que eran base para la apertura del proceso penal en la que se ignoraba el principio de inocencia y el derecho fundamental de defensa así como al debido proceso, empero todavía se han establecido en la Ley 1970 NCPP. Algunos atisbos en materia de narcotráfico del sistema inquisitivo:

El Artículo 69; del NCPP en el título II ORGANOS DE INVESTIGACION:

Artículo. 69; (Función de la Policía Judicial) La policía judicial es una función de servicio público para la investigación de los delitos.

La investigación de los delitos se halla a cargo del Ministerio Público, de la Policía Nacional y del Instituto de Investigaciones Forenses, de conformidad con lo previsto por la Constitución Política del Estado, las leyes y con los alcances establecidos en este Código.

La policía Nacional en ejercicio de funciones de policía judicial y el Instituto de Investigaciones Forenses participa en la investigación de los delitos bajo la dirección del Ministerio Público.

Las diligencias de policía judicial en materia de sustancias controladas serán procesadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico bajo la dirección del Fiscal de sustancias controladas.

La observación a este artículo es que en el párrafo segundo se establece en forma puntual que tres órganos son los encargados de la investigación 1) La Policía Nacional, 2) El Instituto de Investigaciones Forenses, y 3) El Ministerio Público, a la cabeza de los otros dos, empero en el último párrafo (seguramente por indicación de los organismos internacionales) se introduce como órgano aparte a la FELCN (Fuerza especial de lucha contra el narcotráfico) como si no perteneciese orgánicamente a la Policía Boliviana.

Por lo que debe suprimirse el último párrafo del Artículo 69 ya que puede mantener los actos abusivos y en contra de los Derechos Humanos que realizaban los de la FELCN.

Por otra parte de acuerdo a varios Autores e Instituciones por ejemplo: la Sociedad de Ciencias Penales de Bolivia, deben suprimirse las Instituciones del Agente Encubierto y la Entrega Vigilada por ser inconstitucionales.

5.2.2. LA PARTE SUSTANTIVA DEL LA LEY 1.008 DEBE INCORPORARSE COMO CAPITULO ESPECIAL DEL CÓDIGO PENAL.

Es incongruente e ilógico que habiéndose derogado la parte adjetiva de la Ley 1.008 por la aplicación del Nuevo Código de Procedimiento Penal superviva esa Ley únicamente con la parte sustantiva, tomando en cuenta la política criminal única que tiene el país que se traduce en un Derecho Penal único debe incorporarse los tipos penales de la indicada Ley como un capítulo especial en el Código Penal Boliviano.

oooooooooooooooooooo

CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES.

Se han analizado diferentes aspectos relacionados a la Ley N° 1008 y se ha notado que es pertinente y urgente una modificación, la cual debe estar orientada a una mejor administración de justicia basada en tipos penales que son proporcionales penalmente y que se esta respetando ante todo la Constitución Política del Estado.

La carencia de proporcionalidad en la penalidad de tan mencionados tipos penales solamente han generado inseguridad jurídica en nuestro medio, imponiendo sanciones que analizando su objetivo mediante el principio de proporcionalidad son totalmente injustas y se ha comprobado que además son inconstitucionales como así también lo respalda el Tribunal Constitucional en alguna de sus sentencias que son referidas a la materia de Narcotráfico.

Ahora bien es verdad que varios tipos penales necesitan un ajuste técnico con el fin de asegurar la confianza que el ciudadano debe tener a la Ley, que por el contrario no la tiene hoy en día por las razones mencionadas, pues ya han transcurrido varios años de la vigencia de dicha Ley, y lo único que se han hecho son críticas duras, pero nada más, a lo mucho que se hizo fue derogar dos artículos, si, nada más que dos artículos el Art. 132 y 133 respectivamente relacionados a los ORGANISMOS COMPETENTES como así lo describe el TÍTULO SEXTO de la Ley N° 1008, pero respecto a dichas modificaciones tampoco lo ha hecho la LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y SUPERVISIÓN teniendo como objeto regular:

- 1) La ejecución de las penas y medidas de seguridad dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes;
- 2) El cumplimiento de la suspensión condicional del proceso y de la pena;
y,
- 3) La ejecución de las medidas cautelares de carácter personal.

Como así lo señala en su primer artículo. De todas formas se comprueba que no se ha hecho modificaciones a los tipos penales que necesitan un ajuste técnico jurídico respecto la proporcionalidad en la penalidad de sus sanciones, por lo que se realizó la propuesta de modificación a dichos tipos, que una vez efectivizadas tales modificaciones se comprobará que las penas de la Ley N° 1008 son técnicamente justas y por lo tanto legales y constitucionales, es evidente que con la aprobación que se haga respecto a la modificación de los tipos penales en materia de narcotráfico que necesiten tal ajuste, no se reducirá el consumo de drogas, lo que por el contrario la presente Ley 1008 con sus sanciones excesivamente severas pensó que sí lo haría, y fracasó rotundamente pues el consumo aumento, entonces lo que se pretende con esta modificación es que se garantice el principio de legalidad, constitucionalidad y proporcionalidad, en dichas sanciones, eliminando la inseguridad jurídica y permitiendo que las sanciones penales de la normativa de la Ley 1008 sean legalmente mas justas para el individuo.

6.1.1. ARRIBÁNDOSE A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES ESPECÍFICAS:

1. Históricamente en Bolivia desde hace 2.000 años ha existido el uso tradicional y ritual de la hoja de coca. El Virrey Toledo el año 1571 trató de erradicar el cultivo de la hoja de coca.

2. En la República es a partir de los años 80 del pasado siglo que Bolivia es considerada productor de coca y cocaína y es considerada peligro a nivel mundial.
3. La lucha contra el narcotráfico a nivel mundial se inicia a partir de la segunda guerra mundial.
4. En el Derecho comparado se establece que en el Perú, Colombia y Paraguay, la redacción de sus normas que tipifican los delitos de tráfico, consumo y otros tipos penales respetan la legalidad y taxatividad de sus normas penales otorgando seguridad jurídica a su población.
5. El Tipo penal ha de entenderse como la abstracta descripción que el legislador hace de una conducta humana reprochable y punible.
6. Los tipos penales cumplen las siguientes funciones: a) Función garantizadora, b) función fundamentadora, función sistematizadora.
7. Los elementos estructurales del tipo penal son tres: La conducta típica, sus sujetos y sus objetos.

8. El principio de legalidad comporta como exigencias inmediatas, las de claridad y taxatividad en la determinación de las conductas prohibidas y de las sanciones aplicables. como único medio de otorgar verdadera seguridad jurídica a los ciudadanos.
9. La exigencia de la taxatividad en la determinación del ámbito de lo punible, derivados del significado esencial del principio de legalidad, requieren que la formulación de los tipos se lleve a cabo mediante términos rígidos, en los que la discrecionalidad del intérprete quede reducida al mínimo.
10. En la formulación de los tipos penales de los Art. 48 (Tráfico), 49 (Consumo y tenencia para el consumo), 51 (Suministro) y 55 (transporte) insertos en la Ley No. 1008 existe una praxis injustificada e inaceptable de indeterminaciones. Las descripciones no son precisas en cuanto a los elementos constitutivos de los hechos en cada caso, requiriendo de mayores componentes descriptivos y normativos que permitan diferenciarlos de manera clara e inequívoca. La realización material del principio de legalidad y consiguientemente la exigencia de la garantía de certeza, viene también condicionada por la forma como se encare el proceso de subsunción de la conducta en el tipo penal; pues, todo el andamiaje que importan las garantías formales, quedan reducidas a la nada, aplicando un precepto distinto, al de la conducta atribuida o

imputada. Sobre este aspecto, el análisis de las Resoluciones judiciales, nos permite concluir que los operadores de justicia, cada uno a su modo, efectúan subsunciones de conductas similares (en casos idénticas, con la única diferencia de las cantidades de droga poseídas) en tipos penales diferentes, imponiendo a algunos sujetos activos penas de 10 o mas años de presidio entretanto que a otros se impone penas mínimas que les permite acceder a la suspensión condicional de la pena aspecto que nos muestra, además, violación del principio de igualdad ante la Ley Penal y revela que las tipicidades en estudio no cumplen con las exigencias de seguridad jurídica desde la perspectiva de la previsibilidad individual, no pudiendo conceptuarse a la Ley No. 1008 como ley taxativa, ya que sus indeterminaciones requiere de “interpretaciones” que en la práctica, por la naturaleza del ser humano, no resultan homogéneas, lo que ocasiona aplicación a veces indebida y en otras errónea de la Ley sustantiva creando inseguridad jurídica, así como un vacilante camino de la jurisprudencia emergente de la Respetable Corte Suprema de Justicia de la Nación, aspectos que hacen patentes la necesidad de proclamar, si es posible, con rango constitucional, el carácter taxativo de las leyes penales

11. Del análisis de las resoluciones judiciales se establece que los operadores de justicia no coinciden en criterios generales para determinar qué conductas de las descritas en el Art. 48 debe ejecutar el

sujeto activo para ser considerado traficante. En aplicación estricta de esta tipicidad, en todos los casos, podría subsumirse la conducta del sujeto a su descripción en cuanto que las acciones de transportar, suministrar, etc. tienen como presupuesto necesario la posesión. En esta lógica, no se justifica la existencia de otros tipos penales en los que cada una de las acciones está sancionada de manera aislada.

12. En suma, los tipos penales en estudio no cumplen su función garantizadora ya que dejan al arbitrio del intérprete y, en su caso, del juzgador la determinación del contenido de las proposiciones legales. Tampoco cumplen su función fundamentadora ya que está sujeto al arbitrio la diferenciación de una figura delictiva de la otra.

6.2. RECOMENDACIONES

Tomando en cuenta que Bolivia vive en un Estado de Derecho, el Estado debe ejercer el Ius Puniendi en el marco que establece el principio de legalidad y de taxatividad, mediante el empleo de mecanismos legales adecuados. dejando solo como ultima ratio la indeterminación que quebranta toda idea de justicia

La Constitución Política Boliviana contiene una proclamación específica del principio de legalidad en materia penal en el Art. 16 Num. 4). En cuanto al *contenido*

esencial del principio, el Artículo citado establece la prohibición de la leyes penales retroactivas sino cuando sean favorables al encausado y, solo de manera implícita, como consecuencia del principio de seguridad jurídica se deduce el mandato de taxatividad y la prohibición de la analogía o creación judicial del Derecho. Por lo que se recomienda que estos se formulen expresamente en la Ley, si es posible con rango constitucional, solo así podremos garantizar de imponer a cada sujeto activo la pena que le corresponda previa calificación de su conducta según las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

La indeterminación quebranta todo concepto de justicia. Someter a una persona a un evento basado en la contingencia y en la incertidumbre es inseguridad jurídica, por ello, en definitiva los tipos penales en estudio deben reformularse con componentes descriptivos y normativos que nos permitan diferenciar una figura de la otra por semejantes que parezcan.

Una vez Aprobado el presente estudio de Tesis doctoral se recomienda sea puesto en apreciación por Autoridades del Gobierno de Bolivia para su análisis y consideración en busca de una mejor administración de justicia en Bolivia referente al tema narcotráfico; particularmente en los siguientes aspectos:

1. Debe modificarse el Art. 33 inc. “m” en lo referente al Tráfico de sustancias controladas.

2. Debe modificarse el Art. 48 de la Ley 1.008, tomando en cuenta los elementos del tipo ya señalados y modificando su sanción.
3. Debe redefinirse todo el sistema punitivo de los tipos penales que tienen que ver con el narcotráfico tomando en cuenta el principio del “Derecho Penal de última ratio” y proporcionalidad.
4. Debe eliminarse la referencia de la “analogía” en los tipos penales de la Ley 1.008.
5. Debe suprimirse la posibilidad de “presumir la culpabilidad” en los tipos penales referentes al narcotráfico.
6. Debe eliminarse del Nuevo Código de Procedimiento Penal las instituciones de “la entrega vigilada” y “el agente encubierto” por ser inconstitucionales.
7. Debe despenalizarse el consumo de sustancias controladas (Art. 49 Ley 1.008).

BIBLIOGRAFÍA

AGUIRRE, Mariano, Los días del futuro, Icaria, Barcelona, 1995.

AGUDELO BETANCOUR NÓDIER., CURSO DE DERECHO PENAL, ESQUEMAS DEL DELITO, Edit. Nuevo Foro, Santa Fe de Bogotá 1998, 144 Págs.

BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Penal, p. 196, Edit. Alfa Beta, Bs.As., abril 1993.

CARRILLO MARCO., LA COCA ILEGAL, SE REDUCE Y LO ALTERNATIVO AVANZA, BOLIVIA TRANSFORMACIONES CORREO DEL SUR 6 de agosto de 2004, 5 Págs.

CASTELLS, Manuel; La era de la información. Vol. 1: La sociedad red, Madrid: Alianza Editorial. (1997)

CATANZARO, Raimundo; El delito como empresa. Historia social de la mafia, Taurus, Madrid, 1992.

CEPAL. , La Ruta de las Drogas “Desintegración Social y Política en América Latina”, Editorial de las Naciones Unidas Santiago de Chile, 1997, 205 Págs.

CERID. , El Impacto del Capital Financiero “Del Narcotráfico en América Latina”, Editorial Atenea S.R.L. La Paz Bolivia, 199, 400 Págs.

COBO DEL ROSAL M., VIVES ANTÓN T.S. DERECHO PENAL, PARTE GENERAL, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia 1990, 790 Págs

CORTÉS AÑEZ Arturo., Nuevo Código de Procedimiento Penal, Jurisprudencia Constitucional y Documentos., Editorial Gaviota del Sur Sucre Bolivia, 2001, 397 Págs.

DOMBOIS, Rainer; "Dilemas organizacionales de las economías ilegales", en Análisis Político, nº 33, enero/abril, 1998.

DE LA TORRE Berdugo Gómez Ignacio, Luis Arroyo Zapatero Nicolás García Rivas, Juan Carlos Ferré Olivé, José Ramón Serrano Piedecabras, “Lecciones de Derecho Penal Parte General, Ed. Praxis, S.A. Barcelona 1996.

EL PAÍS, (12/7/99); "Menos de 7 años por un barco de hachís y 9 por una ‘papelina’".

EL PAÍS, (17/8/99); "Un ‘arrepentido’ de 17 años dice que la Mafia enseña a niños a matar".

FERREIRA DELGADO FRANCISCO, *TEORÍA GENERAL DEL DELITO*, Edit. Temis, Bogotá 1988, 435 Págs.

HERRERA AÑEZ, Williams. , *La Despenalización del narcotráfico*, Editorial Sirena, Santa Cruz Bolivia, 1996 194 Págs.

HOWARD WINES, *Prison and Criminal Law* en el primer volumen de *Correction and Prevention*, Nueva Cork, 1910, logy página 146; vid. sobre Llesber, Barnes, y Teeters, *New Horizons in Criminology*, pág.536. Vid. *La moderna Penología*, Cáp. I, García Valdés, Carlos, *La Nueva Penología*, Madrid 1977.

IRUSTA m. Gerardo & MIRANDA v. Edwin., *De Huanchaca al Narco, Revelaciones*. Editorial Gráfica Latina La Paz Bolivia, 1995, 215 Págs.

MINISTERIO DE GOBIERNO, Viceministerio de Defensa Social. ,
EXPERIENCIA DE LA JUSTICIA EN LOS TRES PRIMEROS MESES DE
APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL EN

MATERIA DE NARCOTRÁFICO, Editorial Atenea S.R.L. La Paz Bolivia, 2001,
 289 Págs.

MUÑOZ CONDE FRANCISCO., TEORÍA GENERAL DEL DELITO, Edit.
 Temis, Bogotá 1990, 243 Págs.

OBSERVATOIRE GÉOPOLITIQUE DES DROGUES, The World Geopolitics of
 Drugs 1997/1998. Annual Report, OGD, París, 1998, en Internet
 (<http://www.ogd.org>)

OLMO, Rosa del; "Para definir el tráfico y consumo de drogas. Reflexiones
 iniciales", en Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, n° 4/5, Buenos Aires,
 2do. Semestre de 1993 y 1° de 1994.

PNUD; Human Development Report, 1999, en Internet (<http://www.undp.org/hdro/>)

RIVERA IBAÑEZ José María. , LEY DEL RÉGIMEN DE LA COCA Y

REYES ECHANDIA ALFONSO., DERECHO PENAL, Edit. Temis, Bogotá 1990,
 327 Págs.

RONCKEN, Theo (coord); The Drug War in the Skies, TNI/Acción Andina, Cochabamba, 1999.

RUIZ SERVIO TULIO, LA ESTRUCTURA DEL DELITO, Edit. Temis, bogota 1978, 175 Págs.

SERVANDO SERRANO Torrico., Ley No. 1008 de 19 de Julio de 1988 Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, Editorial Serrano Cochabamba Bolivia, 1988, 192 Págs.

SOCIEDAD BOLIVIANA DE CIENCIAS PENALES, REVISTA BOLIVIANA DE CIENCIAS PENALES, Editorial Gráfica Drug La Paz, martes 17 de abril del 2001, 4 Pág. La Paz Bolivia, 2000, 176 Págs.

SUAREZ SAAVEDRA CESAR. CRITICA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Ed. Kipus 2004- Cochabamba-Bolivia

STRANGE, Susan; The Retreat of the State. The diffusion of Power in the World Economy, Cambridge: Cambridge University Press, Cambridge, 1997.

SUSTANCIAS CONTROLADAS Editorial Jurídica “Zegada” La Paz Bolivia, 1993, 366 Págs.

TORTOSA, José M.; Corrupción, Icaria, Más Madera, Barcelona, 1995.

UNRISD; Estados de desorden: los efectos sociales de la globalización.

UNRISD para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, UNRISD, Londres, 1995.

UMOPAR., 18 AÑOS DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, Edit.
Servicios Gráficos Integrales, Cochabamba 2001, 74 Págs.

VILLAMOR LUCÍA, Fernando, DERECHO PENAL BOLIVIANO, Parte
Especial, Tomo II, Impreso en Librería Editorial Popular, La Paz-Bolivia, 2003.

ZAFFARONI EUGENIO RAUL., TRATADO DE DERECHO PENAL, Ed.
(AÑADIR)

(1998) LA ERA DE LA INFORMACION Vol. 3: Fin de Milenio, Madrid: Alianza
Editorial.

oooooooooooooooooooooooooooo

ANEXOS

ANEXO 1

SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA N° 1 EN DELITOS DE LA LEY 1008

No. SENTENCIA	CALIFICACIÓN DEL HECHO EN LA ACUSACIÓN	HECHOS PROBADOS	SENTENCIA Y CALIFICACIÓN DEL HECHO EN LA SENTENCIA	FUNDAMENTOS DEL FALLO
22/2003	TRÁFICO Art. 48 y 49 segundo párrafo.	Posesión 23 gramos de marihuana en la calle España. Almacenamiento de 53 gramos marihuana en su domicilio, fraccionado en 55 bolsitas. El imputado es consumidor no habitual de aprox. 20 grs. al mes	Absolutoria. Tenencia para el Consumo. Art. 49 primera parte.	Tomando en cuenta el carácter finalista de la conducta no se ha demostrado que la conducta del imputado estaba dirigida a vender o comercializar sustancias controladas.
03/2003	Tráfico Art. 48 y 49 segundo párrafo.	Posesión en Plazuela Simón Rodríguez de 26 grs. de clorhidrato de cocaína distribuidas en 3 cajas de fósforo. El imputado es consumidor de 4 a 5 gr. de cocaína al día	Condenatoria por tráfico. (Arts. 48 y 49). 10 años de presidio.	Constituye tráfico la posesión de sustancias controladas en cantidad que supera la requerida para el consumo inmediato. Constituye tráfico el acto de poseer dolosamente.
02/2004	Tráfico Art. 48 y 49 2do. Párrafo.	Posesión de 5 grs. de cocaína, distribuidos en 8 sobres. El imputado es consumidor de 15 a 25 mg. En 48 horas.	Absolutoria.	El imputado es consumidor y el M°P° no ha demostrado que hubiera estado en afán o realizando comercialización de sustancias controladas.

ANEXO 2

**SENTENCIAS PRONUNCIADAS EN EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 1ro EN LO PENAL EN DELITOS DE LA
LEY 1008**

1.1.1.2.1.1.1.1.1 SENTENCIA No.	CALIFICACIÓN DEL HECHO EN LA ACUSACIÓN	HECHOS PROBADOS	SENTENCIA Y CALIFICACIÓN DEL HECHO EN LA SENTENCIA	FUNDAMENTOS DEL FALLO
11/2003	Consumo y Tenencia para el Consumo Art. 49 1er. Párrafo	En registro personal efectuado en la terminal de buses se secuestra de los genitales del imputado 4 g. de marihuana. El imputado estaba en actitud sospechosa junto a V. Ch.	Declara autor de Consumo y Tenencia para el Consumo Art. 49 1er. Párrafo. Ordena su internación en un centro de rehabilitación de drogo dependientes	El imputado ha admitido en forma libre su participación en el hecho atribuido, el mismo ha sido acreditado con pruebas documentales y periciales. Según anota el representante del Min. P. estaba destinada para el consumo
15/2003	Tráfico	De su habitación se secuestra 9 g de cocaína, 143 g de marihuana y 381 g. de manitol Se secuestra también 18 bolsitas de nylon transparente (20x4 cm.) y 2 envoltorios de bolsitas con residuos de sustancia blanquecina. Un arma de fuego y tres celulares	Autor del delito de tráfico Art. 48 y 33 Inc. M ley 1008	En la habitación del imputado se ha encontrado sustancia controlada en posesión dolosa, almacenándola para comercializarla.
01/2004	Tentativa de Suministro Art. 51 Ley 1008 con relación al	En la tranca de la Zapatera, interior de la flota Trans Capital procedente de Santa Cruz se encuentra un bolsón conteniendo 3430 g. de marihuana	Declara autor del delito de tentativa de suministro. Condena a 5 años y 4 meses de presidio.	Las pruebas documentales han acreditado, lo que el imputado no ha negado, ser el portador del bolsón

	8vo del C.P.	El imputado refiere que la persona que le entrego el bolsón le dijo que era hierba medicinal Debía transportarla hasta la localidad de Vila y entregarla a Ángel Mamad		que contenía marihuana traída desde Santa Cruz, para ser entregada sin ninguna justificación en Vila Chuquisaca.
04/2004	Transporte de sustancias controladas, Art. 55 de la Ley 1008	En la tranca Zapatera, flota Mopar, procedente de Cochabamba, se secuestra un bolsón de propiedad de A.V.V., conteniendo un paquete con 12300 g de cocaína. El imputado oculto la contraseña del ticket de su equipaje en las ranuras del asiento que ocupaba. Conforme a la declaración del imputado el paquete le fue entregado en Cochabamba por L.M.A, éste lo recogería en la terminal a cambio de 200 Bs.	Transporte de Sustancias Controladas: 8 años de presidio.	
05/2004	Instigación en grado de Tentativa Art.56 de la Ley 1008 con relación al 8vo. del C.P.	En la tranca Zapatera, flota Bolívar procedente de Cochabamba, del perchero del Asiento Nro. 28 se secuestra una mochila con 133 g de semilla de marihuana, su propietario es el imputado P.U.A. En su declaración informativa el imputado refiere que las semillas iban a ser entregadas a J.C. para que este último sembrara y así producir planta de marihuana. J.C. no es identificado ni habido.	Autor de Instigación en grado de tentativa Art. 56 Ley 1008 con relación al Art. 8vo. del C.P. condena: 3 años de reclusión.	Las semillas de marihuana eran de propiedad del imputado para ser entregadas a su amigo J.C. a quien trato de alentar para que sea sembrada, aspecto que no se ha consumado debido a la intervención del grupo operativo.

06/2004	Instigación Art. 56 Ley 1008	A consecuencia de denuncia anónima se secuestra de la habitación del imputado 197 g de marihuana y 8 g. de cocaína y un revolver calibre 22. El imputado afirma que la droga iba a ser consumida con sus amigos, que días anteriores a su aprensión incito a estos para consumir el día de la entada de la Virgen.	Instigación Art. 56 de la Ley 1008. Condena: 4 años de presidio	Las pruebas documentales periciales y las reglas de la sana crítica permiten concluir que las sustancias controladas eran de propiedad del imputado, quién insito a consumir a sus amigos a consumirla el día de la entrada de la Virgen.
10/2004	Tentativa de Suministro Art. 51 de la Ley 1008 con relación al 8vo. del C.P.	En la tranca de la Zapatera en la Flota Trans Capital, procedente de Santa Cruz, a la altura del asiento 45 ocupado por el imputado se secuestra una bolsa con 377 g. de marihuana. Según la declaración del imputado la marihuana tenía como destino la ciudad de Potosí, donde debía entregarse a Víctor y Eddy, (quienes no son investigados).	Tentativa de Suministro Art. 51 de la Ley 1008 con relación al Art. 8vo. del C.P. Condena: 5 años y 4 meses.	Se entiende por suministro a el traspaso de una Sustancia Controlada entre personas sin justificación legal El imputado ha declarado que la sustancia fue adquirida en Santacruz de doña Epi que iba a ser entregada Víctor y Hedí.
11/2004	Transporte de Sustancias Controladas Art. 55 de la Ley 1008	En la tranca de Yotala interior del vehículo de transporte Cielito Lindo, se encuentra a W.O.H. transportando en su mochila 100 cápsulas con 1144 g de cocaína. En su declaración informativa el imputado señala que trasladaba el producto hasta Potosí a cambio de 500 dólares.	Transporte de Sustancias Controladas Art. 55 de la Ley 1008 Condena: 8 años de presidio.	Las pruebas documentales y periciales han acreditado la participación del imputado en el hecho que conforme al Art. 55 de la Ley 1008 define como transporte

13/2004	Transporte Art. 55 de la Ley 1008	En el reten de la Zapatera, flota Bolívar procedente de Cochabamba, en el buzón se encuentra el equipaje A.C.A., conteniendo un televisor, conteniendo en su interior 4653 g contenidos en 470 cápsulas.	Transporte Art. 55 de la Ley 1008 Condena: 8 años de presidio	El imputado ha sido encontrado en flagrancia transportando 470 cápsulas de cocaína camuflada de manera hábil al interior de un televisor. Por lo que conocía que la sustancia era controlada
15/2004	Transporte Art. 55 de la Ley 1008	En la Tranca de la Zapatera, flota Copacabana, se detecta dos sospechosos, efectuado el registro personal se encuentra adherido al estomago del imputado paquetes de cocaína, revisado su bolsón entre sus prendas de vestir otro paquete similar, el total de cocaína secuestrada 1499 g cocaína	Transporte Art. 55 de la Ley 1008 Condena: 8 años de presidio	El solo hecho de haber mantenido oculta la sustancia adherida a su cuerpo, así como camuflada entre sus pertenencias, hace entender que el imputado sabía que la sustancia que transportaba es prohibida
18/2004	Instigación en grado de tentativa Art. 56 de la Ley 1008.	En la tranca de Yotala en el Empresa de Transporte Cielito Lindo se descubre a W.O.H. con 100 cápsulas de cocaína que pesan 1144 g. y al imputado W.I.V. se secuestra un celular y 560 Bs. Por su propia declaración se sabe que alentó a WOH a llegar a su destino. Lo que no se efectivizo por intervención de efectivos de la FELCN	Instigación en grado de tentativa Condena: 3 años de presidio.	El imputado cancelo el pasaje no solo de el sino de W.O.H. en la ruta Sucre Potosí. Y admite en su declaración
19/2004	Transporte de	En la tranca de la Zapatera, Flota Copacabana en requisa personal se	Transporte de Sustancias	El imputado sabia muy bien que la sustancia que

	Sustancias Controladas Art. 55 de la Ley 1008	secuestro de V.P.O. y L.C.L. adheridos en su estómago, paquetes de cocaína con un peso de 1499 g y 1054 g. respectivamente	Controladas Art. 55 de la Ley 1008 Condena: 8 años de presidio	transportaba era prohibida por eso la mantuvo oculta adherida a su cuerpo.
21/2004	Transporte de Sustancias Controladas Art. 55 de la Ley 1008	En la Tranca de Yotala, en el auto de la empresa Colonial Plus, se encuentro en la maleta 5 paquetes de marihuana con un peso de 22200 g. siendo sus propietarios R.W.M. y M.S. C. procedentes de la ciudad de Santa Cruz con rumbo a Potosí, se secuestra también un arma de fuego calibre 38 mas 10 proyectiles. En su declaración R.W.M. señala que la droga le entrego en Montero Santa Cruz G.M.	Transporte de Sustancias Controladas Art. 55 de la Ley 1008 Condena a 8 años	La sustancia estaba siendo transporta de manera camuflada, infiriéndose que el imputado tenía pleno conocimiento de su ilicitud.
22/2004	Suministro de sustancias controladas Art. 51 de la Ley 1008	En el inmueble de la imputada se secuestra 568 g de marihuana y 7,6 g de cocaína, distribuidos en sobrecitos de papel bond de diferentes tamaños	Suministro de sustancias controladas Art. 51 de la Ley 1008 Condena: 8 años de presidio	La conducta es reprochable a la imputada por cuanto de manera hábil ha sabido camuflar la sustancia controlada fraccionándola en pequeños sobrecitos, ha fin de que puedan pasar desapercibidas para culminar en algún destinatario

24/2005	Transporte de Sustancias Controladas Art. 55 de la Ley 1008	En la tranca de la Zapatera Flota Trans Illimani se procede a la requisa personal a D.R.M. y E.C.R., adherido al cuerpo de cada uno se encuentran fajas conteniendo un total de 2606 g de cocaína.	De Sustancias Controladas Art. 55 de la Ley 1008. Condena: 8 años de presidio a cada uno.	El hecho de haber mantenido oculta la sustancia en su cuerpo sujetos con faja elástica hace comprender que los imputados sabían que lo que transportaban es prohibido
---------	---	--	---	---

ANEXO N° 3

**SENTENCIAS PRONUNCIADAS EN EL JUZGADO 2° DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL EN DELITOS DE LA
LEY 1008**

No. SENTENCIA	CALIFICACIÓN DEL HECHO EN LA ACUSACIÓN	HECHOS PROBADOS	SENTENCIA Y CALIFICACIÓN DEL HECHO EN LA SENTENCIA	FUNDAMENTOS DEL FALLO
02/2003	Consumo y tenencia para el consumo Art. 49 1er. Párrafo	Secuestro en su habitación de 4 g. De marihuana en su habitación, el imputado es consumidor habitual de marihuana	Se declara autor de consumo y tenencia para el consumo. Ordenando su internación en un centro de rehabilitación	Se infiere que al ser consumidor habitual de marihuana, que los 4 g. eran para su consumo inmediato.
03/2003	Consumo y tenencia para el consumo Art. 49 1er. Párrafo	Del registro personal que se le practica al ingreso de la cárcel pública, al visitar a su esposo, se secuestra 4 g de marihuana del interior de su corpiño. La imputada 3 a 4 g. de marihuana al día.	Se declara autor de consumo y tenencia para el consumo Ordenando su internación en un centro de rehabilitación	Se presume que la tenencia era para su consumo.
04/2003	Tentativa de instigación para el consumo	Transporto en la ruta Cochabamba Sucre 122 g de marihuana, en su habitación se secuestra semillas de marihuana, 3 pipetas de papel estañado y 1 de madera.	Se declara autor del delito de Instigación en grado de tentativa Art. 56 de la Ley 1008 y 8 del C.P. Condena a 3 años de presidio	Las semillas de marihuana las pipetas y la cantidad total de marihuana incautada dan muestra evidente de que tenían la intención de incitar al consumo de sustancias controladas a los amigos que le visitaban en su habitación

05/2004	Transporte de sustancias controladas, Art. 55 de la Ley 1008	Transporto en la ruta La Paz Sucre en la Flota Copacabana, un paquete con 2994 g. de cocaína, siendo sorprendido en la tranca de Yotala	Se lo declara autor del delito de Transporte de Sustancias controladas. Condena: 8 años de presidio	En flagrante posesión de cocaína cuando trasladaba dicha sustancia a la ciudad de Sucre procedente de la ciudad de La Paz.
07/2004	Complicidad en el Transporte de sustancias controladas, Art. 76 con relación 55 de la Ley 1008.	En el bus de la empresa unificado secuestran un bolsón negro perteneciente a la imputada L.F.P. conteniendo 4943 g de cocaína, la imputada admite el transporte de los 5 paquetes por cuenta de I.R.C.	Autora de complicidad en el transporte, condena: 5 años y 4 meses de presidio.	La imputada al ser dependiente y empleada de I.R.C., sin embargo de conocer la actividad ilícita coopero dolosamente transportando cocaína de propiedad de I.R.C., quien pago sus pasajes alimentación y otros.
07/2004	Transporte de sustancias controladas, Art. 55 de la Ley 1008	En el bus de la empresa unificado secuestran en el equipaje de la imputada I.R.C. 3 paquetes conteniendo 3076 g de cocaína, la imputada admite la propiedad y el transporte de los 3 paquetes de cocaína, mas la propiedad de los 5 secuestros a L.F.P. I.R.C. compro los pasajes de L.F.P. le dio dinero para su alimentación y otros gastos.	Autora del delito de transporte, se la condena: 8 años de presidio.	Haber sido sorprendida trasladando ilícitamente la cocaína

ANEXO N° 4

PREGUNTA N° 1

TOTAL: 25 Jueces

20: Fiscales

20: Abogados

20: Defensores

Considera Usted que la formulación típica del Art. 48 de la Ley 1008 es clara, en cuanto se entiende de ella, sin lugar a duda, que es lo que debe considerarse como delio de tráfico.

OPERADOR	SI	NO
JUECES		5
FISCALES		3
ABOGADOS		10
DFENSORES		42

PREGUNTA N° 2

TOTAL: 25 Jueces

20: Fiscales

20: Abogados

20: Defensores

En su concepto los hechos que debe ejecutar el imputado para ser considerado como traficante, de acuerdo a la descripción contenida en el Art. 48 de la Ley 1008, son todos los que están descritos en éste artículo?.

OPERADOR	SI	NO
JUECES	10	5
FISCALES	5	3
ABOGADOS	2	10
DFENSORES	3	12

PREGUNTA N° 3

TOTAL: 25 Jueces

20: Fiscales

20: Abogados

20: Defensores

Cree usted que el segundo párrafo del Art. 49 de la Ley 1008 es violatorio del principio de inocencia?

OPERADOR	SI	NO
JUECES	15	-
FISCALES	3	-
ABOGADOS	8	2
DFENSORES	12	-

PREGUNTA N° 4

TOTAL: 25 Jueces

20: Fiscales

20: Abogados

20: Defensores

Encuentra usted diferencia entre los tipos penales del tráfico previstos en el Art. 48 y el tráfico del segundo párrafo del Art. 49 de la Ley 1008 ?.

OPERADOR	SI	NO
JUECES	3	12
FISCALES	3	22
ABOGADOS	6	4
DFENSORES	-	-

PREGUNTA N° 5

TOTAL: 25 Jueces

20: Fiscales

20: Abogados

20: Defensores

Cree usted que los jueces al dictar resoluciones, efectúan una correcta y homogénea interpretación de los Arts. 48, 49, 51 y 55 todos de la Ley 1008, al momento de aplicarlos a casos similares?

OPERADOR	SI	NO
JUECES	15	5
FISCALES	7	3
ABOGADOS	10	10
DFENSORES	10	-

PREGUNTA N° 6

TOTAL: 25 Jueces

20: Fiscales

20: Abogados

20: Defensores

Cree usted que los Fiscales a tiempo de calificar los hecho atribuidos, en casos similares efectúan una aplicación homogénea?

OPERADOR	SI	NO
J UECES	10	5
FISCALES	10	3
ABOGADOS	-	10
DFENSORES	2	20

ANEXO 5

CUADRO DE DIFERENCIAS DE DROGAS DURAS Y DROGAS BLANDAS DEL MODELO HOLANDES

DROGAS DURAS	DROGAS BLANDAS
Anfetaminas	Derivados del cáñamo (Cannabis Sativa):
2 Cocaína	Nederweit (Cultivo Holandés de Marihuana)
Heroína	Hachís
LSD (Droga Química)	Marihuana
XTC (Droga Química)	

ANEXO 6

**CUADRO DE DIFERENCIAS DE PENAS DE DROGAS DURAS Y
BLANDAS DEL MODELO HOLANDES**

2.1 ACTOS PUNIBLES Y PENAS MAXIMAS	
DROGAS DURAS	DROGAS BLANDAS
Importación/ Exportación: 12 años de pena privativa de libertad y/o 100.000 florines de multa*	Importación/ Exportación: 4 años de pena privativa de libertad y/o 25.000 florines de multa*
Venta, transporte, fabricación: 8 años de pena privativa de libertad y/o 100.000 florines de multa*	Venta, fabricación, tenencia: 2 años de pena privativa de libertad y/o 25.000 florines de multa*
Propósito de importar o exportar, etc.: 6 años de pena privativa de libertad y/o 100.000 de multa* (desde 1085)	Venta, fabricación, tenencia de hasta 30 gramos: 1 mes de pena privativa de libertad y/o 5.000 florines de multa*
Tenencia: 4 años de pena privativa de libertad y/o 100.000 florines.	
Tenencia para autoconsumo: Un año de pena privativa de libertad y/o 10.000 florines	* Un Florín = 0.55 de Dólar
La pena máxima por haber cometido varias veces un delito asciende a 16 años de libertad y/o 100.000 florines de multa.	

ANEXO 7

MAPA Y GEOPOLÍTICA DE LA COCAINA	
BOLIVIA – PERÚ -	Principales abastecedores de materia prima y mano de obra barata para cultivo de la planta de coca y procesamiento en gran escala de pasta base/ Exportadores de pasta de base y pequeñas cantidades de cocaína.
COLOMBIA	Rol empresarial y gerencial/ Procesamiento masivo de cocaína/ Financia la producción en otros países/ Compra la pasta base a campesinos peruanos y bolivianos/ Principal distribuidor al por mayor en Estados Unidos/ Creación de economía subterránea para prestar servicios a la industria en transporte, comunicaciones finanzas, sistemas de seguridad, etc.
ECUADOR -	Centro de lavado de dinero/ Refinación de cocaína/ Estación de tránsito para el embarque de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos desde Guayaquil y al mismo tiempo de recepción de precursores químicos de Europa y Estados Unidos para los laboratorios de la selva amazónica.

VENEZUELA	Centro de lavado de dinero/ Estación de tránsito de cocaína hacia Europa por vía aérea y a Estados Unidos utilizando con frecuencia barcos venezolanos/ múltiples pistas de aterrizaje en Apure y Tachira/ Importador de precursores químicos/ Gran almacén/ Margarita Puerto Libre que facilita el tráfico.
MÉXICO	Importante financiera/ zona de tránsito y tráfico de la tercera parte de la cocaína a Estados Unidos por la represión en el Caribe.
CENTRO AMÉRICA	Zona de tránsito/ COSTA RICA múltiples pistas laboratorios/ lavado de dinero.
PANAMÁ	Transacciones financieras en sus 128 bancos/ conexión de líneas aéreas/ Puerto Libre que facilita el tráfico
BAHAMAS	Paraíso Fiscal/ tránsito/ parada técnica para abastecimiento de combustible/ Gran depósito.
CAIMÁN/ TURCOSY CAICOS/ CARIBE ORIENTAL -	Paraísos fiscales/ Puntos de transbordo/ Abastecimiento de combustible
REP.DOMINICANA -	Tránsito de cocaína
BRASIL	Cultivos de coca Epadu/ Laboratorios/ Producción de éter y acetona
ARGENTINA	Productor de éter, bencina y tolueno/ Laboratorios

ANEXO 8

II. ESTADÍSTICAS DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO (FELCN): GESTIONES 2002 – 2005

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), creada por Decreto Supremo N° 21666 del 24 de julio de 1987, es el Organismo Técnico Operativo del Estado Boliviano en el área de interdicción al narcotráfico, dependiente del Ministerio de Gobierno a través del Viceministerio de Defensa Social.

La ley N° 1970 del Código de Procedimiento Penal, en su disposición final sexta numeral 1), deroga los artículos 80° al 131° de los títulos IV y V de la Ley 1008 y toda norma procesal que contenga dicha ley que se oponga al Código. Estas disposiciones derogadas hacían referencia a normas propias sobre la aplicación y juzgamiento; la jurisdicción y competencia; el Ministerio Público; las diligencias de Policía Judicial; la apertura de causa, el debate, la sentencia, recursos, prescripción y normas sobre economía procesal. En este sentido, la acción penal por los delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008 son de orden público y su procesamiento seguirá las normas establecidas en la Ley 1970.

Asimismo el Título Tercero de la Ley 1008 establece los delitos que serán competencia de los Juzgados de Sustancias Controladas, así como las sanciones que se impondrán por la comisión de estos delitos los cuales se establecen en relación a:

- Plantas Controladas (Art. 46)
- Fabricación (Art. 47)
- Tráfico (Art. 48)

- Administración (Art. 50)
- Suministro y agravantes (Arts. 51 y 52)
- Asociación Delictuosa y Confabulación (Art. 53)
- Inducción (Art. 54)
- Transporte (Art. 55)
- Instigación (Art. 56)
- Asesinato (Art. 57)
- Falsificación (Art. 58)
- Importación (Art. 59)
- Obligación de Denuncia por el Propietario (Art. 60)
- Encubrimiento en Locales Públicos (Art. 61)
- Obligación de Profesionales (Art. 62)
- Venta en Farmacia (Art. 63)
- Inventarios y Registros (Art. 64)
- Funcionarios Públicos (Art. 65)
- Cohecho Pasivo (Art. 66)
- Cohecho Activo (Art. 67)
- Concusión Propia (Art. 68)
- Concusión Impropia (Art. 69)
- Alteración o Sustitución del objeto del delito (Art. 70)
- Evasión (Art. 72)
- Favorecimiento a la Evasión (Art. 73)
- Excarcelación (Art. 74)
- Encubrimiento (Art. 75)
- Complicidad (Art. 76)
- Receptación (Art. 77)
- Uso de Armas (Art. 78)
- Apología del Delito (Art. 79)

Los delitos vinculados a sustancias controladas en general, son registrados bajo el denominativo de “operativos realizados”, debido a que la FELCN trabaja principalmente a través de la intervención policial preventiva. Asimismo, se sabe que la recepción de denuncias es poco frecuente y por ende no se cuenta con estadísticas de las mismas. Por otra parte, se

desconoce si existen registros sobre la aplicación y frecuencia de las figuras de la entrega vigilada y el agente encubierto.

A continuación se exponen antecedentes sobre los operativos ejecutados por la FELCN a nivel nacional entre los años 2000 y 2002.

ANEXO 9

Operativos realizados por gestión, FELCN 2000 – 2002

Año	2000	2001	2002
Operativos realizados	4.912	4.481	3.596

Fuente: Comando General. Fuerza Especial de Lucha

Contra el Narcotráfico (FELCN).

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) ha proporcionado información de las gestiones 2001, 2002 - 2005, que es desarrollada y expuesta en el informe para conocer en forma general sus tareas en el ámbito del control y represión del fenómeno criminal del narcotráfico en Bolivia. Dichas tareas contemplan principalmente operativos realizados, droga incautada, laboratorios de refinamiento y reciclaje destruidos, fabricas destruidas, pistas destruidas y personas aprehendidas.

Los datos que se presentan a continuación han sido proporcionados por el Departamento de Operaciones a través de la División de Registro y Estadística de la FELCN.

En este sentido se han obtenido los siguientes datos:

ANEXO 10

Actividades llevadas a cabo por gestión FELCN, 2002 - 2004

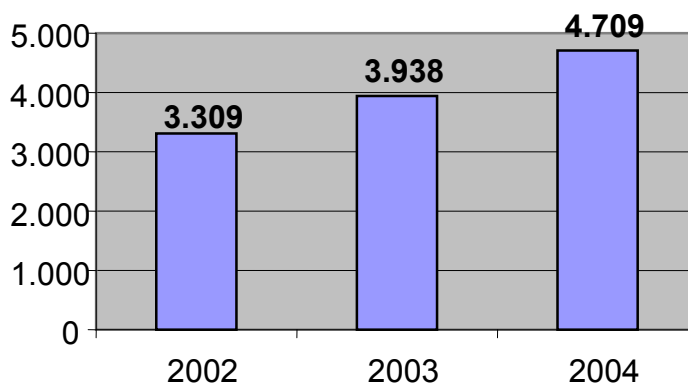
Descripción	2002	2003	2004	Total
Operativos realizados	3.309	3.938	4.709	11.956
Droga Incautada*	11.669.115,10	13.856.988,60	21.409.429,81	46.935.533,51
Lab. refinamiento Destruídos	3	1	2	6
Lab. reciclaje destruidos	2	6	3	11
Fábricas destruidas	1.006	1.420	1.769	4.195
Pozas destruidas	1.292	1.950	2.544	5.786
Personas aprehendidas	2.948	3.229	3.902	10.079

Fuente: Dpto. III Operaciones, Div. Registro y Estadística de la FELCN

*En gramos (gr)

ANEXO 11

Operativos realizados por gestión, FELCN 2002 – 2004



Entre las gestiones 2002 y 2004 se verifica un ascenso considerable en los operativos especiales realizados por la FELCN. Entre el año 2001 y 2002 se registró un incremento del 19% (629 operativos). Entre el 2002 y 2004 se registró un aumento del 19,5% (771 operativos).

La cantidad de droga incautada entre el 2001 y el 2003 denota un aumento considerable. Así, se tiene que durante el 2002 se incautó 2.187.873,50 gramos más que durante el 2001, es decir, un 18,75%. En el 2003 se incautó 7.552.441,21 gramos más que durante el 2002, lo cual representa un incremento del 54,50%.

Se destruyeron 3 (tres) laboratorios de refinamiento el 2001; 1 (uno) el 2002 y; 2 (dos) el 2003. Por otro lado, durante la gestión 2001 se destruyeron 2 (dos) laboratorios de reciclaje; 6 (seis) el 2002 y; 3 (tres) el 2003.

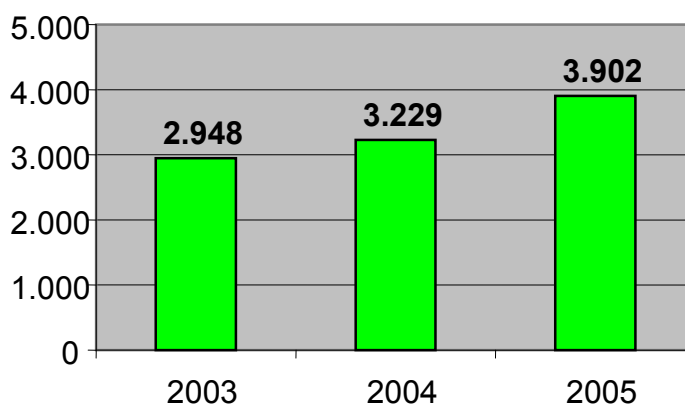
Asimismo, el 2001 se destruyeron 1.006 fábricas; 1.420 fábricas el 2002 y; 1.769 fábricas el 2003. De acuerdo a estos datos se advierte un notable ascenso del 2001 al 2003, ya que durante el 2001 se destruyeron 414 fábricas más que en el 2002, que representa un incremento del 41,15%. El 2003 se destruyeron 349 fábricas más que en el 2002, equivalente a un 24,57%.

En lo que respecta a las pozas destruidas los datos reflejan también un ascenso del 2001 al 2003. En la gestión 2001 se destruyeron 1.292 pozas; 1.950 pozas el 2002 y; 2.544 pozas el 2003. Así se tiene que durante el 2002 se destruyeron 658 pozas más que en el 2001, representando un aumento del 50,92%. El 2003 se destruyeron 594 pozas más que el 2002, esto es, un 30,46%.

Por último, las cifras muestran un preocupante ascenso de las personas aprehendidas por actividades de narcotráfico entre el 2001 y 2003. Durante la gestión 2001 se aprehendieron 2.948 personas; el 2002 se aprehendieron a 3.299 personas y; durante el 2003 se aprehendieron a 3.902 personas. En este entendido, se observa que durante el 2002 se aprehendieron 281 personas más que el 2001 (9,53%); y que durante el 2004 se aprehendieron 673 personas más que el 2003 (20,84%).

ANEXO 12

Aprehendidos por gestión FELCN, 2003 – 2005



DATOS FELCN – 2003-2005: OPERATIVOS MÁS IMPORTANTES

Los datos proporcionados respecto a la gestión 2003-2005 sólo contemplan los operativos más importantes a nivel nacional según el criterio de la FELCN. Por tanto, los datos que se expresan a continuación no son representativos de toda la actividad desempeñada durante el 2001, sino constituye una muestra de la información que fue puesta disposición por la FELCN.

ANEXO 13

Aprehendidos y droga Incautada por mes, FELCN 2005 (Operativos Importantes)

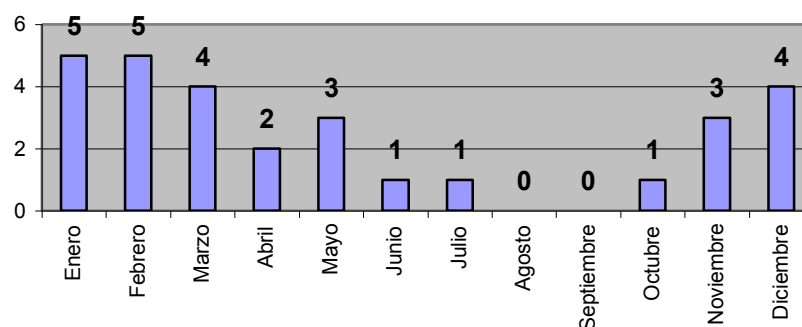
Mes	Operativos Importantes	Personas Aprehendidas	Droga incautada (en gramos)
Enero	5	7	563.500
Febrero	5	4	213.580
Marzo	4	11	1.133.710
Abril	2	4	88.500
Mayo	3	6	196.700
Junio	1	5	50.975
Julio	1	5	36.105
Agosto	0	0	0
Septiembre	0	0	0
Octubre	1	6	43.825
Noviembre	3	10	115.000
Diciembre	4	4	701.286
Total	29	62	3.143.181

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos proporcionados por la FELCN

Durante la gestión 2005 se realizaron 29 operativos importantes, constituyendo un 0,87% del total de operativos realizados durante dicha gestión (3.309). El mayor número de operativos importantes se registró en los meses de enero y febrero con 5 operativos cada uno; en contrapartida durante los meses de agosto y septiembre no se registran operativos importantes.

ANEXO 14

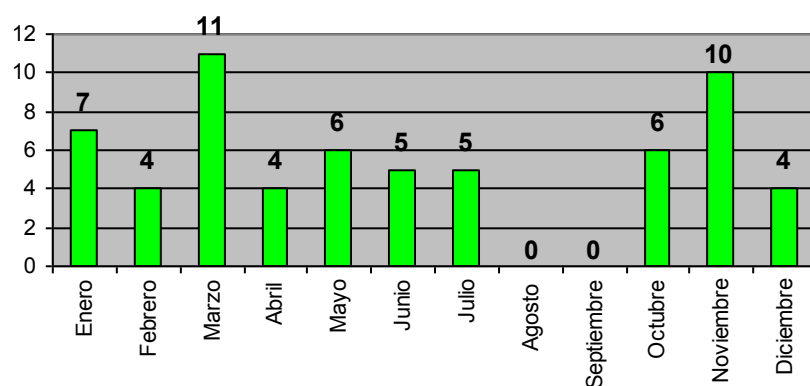
Operativos importantes realizados por mes, FELCN 2004



Se aprehendieron a 62 personas en los operativos importantes realizados, que representa el 2,10% del total de personas aprehendidas durante la gestión 2001 (2.948). El mayor número de personas aprehendidas en operativos importantes se registra en los meses de marzo con 11 aprehensiones y noviembre con 10 aprehensiones.

ANEXO 15

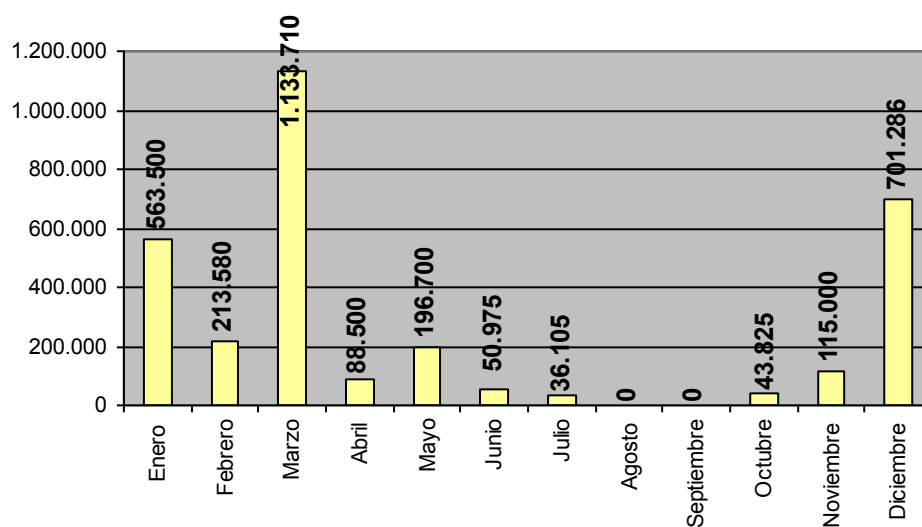
Personas aprehendidas por mes, FELCN 2005 (Operativos Importantes)



Cantidad de droga incautada en operativos importantes el 2005, equivalente a 3.143.181 gramos, significa el 27% del total de droga incautada durante este año (11.669.115,10 grs.). Los meses en que se incautó mayor cantidad de droga fueron marzo, diciembre y enero. Durante los meses de agosto y septiembre no se registran operativos importantes.

ANEXO 16

Droga incautada (grs.) por mes, FELCN 2004 (Operativos Importantes)



ANEXO 17

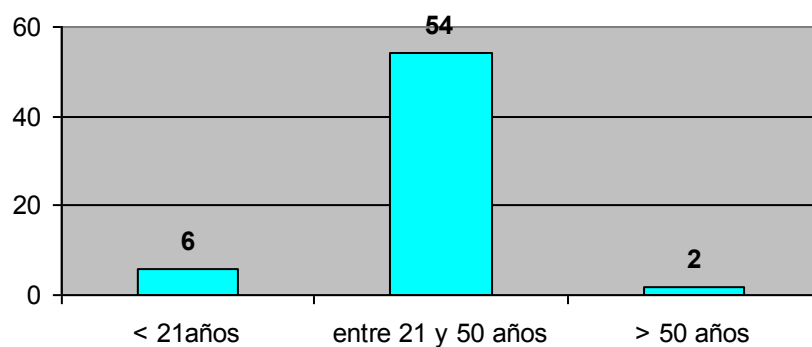
Personas aprehendidas por ocupación, FELCN 2004 (Operativos Importantes)

Ocupación	Nº
Agricultor	83
Conductor	13
Comerciante	26
Lavandera	1
Albañil	5
Estudiante	12
Labores de casa	6
Costurera	1
Electricista	1
Empleado	11
Mecánico	1
Ingeniero civil	1
Carpintero	1
Total	172

Fuente: elaboración propia de acuerdo
A datos proporcionados por la FELCN

ANEXO 18

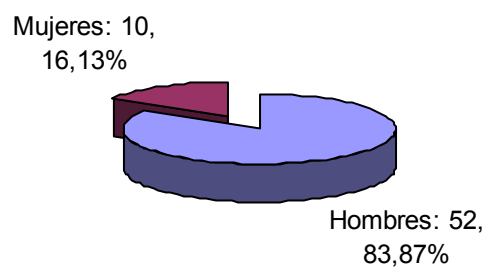
Personas aprehendidas por edades, FELCN 2003 (Operativos Importantes)



Las edades de las personas aprehendidas en el 2003 (en operativos importantes) que oscilan entre 21 y 50 años representan un 87,10%; los menores de 21 años significan un 9,68%; y las personas mayores de 50 años representan un 3,23%.

ANEXO 19

Personas aprehendidas por sexo, FELCN 2003 (Operativos Importantes)



ANEXO 20**Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas****Ley N° 1008 de 19 de Julio de 1988****VICTOR PAZ ESTENSORO****PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA****Por cuanto el Honorable Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley:****EL H. CONGRESO NACIONAL****DECRETA:****LEY DEL RÉGIMEN DE LA COCA Y SUSTANCIAS CONTROLADAS****TITULO II****SUSTANCIAS CONTROLADAS****CAPITULO I****DE LA TERMINOLOGÍA**

Artículo 32°.- SIGNIFICADO LEGAL: La terminología usada en la presente ley tendrá el significado corriente, pero si ella ha sido expresamente definida en su texto, esta definición será la de aplicación obligatoria.

Artículo 33°.- Para los efectos de la presente ley se entiende por:

a) SUSTANCIAS CONTROLADAS: Se entiende por sustancias controladas, las sustancias peligrosas o sustancias fiscalizadas, los fármacos o drogas naturales o sintéticas consignadas en las listas I, II, III, IV y V del anexo de la presente ley; y las que en el futuro figuren en las listas oficiales del Ministerio de Salud Pública.

b) DROGA O FARMACO: Es toda sustancia capaz de alterar las estructuras o las funciones corporales, psíquicas, fisiológicas y/o biológicas, ocasionen o no dependencia y/o tolerancia.

c) TOLERANCIA: Es la propiedad por la cual, para inducir u obtener el mismo efecto, es necesario aumentar la dosis utilizada.

d) DEPENDENCIA FISICA: Es el estado de adaptación a la droga, que cuando se suspende su administración, provoca perturbaciones físicas y/o corporales.

e) DEPENDENCIA PSIOUICA: Es el estado en que una droga produce una sensación de satisfacción y un impulso psíquico que exige la administración periódica o continua de la misma por el placer que causa o para evitar malestar.

f) **DEPENDENCIA QUIMICA O FARMACODEPENDENCIA:** Es el estado psíquico y/o físico, debido a la interacción entre el ser humano y la droga, natural o sintética, que se caracteriza por alteraciones del comportamiento y otras reacciones causadas por la necesidad y el impulso de ingerir la droga natural o sintética, en forma continua o periódica, con objeto de volver a experimentar sus efectos y a veces para evitar el malestar producido por la privación de la misma.

g) **PRECURSOR INMEDIATO:** Se entiende por precursor inmediato la materia prima o cualquiera otra sustancia no elaborada, semielaborada, por elaborar o elaborada que sirva para la preparación de sustancias controladas.

h) **ADMINISTRAR:** Por administrar se entiende la aplicación directa de una sustancia controlada al individuo, sea por inyección, inhalación, ingestión o por cualquier otro medio.

i) **ENTREGA O SUMINISTRO:** Se entiende por entrega o suministro el traspaso o provisión de una sustancia controlada entre personas, sin justificación legal para tal acto.

j) **PRESCRIPCION O DESPACHO ILICITO:** Es prescripción o despacho ilícito, ordenar, recetar o facilitar sustancias controladas no necesarias o en dosis mayores a

las indispensables, por profesionales de especialidades médicas (médicos, odontólogos, veterinarios y farmacéuticos y otros).

k) PRODUCCION DE MATERIA PRIMA VEGETAL: Se entiende por producción la siembra, plantación, cultivo, cosecha y/o recolección de semillas o materias vegetales que contengan sustancias controladas.

l) FABRICACION: Se entiende por fabricación cualquier proceso de extracción, preparación, elaboración, manufactura, composición, refinación, transformación o conversión que permita obtener por cualquier medio, directa o indirectamente, sustancias controladas.

ll) POSESION: Se entiende por posesión la tenencia ilícita de sustancias controladas, materias primas o semillas de plantas de las que se puedan extraer sustancias controladas.

m) TRAFICO ILICITO: Se entiende por tráfico ilícito de sustancias controladas todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título; financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas.

n) CONSUMO: Se entiende por consumo el uso ocasional, periódico, habitual o permanente de sustancias controladas, de las listas I, II, II, IV.

o) REHABILITACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se entiende por rehabilitación la readaptación biopsíquico-social del consumidor para su reincorporación a la actividad normal de la sociedad.

p) FISCALIZACION: Es la acción del poder público destinada al control de las sustancias peligrosas o controladas, en cualquiera de sus fases.

q) INTERDICCION: Es la prohibición y la acción para prevenir y reprimir el tráfico ilícito de sustancias controladas.

CAPITULO II

DE LA PROHIBICIÓN Y CONTROL

Artículo 34°.- PROHIBICION DE PRODUCCION Y CONSERVACION DE PLANTAS Y SEMILLAS: Quedan prohibidas en todo el territorio de la República la producción o conservación de plantas y semillas a que se refiere el inciso k) del artículo 33° de esta ley. El Régimen de la coca queda sujeto a lo establecido en el Título Primero.

Artículo 35°.- PROHIBICION DE POSESION O DEPOSITO: Ninguna persona natural o jurídica podrá tener o poseer en forma, cantidad o sitio alguno, fármacos o drogas que contengan o sean sustancias controladas, sin previa autorización del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, consultada al Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas.

Artículo 36°.- IMPORTACIÓN y COMERCIALIZACION: Las sustancias químicas enumeradas en la lista V del anexo y las que se agreguen posteriormente a la misma, por resolución del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y los productos y medicamentos que sean o tengan sustancias controladas, sólo podrán ser importados y/o comercializados con licencia de dicho Ministerio, previo informe favorable del Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas.

Artículo 37°.- TRAFICO y CONSUMO: Queda prohibido el tráfico, fraccionamiento y consumo de sustancias controladas consignadas en la lista I del anexo de la presente ley.

Artículo 38°.- AUTORIZACIÓN: El Ministerio de Previsión Social y Salud Pública podrá autorizar la importación y/o adquisición limitada de sustancias controladas consignadas en la lista 1 con fines de investigación a instituciones científicas, universitarias y estatales, así como a laboratorios e industrias químico-farmacéuticas,

las que deberán informar al Ministerio de Previsión Social y Salud Pública periódicamente, la forma de utilización, cantidades utilizadas y/o resultados de los estudios. Igual autorización se requerirá para la exportación de sustancias controladas con fines lícitos.

Artículo 39°.- FABRICACIÓN, FRACCIONAMIENTO Y EXPENDIO: Los laboratorios e industrias químico4armacéuticas, podrán fabricar y/o fraccionar medicamentos que contengan sustancias controladas consignadas en las listas 11,111 y IV del anexo, previa licitación del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, debiendo hacer conocer la cantidad, contenido y naturaleza de sus productos. Estos se expendrán al público únicamente en establecimientos y farmacias autorizadas y sólo mediante receta médica en formularios del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública.

Artículo 40°.- INFORMES SOBRE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: Las Aduanas Distritales remitirán al Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y al Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, copias de las pólizas de importación y exportación del producto o materias primas que contengan sustancias controladas, en el término de 48 horas de su expedición, bajo responsabilidad del Administrador Distrital.

Artículo 41°.- OBLIGACIÓN DE LOS PORTEADORES: Las empresas públicas y privadas de transporte aéreo, terrestre, marítimo, lacustre y fluvial, así como los transportistas independientes exigirán obligatoriamente, la autorización del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y del Consejo Nacional Contra el Uso Indevido y Tráfico Ilícito de Drogas, para el embarque y transporte de sustancias controladas y/o medicamentos que las contengan con la obligación de informar mensualmente de estas actividades.

Artículo 42°.- REGISTRO DE INSUMOS: Los laboratorios industriales, empresas químicas, químico-farmacéuticas, importadores e industriales están obligados a su registro en el Consejo Nacional Contra el Uso Indevido y Tráfico Ilícito de Drogas, al que informarán mensualmente sobre los insumos de materias controladas que utilicen.

Artículo 43°.- DIVISAS Y ACREDITIVOS: El Banco Central de Bolivia y todos los demás Bancos exigirán para la venta de divisas y apertura de acreditivos, con destino a la importación de medicamentos y materias primas que contengan o sean sustancias controladas, certificado de registro del solicitante y autorización expedida por el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, en consulta con el Consejo Nacional Contra el Uso Indevido y Tráfico Ilícito de Drogas.

Artículo 44°.- REGULACIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL DE PRECURSORES: La producción nacional de sustancias controladas de la lista V del anexo, así como la supervisión, incluyendo su control y comercialización, serán reguladas por los Ministerios de Previsión Social y Salud Pública, Energía e Hidrocarburos e Industria y Comercio, con informe del Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas.

Artículo 45°.- PROHIBICIÓN A CÓNSULES Y AGENTES ADUANEROS: Se prohíbe a los cónsules y agentes aduaneros de Bolivia en el exterior, expedir facturas comerciales de control y legalizar manifiestos de carga para la importación de sustancias controladas indicadas en el artículo anterior, sin previa presentación del documento de licencia otorgado conforme a los artículos 36° y 43° de la presente ley.

Los cónsules y agentes aduaneros remitirán mensualmente al Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, informe detallado de facturas comerciales expedidas para la importación de sustancias controladas, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

TITULO III

DE LOS DELITOS Y LAS PENAS

Artículo 46°.- PLANTAS CONTROLADAS: El que ilícitamente sembrare, plantare, cosechare, cultivare o colectare plantas o partes de plantas señaladas por el anexo a que se refiere el inciso a) del artículo 33° de la presente ley, será sancionado con la pena de uno a dos años de presidio, en caso de reincidencia de dos a cuatro años y de doscientos cincuenta a quinientos días de multa.

Artículo 47°.- FABRICACIÓN: El que fabricare ilícitamente sustancias controladas, será sancionado con presidio de cinco a quince años y dos mil quinientos a siete mil quinientos días de multa.

Las personas dedicadas al proceso de maceración de coca llamados "pisa coca", serán sancionados con la pena de presidio de uno a dos años y de doscientos a quinientos días de multa, siempre que colaboren con la investigación y captura de sus principales.

Artículo 48°.- TRAFICO: El que traficare con sustancias controladas será sancionado con presidio de diez a veinticinco años y diez mil a veinte mil días de multa.

Constituye circunstancia agravante el tráfico de sustancias controladas en volúmenes mayores.

Este artículo comprende toda conducta contemplada en la definición de tráfico dada en el inciso m) del artículo 33° de esta ley.

Artículo 49°.- CONSUMO Y TENENCIA PARA EL CONSUMO: El dependiente y el consumidor no habitual que fuere sorprendido en posesión de sustancias controladas en cantidades mínimas que se supone son para su consumo personal inmediato, será internado en un instituto de fármaco dependencia público o privado para su tratamiento hasta que se tenga convicción de su rehabilitación. La cantidad mínima para consumo personal inmediato será determinada previo dictamen de dos especialistas de un instituto de fármaco dependencia público. Si la tenencia fuese mayor a la cantidad mínima caerá en la tipificación del artículo 48° de esta ley.

A los ciudadanos extranjeros sin residencia permanente en el país que incurran en la comisión de estos hechos se les aplicará la ley de residencia y multa de quinientos a mil días.

Artículo 50°.- ADMINISTRACIÓN: El que ilícitamente administrare a otros, sustancias controladas, será sancionado con diez a quince años de presidio y mil quinientos a tres mil días de multa, cualquiera fuere la cantidad administrada.

Artículo 51°.- SUMINISTRO: El que suministrare ilícitamente a otros sustancias controladas, será sancionado con presidio de ocho a doce años y mil a dos mil días de multa, cualquiera sea la cantidad suministrada.

Artículo 52°.- AGRAVANTES: Si como consecuencia de la administración o suministro ilícito de sustancias controladas resultare un quebrantamiento grave de la salud, la sanción será de quince a veinte años de presidio y mil a tres mil días de multa.

Si del hecho resultare la muerte de la persona, la sanción será de veinte a treinta años de presidio.

Artículo 53°.- ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y CONFABULACIÓN: Los que se organicen en grupo de dos o más personas para la comisión de los tipos penales establecidos en la presente ley, serán sancionados con un tercio más de la pena principal.

Artículo 54°.- INDUCCIÓN: El que indujere a otro al uso indebido de sustancias controladas, será sancionado con cinco a diez años de presidio y dos mil a cuatro mil días de multa.

Si el inductor aprovechar su condición de ascendiente o autoridad sobre el inducido o éste fuera menor de edad o incapaz o el delito se cometiera en establecimientos educativos, asistenciales, militares, policiales o penitenciarios o en sus inmediaciones, la pena será de diez a veinte años de presidio y cuatro mil a ocho mil días de multa.

Artículo 55º.- TRANSPORTE: El que ilícitamente y a sabiendas trasladare o transportare cualquier sustancia controlada, será sancionado con ocho a doce años de presidio y mil a mil quinientos días de multa e incautación definitiva del motorizado o medios de transporte.

Artículo 56º.- INSTIGACIÓN: El que instigare o incitare a otro a la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en el presente Título, será sancionado con cuatro a seis años de presidio y dos mil a tres mil días de multa. Sí el instigado fuere menor o incapaz, la pena será de cinco a diez años de presidio y dos mil a cuatro mil días de multa.

Artículo 57º.- ASESINATO: El homicidio causado por expreso propósito mediante uso de sustancias controladas, equivale al uso de veneno, que constituye delito de asesinato conforme al artículo 17 de la Constitución Política del Estado y al inciso 5) del artículo 252 del Código Penal.

Artículo 58°.- FALSIFICACIÓN: El que adulterare o falsificare receta médica con objeto de obtener sustancias controladas, será sancionado con tres a cinco años de presidio y doscientos a cuatrocientos días de multa.

El que adulterare y/o falsificare licencias, permisos, pólizas de importación, facturas, cartas de porte u otros documentos para internar al país sustancias controladas, será sancionado con ocho a quince años de presidio y tres mil a seis mil lías de multa.

Artículo 59°.- IMPORTACIÓN: El importador de sustancias controladas que no cumpliera con los requisitos exigidos por la presente ley, será sancionado con la suspensión de su registro de importador por el término de doce meses y diez mil días de multa. En caso de reincidencia, se impondrá la cancelación definitiva de su registro. El importador y su personero legal responsable será pasible de las penas establecidas por el artículo 48°.

Artículo 60°. OBLIGACION DE DENUNCIA POR EL PROPIETARIO: El propietario que tuviere conocimiento de que en sus predios o inmuebles se siembre, cultive, coseche, colecte plantas o partes de, plantas controladas a las que se refiere la presente ley, o que se fabriquen o elaboren sustancias controladas y no comunique

estos hechos a las autoridades competentes, será sancionado con tres a cinco años de presidio e incautación o reversión de su propiedad.

Artículo 61°.- ENCUBRIMIENTO EN LOCALES PÚBLICOS: Los propietarios, gerentes, administradores o concesionarios de hoteles, moteles, restaurantes, confiterías, clubes, bares, locales de diversión, prostíbulos, casas de cita, hospitales, clínicas y otros establecimientos abiertos al público, están obligados a informar a las autoridades competentes sobre la presencia de personas que trafiquen, posean o consuman sustancias controladas bajo la sanción de uno a dos años de presidio y quinientos a mil quinientos días de multa. En caso de comprobarse permisibilidad, encubrimiento o complicidad será sancionado de dos a seis años de presidio y de dos mil a cuatro mil días de multa.

Artículo 62°.- OBLIGACIÓN DE PROFESIONALES: Los profesionales de ramas médicas y de otras, en cuyo ejercicio tuvieran facultad de expedir recetas sobre sustancias controladas y que lo hagan sin llenar las formalidades previstas por disposiciones legales, serán sancionados de conformidad al Código de Salud más dos mil a cuatro mil días de multa. En caso de reincidencia serán sancionados con inhabilitación definitiva del ejercicio profesional, con presidio de dos a cinco años.

Artículo 63º.- VENTA EN FARMACIA: El propietario, regente o empleado de droguería, farmacia o local de comercio autorizado para la venta de medicamentos, que despacharen sustancias controladas sin llenar las formalidades previstas en las disposiciones legales, serán sancionados en la siguiente forma:

a) El propietario, con la clausura de su establecimiento por el término de seis meses y dos mil a cuatro mil días de multa. Además, con un año de suspensión, si fuere profesional.

b) El regente, con un año de suspensión del ejercicio profesional y mil a dos mil días de multa.

c) El empleado o dependiente, si resultare responsable, con quinientos a mil días de multa.

En caso de reincidencia o habitualidad, las sanciones serán las siguientes:

1) Al propietario profesional, cancelación de su registro e inhabilitación definitiva del ejercicio profesional, clausura definitiva del establecimiento y presidio de dos a cinco años.

2) Al propietario no profesional, presidio de dos a cinco años y clausura definitiva de su establecimiento.

3) Al regente, presidio de dos a cinco años e inhabilitación definitiva del ejercicio profesional.

4) Al empleado o dependiente, presidio de dos a cinco años.

Artículo 64°.- INVENTARIOS Y REGISTROS: Los responsables de firmas importadoras, droguerías, farmacias o locales autorizados para el expendio o suministro de medicamentos con sustancias controladas, cuya existencia en depósitos no guarden relación con sus inventarios y registros, serán sancionados con dos mil a cuatro mil días de multa y la incautación de la mercadería. En caso de reincidencia o habitualidad, se impondrá de dos a cuatro años de presidio y la clausura definitiva del establecimiento.

Artículo 65°.- FUNCIONARIOS PÚBLICOS: Cuando autoridades, funcionarios, empleados públicos, cometieren los delitos tipificados en esta ley, participaren de ellos en ejercicio de sus funciones o empleos o se valieren de ellos, la sanción se agravará en un tercio de lo establecido, además de la inhabilitación definitiva para el ejercicio de la función pública.

Artículo 66°.- COHECHO PASIVO: El funcionario, empleado o autoridad que para hacer o dejar de hacer algo con referencia a la presente ley, recibiere directa o

indirectamente para sí o para otros dádivas o aceptare ofrecimientos o promesas, serán sancionados con presidio de ocho a doce años y de dos mil a cinco mil días multa.

La sanción será de doce a veinte años de presidio y tres mil a seis mil días multa si se tratare de un Juez, Magistrado, representante del Ministerio Público o miembro de los órganos encargados de la represión al narcotráfico. En todos los casos a que se refiere este artículo se impondrá inhabilitación definitiva.

Artículo 67°.- COHECHO ACTIVO: En casos comprobados, el que directa o indirectamente diere u ofreciere, aunque no fueren aceptadas, dádivas o recompensas de cualquier tipo a un funcionario, empleado público o autoridad, para él o un tercero, con el propósito de que haga u omita un acto referente al cumplimiento de la presente ley, será sancionado con cuatro a ocho años de presidio y de mil a dos mil días multa.

Si la dádiva o recompensa se hiciera u ofreciere a un Juez, Magistrado, representante del Ministerio Público o miembro de los órganos de represión o interdicción al narcotráfico, la pena será de ocho a doce años de presidio y tres mil a seis mil días multa.

Artículo 68°.- CONCUSIÓN PROPIA: El funcionario, empleado público o autoridad que valiéndose de sus funciones o mediante amenaza obtuviere un provecho ilícito

relacionado con el tráfico de sustancias controladas será sancionado con ocho a doce años de presidio y dos mil a cuatro mil días multa.

Artículo 69°.- CONCUSIÓN IMPROPIA: Cuando los actos a que se refiere el artículo anterior sean cometidos por un particular, que simule ser funcionario, empleado público o autoridad, la sanción será de diez a quince años de presidio y tres mil a seis mil días multa.

Artículo 70°.- ALTERACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL OBJETO DEL DELITO: El que ordenare alterar o alterare cualitativa o cuantitativamente o sustituyere el cuerpo del delito o los medios de comprobación del mismo que hayan sido decomisados o secuestrados. Será sancionado con diez a quince años de presidio y mil a dos mil días multa.

Artículo 71°.- CONFISCACIÓN DE BIENES: Además de las sanciones establecidas en los artículos anteriores, se impondrán las siguientes:

a) La confiscación en favor del Estado de las tierras donde se fabriquen sustancias controladas y cultiven plantas especificadas prohibidas en la presente ley. Las tierras fiscales dadas por dotación se revertirán al Estado.

b) La confiscación en favor del Estado, a nombre del Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, de inmuebles, muebles, enseres, armas, dineros y valores, medios de transporte, equipos, materias primas y laboratorios y cualquier medio que haya servido para elaborar, procesar, fabricar y transportar sustancias controladas; los aviones, avionetas, helicópteros y material de vuelo en favor de la Fuerza Aérea de Bolivia y las embarcaciones fluviales, lacustres y material de navegación en favor de la Armada Boliviana.

La incautación de bienes inmuebles citados en los incisos a) y b) del presente artículo procederá contra el propietario, cuando éste haya tomado parte en el delito o conocido su comisión, no lo hubiera denunciado.

Los bienes confiscados se destinarán, preferentemente, a programas de prevención, educación, salud y la creación de centros de rehabilitación independientemente de los fondos destinados a la construcción de penitenciarías señaladas por ley.

Artículo 72°.- EVASIÓN: El que se evadiera estando legalmente detenido por comisión de alguno de los delitos tipificados en esta ley, además de la pena principal, será sancionado con dos a cuatro años de presidio y dos mil a cuatro mil días multa

Si el delito fuere cometido por culpa, recibirá las dos terceras partes de las penas establecidas en este artículo.

Artículo 74°.- EXCARCELACIÓN: El funcionario público que con-ceda la salida ilícita de algún detenido, en relación con los delitos previstos en la presente ley, será sancionado con cuatro a ocho años de presidio y dos mil a cuatro mil días multa Se prohíben las internaciones médicas fuera de los recintos carcelarios de los procesados por los delitos tipificados en la presente ley.

Artículo 75°.- ENCUBRIMIENTO: La persona que después de haber cometido un delito previsto en la presente ley, sin promesa anterior, ayudare a alguien a eludir la acción de la justicia, será sancionado con cuatro a seis años de presidio y mil a dos mil días multa.

Procederá excepción de sanción con referencia a ascendientes, descendientes, cónyuge o conviviente.

Artículo 76°.- COMPLICIDAD: El cómplice de un delito relativo a sustancias controladas, será sancionado con dos terceras partes de la pena imponible al autor.

Artículo 77°.- RECEPCIÓN: El receptor de un delito relativo a sustancias controladas, recibirá la mitad de la pena imponible al autor.

Artículo 78°.- USO DE ARMAS: Sufrirá la agravante de la mitad de la pena que le corresponde, el que, en la comisión de un delito tipificado en la presente ley o para resistir a la autoridad, usare armas.

Si causare lesiones será agravada con dos terceras partes de la pena principal y en caso de muerte, sufrirá la pena correspondiente al asesinato.

Artículo 79°.- APOLOGÍA DEL DELITO: Los que de manera tendenciosa, falsa o sensacionalista hicieren por cualquier medio, pública apología de un delito o de una persona procesada o condenada por narcotráfico, serán sancionados con dos a cinco años y dos mil a cuatro mil días multa.

FUENTE: GACETA OFICIAL DE BOLIVIA (solo la parte pertinente).